



**Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos**

Distr. general
12 de diciembre de 2013
Español
Original: árabe

Comité de Derechos Humanos

**Examen de los informes presentados por los
Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto**

**Quintos informes periódicos que los Estados partes debían
presentar en 2000**

Iraq*

[16 de octubre de 2013]

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.

GE.13-49618 (EXT)



* 1 3 4 9 6 1 8 *

Se ruega reciclar 



Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–24	3
II. Información sobre los artículos 1 a 27	25–243	7
Artículo 1	25–48	7
Artículo 2	49–55	13
Artículo 3	56–69	15
Artículo 4	70–71	19
Artículo 5	72	20
Artículo 6	73–87	20
Artículo 7	88–103	23
Artículo 8	104–111	28
Artículo 9	112–120	31
Artículo 10	121–126	34
Artículo 11	127–129	36
Artículo 12	130–132	37
Artículo 13	133–137	38
Artículo 14	138–145	39
Artículo 15	146–148	43
Artículo 16	149–152	44
Artículo 17	153	44
Artículo 18	154–159	45
Artículo 19	160–161	47
Artículo 20	162–165	47
Artículo 21	166–177	48
Artículo 22	178–183	51
Artículo 23	184–191	52
Artículo 24	192–196	55
Artículo 25	197–206	56
Artículo 26	207–224	58
Artículo 27	225–243	62

I. Introducción

1. La República del Iraq subraya su compromiso con la aplicación de los pactos y tratados internacionales de derechos humanos y cree en la importancia de la materialización de los derechos, y en particular de los derechos civiles y políticos por las consecuencias directas que tienen sobre la vida de las personas y las sociedades, a la vez que reafirma también su creencia en la eficacia y la utilidad de los mecanismos de los tratados de derechos humanos, que son un instrumento muy valioso de promoción del sistema internacional de protección de estos derechos. En este contexto, y como expresión de nuestra confianza en el derecho internacional y nuestra firme determinación de apoyar la labor de estos mecanismos y del Consejo de Derechos Humanos, presentamos este informe a su distinguido Comité, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tras los cambios profundos que se han producido en el país desde 2003 en todos los ámbitos políticos y económicos. Este informe abarca los acontecimientos más recientes en la esfera de los derechos civiles y políticos enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Boletín Oficial e integrado en el derecho iraquí.

2. Este informe ha sido preparado conjuntamente con otras instituciones del Estado incluidas en un comité multisectorial compuesto por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Planificación y de Cooperación para el Desarrollo y el Ministerio de Desplazamientos y Migraciones. La preparación del informe coincidió con otro esfuerzo nacional, a saber, la formulación de un plan nacional para los derechos humanos, entre los que los derechos civiles y políticos ocupaban un lugar destacado.

3. El Gobierno de la República del Iraq ha estudiado con interés las observaciones finales del Comité, en particular las que se referían a los factores y dificultades que obstaculizaban la aplicación del Pacto (como el hecho de que el régimen dictatorial no hubiese proporcionado información al pueblo iraquí sobre dichas observaciones, como se lo pedía el Comité), y muestra su acuerdo con las observaciones finales realizadas por el Comité tras tomar en consideración el cuarto informe periódico del Iraq en sus sesiones 1626ª y 1627ª, de 27 de octubre de 1997. A este propósito, quisiéramos comentar a continuación los principales motivos de preocupación de su distinguido Comité y las recomendaciones que amablemente formuló.

4. Estamos de acuerdo con la opinión del Comité de que "ocho años de guerra con la República Islámica del Irán y el conflicto consecutivo a la invasión de Kuwait por parte del Iraq han causado la destrucción de una parte de la infraestructura del país así como grandes sufrimientos humanos, y han producido una situación económica y social muy difícil en el Iraq". También estamos de acuerdo con la observación del Comité de que "el efecto de las sanciones y bloqueos ha sido causar sufrimientos y muertes en el Iraq, especialmente entre los niños" (CCPR/C/79/Add.84).

5. Coincidimos con las opiniones del Comité sobre los principales motivos de preocupación mencionados en el documento CCPR/C/79/Add.84, a algunos de los cuales es preciso hacer referencia.

6. Con respecto al apartado B de las observaciones (Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto), nos gustaría recordar al distinguido Comité que, durante los últimos decenios, el Iraq ha sido el escenario de operaciones militares en gran escala que, en algunos casos (las tres guerras del Golfo en los decenios de 1980, 1990 y principios del siglo actual) se prolongaron durante muchos años y provocaron la

militarización de la sociedad, lo que tuvo repercusiones directas sobre el ejercicio de los derechos humanos. La imposición al Iraq de sanciones económicas y bloqueos a lo largo del decenio de 1990, en virtud de la resolución 661 de 6 de agosto de 1990 del Consejo de Seguridad, adoptada de conformidad con el artículo 41 del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y que siguió en vigor hasta la adopción de la resolución 1483 de 22 de mayo de 2003 del Consejo de Seguridad, tuvo un efecto negativo directo sobre las condiciones de vida del pueblo iraquí y sus consecuencias todavía lastran gravemente los esfuerzos del Gobierno por reconstruir la infraestructura, que siguió siendo el objetivo de actos violentos desde el cambio de régimen en la primavera de 2003.

7. El terrorismo ha supuesto un desafío serio a la aplicación de la política del Gobierno en la esfera de los derechos humanos puesto que no solo constituye, *per se*, una violación de muchos de estos derechos sino que además es un instrumento eficaz para crear las condiciones y el contexto propicios para cometer infracciones y violaciones de los mismos. Los años inmediatamente posteriores al derrocamiento del régimen dictatorial en la primavera de 2003 se cuentan entre los más violentos y estuvieron marcados por las violaciones directas y sistemáticas de la legislación internacional sobre derechos humanos, lo que incluye la violación del derecho a la vida de un gran número de civiles, incluidas mujeres, niños y ancianos, así como personas con algún tipo de discapacidad, la destrucción de lugares de culto y ataques a personas con diferentes creencias religiosas. Las operaciones terroristas (ataques con bomba, asesinatos, secuestros y desplazamientos forzosos) realizadas por grupos al margen de la ley han adquirido proporciones alarmantes y han planteado un reto considerable no solo en relación con el respeto de la ley sino también con la simple supervivencia de las personas. Durante el período que va de 2003 a 2011 unas 70.000 personas resultaron muertas y 250.000 heridas a consecuencia de estas operaciones terroristas, a las que se hará ulterior referencia en este informe.

8. De conformidad con el Decreto N° 111 de 1990 del Consejo de Mando de la Revolución, se declaraban no punibles a quienes cometiesen "delitos de honor" que implicasen la muerte de familiares femeninos para limpiar manchas de honor. Aunque este decreto fue revocado, el régimen dictatorial lanzó, con el fin de reforzar su dominio sobre la sociedad iraquí, la llamada "campaña de la fe", durante la que muchas mujeres fueron decapitadas por las espadas de los *fedayines* de Saddam (milicias paramilitares), sin pasar por los tribunales, bajo el pretexto de combatir la prostitución de acuerdo con el Decreto N° 234 de 2001 del Consejo de Mando de la Revolución, en el que se establecía que: "Toda persona que cometa el delito de sodomía contra un hombre o una mujer, esté implicada en un acto incestuoso con una persona con la que mantenga lazos de consanguinidad en alguno de los grados prohibidos, o que sea descubierta practicando la prostitución, ofreciendo sus favores o regentando un local donde se ejerza la prostitución será castigada con la pena de muerte".

9. Con respecto a la recomendación del párrafo 7 de las observaciones finales, después de 2003 el sistema totalitario centralizado fue sustituido por un sistema parlamentario federal con tres poderes independientes (ejecutivo, judicial y legislativo). En la Constitución iraquí de 2005 se definen estos poderes de la forma que se describe en los párrafos 36 a 43 de este informe.

10. Con respecto a la recomendación del párrafo 8 de las observaciones finales, hasta 2003 se siguieron produciendo ejecuciones extrajudiciales bajo el régimen dictatorial, que utilizó las ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos a manos de los miembros de las fuerzas de seguridad y militares, así como la desaparición de miles de personas en el norte del Iraq y en las marismas del sur, y los reasentamientos forzosos como un medio para liquidar a sus adversarios políticos, a personalidades religiosas y símbolos nacionales y para realizar una limpieza étnica de kurdos feyli y shabak. Las fosas comunes también se convirtieron en un fenómeno generalizado en

muchas partes del Iraq, donde miles de ciudadanos (hombres, mujeres y niños) fueron enterrados durante la feroz represión por el régimen dictatorial de los levantamientos populares que se iniciaron en marzo de 1991. Muchos miembros de las fuerzas represivas de seguridad, así como la cabeza del régimen, que tuvieron responsabilidad en la comisión de tales delitos, fueron juzgados públicamente y condenados, en virtud de los procedimientos judiciales en vigor en el Iraq, por el Tribunal Supremo Penal iraquí que había sido creado, de acuerdo con la Ley N° 10 de 2005, para juzgar los crímenes cometidos por el antiguo régimen dictatorial.

11. Con respecto a la recomendación del párrafo 9 de las observaciones finales, los decretos provisionales del Consejo de Mando de la Revolución, que tenían carácter de ley y obstaculizaban el respeto de ciertos derechos consagrados en el Pacto, como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el principio de la irretroactividad de las leyes penales, habían sido promulgados para cumplir los fines del régimen dictatorial sin importar dichos derechos, que solo pueden ser suspendidos de conformidad con el artículo 4 del Pacto.

12. Con respecto a la recomendación del párrafo 10 de las observaciones finales sobre los Decretos N° 13 de 1992, N° 9 de 1993, N° 86, N° 95, N° 179 y N° 188 de 1994, y N° 16 de 1995 del Consejo de Mando de la Revolución, que establecían penas de muerte para nuevos tipos de delito, incluidas infracciones de carácter no violento y económicas, distintas de las definidas en el Código Penal iraquí (promulgado por la Ley N° 111 de 1969), dichos decretos dejaron de estar vigentes después de 2003.

13. Con respecto a la recomendación del párrafo 11 de las observaciones finales sobre el Decreto N° 115 de 25 de agosto de 1994 del Consejo de Mando de la Revolución, que violaba lo dispuesto en el artículo 6, párrafo 2, del Pacto, en el que se limita la aplicación de la pena de muerte a "los más graves delitos", puesto que estipulaba la pena de muerte a las personas que hubiesen eludido el servicio militar varias veces y que contenía disposiciones retroactivas, contrarias al artículo 15 del Pacto, dicho decreto fue revocado después de 2003.

14. Con respecto a la recomendación del párrafo 12 de las observaciones finales sobre el cese de la imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes, que son incompatibles con el artículo 7 del Pacto, tales como la amputación de una oreja, la amputación de la mano derecha por debajo de la muñeca y la marca a fuego, de las que cabe citar como ejemplo las impuestas por el Decreto N° 109 de 18 de agosto de 1994 del Consejo de Mando de la Revolución, que estipulaba que toda persona cuya mano hubiese sido amputada por un delito que la ley castigase con esa pena sería marcada a fuego entre las cejas con el símbolo "X" y que esta disposición se aplicaría con carácter retroactivo a personas cuya mano ya hubiese sido amputada, estas penas fueron clasificadas después de 2003 como crímenes contra la humanidad para los que se estableció una disposición específica en el capítulo II, sección 2, artículo 12, párrafo 1 j), de la Ley N° 10 de 2005, en la que se establecía el Estatuto del Tribunal Supremo Penal iraquí (véase el anexo relativo a este Estatuto). Dichos decretos promulgados por el (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución fueron revocados por la Ley N° 5 de 2009, en la que se establecía una disposición para el pago de una indemnización a las víctimas que hubiesen sufrido una amputación o desfiguración como consecuencia de las prácticas del régimen dictatorial. De acuerdo con los datos recopilados por el Ministerio de Derechos Humanos, 200 víctimas habían sido sometidas a la amputación de manos o pies y 102 habían sido marcadas a fuego en la frente.

15. Con respecto a la recomendación del párrafo 13 de las observaciones finales sobre las medidas a adoptar para promover y garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida política, económica, social y cultural del país, así como para eliminar todas las formas de discriminación de hecho o de derecho contra la mujer, la respuesta puede hallarse en los párrafos 62 a 69, 213, 218 y 222 y 223 de este informe.

16. Con respecto a la recomendación del párrafo 14 de las observaciones finales sobre las restricciones arbitrarias impuestas por las autoridades a la libertad de circulación y de viaje, la respuesta puede hallarse en los párrafos 130 a 132 de este informe.

17. Con respecto a la recomendación del párrafo 15 de las observaciones finales sobre los tribunales especiales, facultados para imponer la pena de muerte y que no respetaban todas las garantías procesales prescritas por el artículo 14 del Pacto, en particular el derecho de apelación, así como a la observación del Comité de que, además de la lista de delitos que son competencia de los tribunales especiales, el Ministro del Interior y el Gabinete del Presidente de la República tenían poderes discrecionales para remitir cualquier otro caso a esos tribunales (lo que es contrario al principio de la independencia del poder judicial y al derecho de apelación), el artículo 95 de la Constitución iraquí de 2005 prohíbe la creación de tribunales especiales o excepcionales.

18. Con respecto a la recomendación del párrafo 16 de las observaciones finales sobre las restricciones rigurosas impuestas al derecho a la libertad de expresión, la respuesta puede hallarse en los párrafos 160 y 161 de este informe.

19. Con respecto a la recomendación del párrafo 17 de las observaciones finales, la respuesta puede hallarse en los párrafos 160 y 161 de este informe.

20. Con respecto a la recomendación del párrafo 18 de las observaciones finales sobre el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, reconocido en el artículo 25, apartados a) y b), del Pacto, la respuesta puede hallarse en los párrafos 197 a 206 de este informe.

21. Con respecto a la recomendación del párrafo 19 de las observaciones finales sobre los recursos efectivos puestos a disposición de toda persona cuyos derechos hayan sido violados por leyes, decretos o decisiones, la Constitución iraquí de 2005 no confiere a ningún órgano específico o institución la potestad de promulgar leyes y normas en sustitución del disuelto Consejo de Mando de la Revolución, que se arrogaba los tres poderes, puesto que la nueva Constitución respeta el principio de la separación de poderes para garantizar la interposición de recursos efectivos y conferir protección constitucional a los derechos de los ciudadanos.

22. Con respecto a la recomendación del párrafo 20 de las observaciones finales sobre las minorías étnicas y religiosas, y de otros grupos objeto de discriminación en el Iraq, en particular los chiíes de las marismas del sur y los kurdos del norte, y sobre la falta de información sobre la situación de otras minorías, como la turcomana, la asiria, la caldea y la cristiana, y a la remisión del Comité a su Observación general N° 23 (50) de 1994 sobre el artículo 27 del Pacto, la respuesta puede hallarse en los párrafos 207 a 216 y 238 a 243 de este informe.

23. Con respecto a la recomendación del párrafo 21 de las observaciones finales, la respuesta puede hallarse en los párrafos 180 a 183 de este informe.

24. Con respecto a la recomendación del párrafo 22 de las observaciones finales sobre el informe periódico que debió haberse presentado el 4 de abril de 2000 y a la petición del Comité de que sus observaciones finales se difundiesen ampliamente entre el público en general de todas las partes del Iraq, el anterior régimen dictatorial aplicaba una política de engaño y manipulación del pueblo iraquí y de falta de información al no difundir las observaciones del Comité. La transformación política del Iraq no se produjo de forma pacífica y conveniente; por el contrario, se realizó mediante el uso de la fuerza y la intervención militar, y las circunstancias extraordinarias que concurrieron en ese momento impidieron que el Iraq cumpliera sus obligaciones internacionales, incluido su compromiso acordado de presentar sus informes nacionales sobre la aplicación de tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

II. Información sobre los artículos 1 a 27

Artículo 1

25. En el marco de sus relaciones internacionales, la República del Iraq ha defendido sistemáticamente el derecho de libre determinación de los pueblos y los registros de las votaciones del Iraq y diversas actividades en las Naciones Unidas demuestran claramente su posición a este respecto. Una prueba muy evidente de ello es el apoyo del Iraq a la materialización de los derechos legítimos del pueblo palestino y, en particular, de su derecho a ejercer la libre determinación y establecer su Estado independiente en su territorio nacional.

26. El sistema de gobierno de la República del Iraq es republicano, representativo, parlamentario y democrático. Es un Estado federal único y plenamente soberano. El Estado iraquí, establecido en 1921 como monarquía, se convirtió en república el 14 de julio de 1958, pero el sistema de gobierno en los años posteriores, de 1958 a 1979, lejos de ser democrático, osciló entre un régimen liberal y uno dictatorial y, durante el período de 1979 a 2003, el país estuvo sometido a un régimen arbitrario, totalitario y dictatorial. En 2003 se produjo un cambio radical de un sistema muy centralizado, autocrático y dictatorial a un sistema de gobierno democrático.

Los Gobiernos del Iraq durante el período posterior al 9 de abril de 2003

27. En 2003 se creó un órgano conocido como la Oficina para la Reconstrucción y la Asistencia Humanitaria, bajo la dirección del oficial militar, ya retirado, de los Estados Unidos Jay Garner para administrar los asuntos del Iraq. El Embajador de los Estados Unidos Paul Bremer fue designado a continuación, el 19 de mayo de 2003, para dirigir la autoridad civil de la Coalición y, el 13 de julio de 2003, se creó un Consejo de Gobierno iraquí como órgano de asesoramiento compuesto por 25 miembros de diversos estamentos del pueblo iraquí.

28. La Autoridad Provisional de la Coalición en el Iraq fue la primera autoridad legalmente constituida para administrar los asuntos del país, de conformidad con la resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad, tras el derrocamiento del régimen dictatorial el 9 de abril de 2003. La Autoridad ejerció las facultades que se le habían atribuido en virtud de dicha resolución, en colaboración con el Consejo de Gobierno iraquí, cuyo establecimiento oficial fue anunciado el 15 de junio de 2003 y entre cuyos principales logros cabe mencionar la promulgación de la Ley administrativa de transición en marzo de 2004 y el anexo a la misma en mayo de ese mismo año, así como la creación de un gobierno ejecutivo compuesto por 25 ministerios.

29. El primer Gobierno Provisional se formó el 30 de junio de 2004 y asumió el poder ejecutivo y el poder legislativo para administrar el Estado en consonancia con la resolución 1546 (2004) del Consejo de Seguridad. Se creó un Consejo Nacional de Transición con el propósito básico, entre otras cosas, de preparar elecciones a una Asamblea Nacional que se encargaría de redactar una nueva constitución iraquí.

30. El 30 de enero de 2005 se celebraron elecciones para elegir los 100 miembros de la Asamblea Nacional cuya tarea básica sería redactar una constitución permanente para el país y preparar las elecciones parlamentarias generales, que se celebraron posteriormente el 15 de diciembre de 2005. La Constitución permanente del país fue aprobada el 15 de octubre de 2005 por una mayoría del 79,14% del número total de votantes.

31. Desde que el Iraq es un Estado federal, cuando la Constitución entró en vigor, la Región del Kurdistan empezó a ejercer las competencias que esta le atribuye como parte de

un Iraq unido. Las competencias de las regiones están definidas en el artículo 116 del capítulo quinto de la parte primera de la Constitución, en el que se establece que: "El sistema federal de la República del Iraq se compone de una capital, de regiones descentralizadas y de provincias, así como de administraciones locales". En el párrafo 1 del artículo 117 del mismo capítulo se establece además que: "Cuando entre en vigor esta Constitución, la Región del Kurdistan será reconocida como región federal y mantendrá sus actuales autoridades".

Forma y sistema de gobierno del Estado

32. En el artículo 1 de la Constitución se define la forma y el sistema de gobierno del Estado iraquí de la siguiente manera: "La República del Iraq será un Estado federal único, independiente y plenamente soberano que tendrá un sistema de gobierno republicano, representativo, parlamentario y democrático. Esta Constitución será garante de la unidad del Iraq".

33. En el artículo 2 se define el sistema jurídico del Estado de la siguiente manera:

1. El Islam será la religión oficial del Estado y una fuente fundamental de la legislación.

- a) No se promulgará ninguna ley contraria a los preceptos del Islam;
- b) No se promulgará ninguna ley contraria a los principios de la democracia;
- c) No se promulgará ninguna ley contraria a los derechos y libertades fundamentales previstos en esta Constitución.

2. La presente Constitución protegerá la identidad islámica de la mayoría del pueblo iraquí y garantizará el pleno derecho a la libertad de creencia y de práctica religiosa de todas las personas, sean cristianas, yazidíes o sabeo-mandeas.

34. En el artículo 3 se establece que: "El Iraq es un país multiétnico, multirreligioso y multiconfesional. Es miembro fundador y activo de la Liga de Estados Árabes, cuya Carta acata, y forma parte del mundo islámico".

35. El mecanismo para establecer un sistema democrático en el Iraq está definido en el artículo 5 de la Constitución, en el que se establece que: "La ley es soberana y el pueblo será la fuente legítima de poder, que ejercerá mediante el sufragio directo y universal y el voto secreto, y a través de sus instituciones constitucionales". El mecanismo para el traspaso de poder se define en el artículo 6 ("El traspaso de poder se hará pacíficamente a través de los procedimientos democráticos establecidos en esta Constitución").

Separación de poderes en el Iraq

36. De acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, a escala federal existe un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, que ejercen su jurisdicción y funciones en base al principio de la separación de poderes.

1. El poder legislativo

37. De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Permanente, el poder legislativo federal en el Iraq está compuesto por el Consejo de Representantes y el Consejo de la Federación. De acuerdo con el artículo 49, el Consejo de Representantes está compuesto por un número de miembros, en una proporción de un escaño por cada 100.000 habitantes, que representa al conjunto del pueblo iraquí. Son elegidos por sufragio directo y universal y mediante voto secreto, y se vela por que todos los estamentos del pueblo estén representados en el Consejo. En la presente legislatura, los candidatos a miembros del

Consejo de Representantes deben tener la nacionalidad iraquí y ser plenamente elegibles. La elegibilidad de los candidatos y la acreditación de los votantes, así como todos los procedimientos electorales, están regulados por la Ley electoral, que también establece que la representación proporcional de mujeres debe ser como mínimo de un cuarto del número total de miembros del Consejo de Representantes. Las funciones y poderes del Consejo de Representantes se especifican en el artículo 61 de la Constitución.

2. El poder ejecutivo

38. En el artículo 66 de la Constitución se establece que el poder ejecutivo federal, que está compuesto por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, ejercerá sus poderes de acuerdo con la Constitución y las leyes de la siguiente manera.

El Presidente de la República

39. De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución, el Presidente de la República es el Jefe del Estado y un símbolo de la unidad del país, cuya soberanía encarna. Tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la Constitución y de proteger la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial del Iraq. En virtud del artículo 73 de la Constitución, el Presidente de la República tiene numerosas facultades, en particular, la de conceder indultos, salvo que estén implicados derechos privados o personas condenadas por cometer crímenes internacionales o actos de terrorismo y de corrupción financiera o administrativa. El Presidente ratifica y promulga las leyes aprobadas por el Consejo de Representantes, emite decretos presidenciales y ratifica sentencias de muerte dictadas por los tribunales.

40. Debido a las características de la fase de transición del Iraq y las consiguientes circunstancias jurídicas y constitucionales, en el artículo 138 de la Constitución se establece la creación de un "Consejo de la Presidencia", expresión que sustituirá la de "Presidente de la República" en todas sus apariciones en la Constitución, a la vez que establece que las disposiciones relativas al Presidente de la República volverán a estar vigentes después de una sesión parlamentaria tras la entrada en vigor de la Constitución, en la que el Consejo de Representantes elegirá, a partir de una lista única y con una mayoría de dos tercios, el Jefe del Estado y dos Vicepresidentes que formarán un consejo llamado "Consejo de la Presidencia". El Consejo de la Presidencia, que tiene las facultades atribuidas por la Constitución al Presidente de la República, tomará sus decisiones por consenso y cualquier miembro tendrá el derecho de delegar en cualquiera de los otros dos miembros que le sustituirá.

El Consejo de Ministros

41. En el artículo 76 de la Constitución se establece que: "El Presidente de la República encargará al candidato electo del principal bloque parlamentario formar el Consejo de Ministros durante los 15 días posteriores a la elección del Presidente de la República. El Primer Ministro designado nombrará a los miembros de su Consejo de Ministros dentro de un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de su designación. El Primer Ministro designado presentará al Consejo de Representantes los nombres de los miembros de su Consejo de Ministros y el programa ministerial, y se considerará que ha obtenido la confianza del primero cuando este haya aprobado, por mayoría absoluta, los ministros individuales y su programa ministerial". En el artículo 77 se establecen las condiciones que debe cumplir el Primer Ministro. En el artículo 78 se establece que: "El Primer Ministro será la autoridad ejecutiva directamente responsable de la política general del Estado y será el comandante en jefe de las fuerzas armadas: dirigirá el Consejo de Ministros y presidirá sus reuniones, y tendrá el derecho de destituir ministros con el consentimiento del Consejo

de Representantes". En el artículo 80 se especifican las facultades que tiene el Consejo de Ministros del Iraq.

3. El poder judicial

42. Antes de 2003, la administración del poder judicial y de la Fiscalía del Estado correspondían al Consejo de Justicia en virtud de la Ley N° 101 de 1977 del Ministerio de Justicia, que supuso una regresión abrupta y peligrosa en la historia del poder judicial iraquí y un alejamiento del principio de la independencia de la justicia. Después de la disolución del anterior Consejo Judicial, en 1977, el desempeño de las funciones judiciales se vio gravemente perjudicado por el hecho de que los jueces podían ser trasladados sin ninguna justificación, asignados a otro puesto civil, destituidos, excluidos del ejercicio del derecho o incluso encarcelados. También se negaba a juristas destacados el acceso a puestos judiciales si no suscribían los dogmas políticos y la ideología del régimen.

43. Después del derrocamiento del régimen dictatorial en 2003, el poder judicial del Iraq formó el tercer pilar de las instituciones constitucionales iraquíes y fue reconocido como órgano independiente en la Constitución iraquí de 2005, en cuyo artículo 87 se establece que: "El poder judicial será independiente. Los tribunales de diverso tipo y nivel ejercerán este poder y dictarán sentencia con arreglo a las leyes". En el artículo 88 se establece además que: "Los jueces serán independientes y no estarán sujetos a otra autoridad que la ley en su administración de la justicia. Ninguna autoridad tendrá el derecho de interferir en la administración de la justicia o en los asuntos judiciales". El 18 de septiembre de 2003 se restableció el Consejo Judicial Superior, como órgano independiente situado en el escalón más alto de la jerarquía judicial. En virtud del artículo 89 de la Constitución, el poder judicial federal está compuesto por el Consejo Judicial Superior, el Tribunal Supremo Federal, el Tribunal de Apelación Federal, la Fiscalía del Estado, la Comisión de Control Judicial y otros tribunales federales regulados por ley. En los artículos 90 y 91 de la Constitución iraquí se establece que el Consejo Judicial Superior administrará los asuntos de los órganos judiciales mediante el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) Administración de los asuntos judiciales y supervisión de la judicatura federal;
- b) Nombramiento del Presidente y de los miembros del Tribunal de Apelación Federal, así como del Director de la Fiscalía del Estado y el Presidente de la Comisión de Control Judicial, y presentación de estos nombramientos al Consejo de Representantes para su aprobación;
- c) Propuesta del presupuesto anual del poder judicial federal y presentación de la misma al Consejo de Representantes para su aprobación.

En el artículo 92 de la Constitución se define la composición del Tribunal Supremo Federal de la siguiente manera: a) El Tribunal Supremo Federal será un órgano judicial independiente económica y administrativamente; b) El Tribunal Supremo Federal estará compuesto por jueces, expertos en jurisprudencia islámica y juristas; su número, forma de elección y procedimientos de actuación estarán regulados por una norma legal aprobada por una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo de Representantes. En el artículo 93 se define la jurisdicción y las funciones del Tribunal Supremo Federal. En el artículo 94 se establece que las normas del Tribunal Supremo Federal deben ser definitivas y vinculantes para todas las autoridades. En el artículo 95 se prohíbe la creación de tribunales especiales o de excepción. En el artículo 97 se establece que los jueces no serán cesados salvo en las circunstancias previstas en la ley, y también estarán reguladas por ley las normas y las medidas disciplinarias que les sean aplicables. Para consolidar el principio de la independencia del poder judicial, en el artículo 98 se prohíbe a los jueces o fiscales compaginar su puesto con otro en el Legislativo o el Ejecutivo, o con cualquier otro tipo de

empleo, y también que pertenezcan a un partido político u organización, o que intervengan en cualquier actividad política. En el artículo 99, sobre la judicatura militar, se establece que la jurisdicción de los tribunales militares se limitará a los delitos de carácter militar cometidos por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, dentro de los límites marcados por la ley. En el artículo 100 se estipula que no habrá acto o decisión de carácter administrativo que no pueda ser recurrido legalmente y en el artículo 101 de la Constitución se permite la creación de un Consejo de Estado para regular las funciones de los tribunales administrativos, formular y publicar dictámenes y representar al Estado y a otras instituciones públicas ante los órganos judiciales, salvo que la ley establezca otra cosa.

4. Comisiones independientes

44. La transformación radical y sustancial del sistema político después de 2003 supuso una línea divisoria entre dos etapas de la historia contemporánea del Iraq. En la Ley de administración del Estado del Iraq en el período de transición, que se promulgó en 2004, se introducía el concepto de "comisiones nacionales", de las que se crearon muchas. En el artículo 27, párrafo d), se establecía el Servicio de Inteligencia iraquí; en el artículo 44 del capítulo VI de la ley se establecía el Tribunal Supremo Federal; en el artículo 45 se establecía el Consejo Judicial Superior; y un capítulo entero estaba dedicado a las comisiones nacionales, como el Tribunal Especial del Iraq, la Comisión Nacional sobre la Integridad Pública, la Comisión de Reclamación de Propiedades Iraquíes, la Comisión Nacional Superior para la Desbaazificación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las normas que deben cumplir sus miembros. En el artículo 108 de la Constitución Permanente iraquí de 2005 se autorizaba la creación de comisiones independientes no vinculadas con ninguno de los tres poderes ya mencionados, a fin de evitar cualquier posibilidad de influencia sobre sus decisiones. Los presidentes y miembros de los órganos rectores de las comisiones independientes son escogidos entre expertos altamente competentes y destacados profesionalmente, de probada imparcialidad y sin propensión política o hacia ningún grupo, de modo que puedan ejercer sus funciones sin estar sometidos a influencias o presiones de otras autoridades u organismos. Como ejemplo de estas comisiones independientes cabe citar las siguientes:

a) Comisión Independiente de Derechos Humanos

45. La Comisión Independiente de Derechos Humanos, establecida en virtud de la Ley N° 53 de 2008, tiene encomendado un amplio mandato y en 2012 fueron elegidos los miembros de su Junta. El mandato de la Comisión incluye las siguientes funciones principales:

- i) Recepción de reclamaciones de personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con violaciones anteriores y posteriores a la entrada en vigor de la ley;
- ii) Realización de investigaciones preliminares sobre violaciones de derechos humanos en base a la información recibida;
- iii) Verificación de las reclamaciones recibidas y realización de investigaciones preliminares si las circunstancias lo requieren;
- iv) Remisión a la Fiscalía del Estado de las violaciones de derechos humanos para que esta pueda incoar procedimiento legal y notificar sus resultados a la Comisión;
- v) Realización de visitas a cárceles, centros de reinserción social y todas las demás instalaciones donde pueda haber detenidos, sin necesidad de autorización previa de las autoridades pertinentes, a fin de reunirse con los reclusos y detenidos, confirmar cualquier posible caso de infracción de los derechos humanos y poner

estos en conocimiento de las autoridades competentes para que se puedan adoptar las medidas legales oportunas.

b) Comisión sobre la Integridad Pública

46. La Comisión sobre la Integridad Pública, prevista en el artículo 102 de la Constitución, se estableció en virtud de la Orden N° 55 de 2004 de la Autoridad Provisional de la Coalición como órgano especializado en recibir, investigar y dictar sentencia en caso de reclamación por violación de alguno de los derechos que corresponden a una persona. Su función básica es ayudar a combatir la corrupción y entre los mecanismos que utiliza cabe mencionar la investigación de casos de corrupción, la formulación de proyectos de ley, la imposición a los funcionarios superiores de la obligación de declarar sus intereses económicos y la promulgación de un código de conducta de la función pública. También formula programas educativos para impartir en las escuelas y se esfuerza por desarrollar una cultura de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas mediante la organización de estudios y simposios y la formulación de programas de formación y de comunicación pública. La Comisión creó en 2004 oficinas de inspectores generales en todos los ministerios iraquíes.

c) Alta Comisión Electoral Independiente

47. La Alta Comisión Electoral Independiente es un organismo gubernamental independiente e imparcial, de carácter profesional, bajo la supervisión del Consejo de Representantes y con la responsabilidad exclusiva de la organización, celebración y supervisión de todo tipo de elecciones y referendos. La Comisión es una institución constitucional en virtud del artículo 102 de la Constitución iraquí y se creó según lo establecido en la Ley N° 11 de 2007 para sustituir a la Comisión Electoral Independiente del Iraq que, durante el período de transición, se encargó de la celebración de elecciones y del referendo sobre la Constitución de 2005.

d) Instituciones de la sociedad civil

48. Después de abril de 2003, hubo la voluntad política declarada de rectificar la relación entre el Estado/poder y la sociedad mediante el reconocimiento, entre otras cosas, del derecho a establecer asociaciones y unirse a ellas, lo que dio origen a la Orden N° 45 de 2003, que regula las actividades de las organizaciones no gubernamentales, que han proliferado en el Iraq y que, a finales de octubre de 2007, sumaban hasta 5.669 organizaciones que actuaban en todo el país en una variedad de ámbitos especializados, desde la defensa de los derechos humanos en general a la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos para hacer valer los derechos de determinados grupos como las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, etc. Las instituciones de la sociedad civil iraquí constituyen un mecanismo importante a nivel nacional para la promoción y protección de los derechos humanos mediante actuaciones de defensa, apoyo y de carácter pedagógico en este ámbito y desempeñan un papel educativo de primer orden en la promoción de los principios de democracia y participación, no solo en los procesos de desarrollo y reconstrucción sino también en las diversas elecciones que se celebraron en el país. El último día de su primera legislatura, el Consejo de Representantes aprobó un proyecto de ley (Ley N° 12 de 2010) para regular las actividades de estas organizaciones, que fue aprobado a continuación por el Consejo de la Presidencia el 2 de marzo de 2010 y entró en vigor el 7 de abril de 2010 después de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 2

49. La Constitución de 2005 de la República del Iraq, que es conforme con las disposiciones de este artículo en la medida en que respeta y garantiza a todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción de ningún tipo, es el instrumento principal que garantiza el respeto y la protección de estos derechos en el Iraq al hacer hincapié en las normas y principios fundamentales de derechos humanos basados en el Pacto, en particular en sus artículos 14 a 46 del capítulo segundo, sobre derechos y libertades, incluidos:

- El principio de igualdad y no discriminación (art. 14);
- El derecho a la vida, la seguridad y la libertad (art. 15);
- El derecho a la igualdad de oportunidades (art. 16);
- El derecho a la privacidad y la inviolabilidad del domicilio (art. 17);
- El derecho a tener una nacionalidad (art. 18);
- Los principios de la independencia del poder judicial y del juicio justo (art. 19);
- El derecho de hombres y mujeres a participar en la dirección de los asuntos públicos y de disfrutar de derechos políticos, incluido el derecho a votar, a presentarse como candidato y a ser elegido (art. 20);
- El derecho de asilo político (art. 21);
- En los artículos 37 a 46 se define un número de derechos y libertades fundamentales, incluida la prohibición de la tortura, los trabajos forzados y la esclavitud; el derecho a la libertad de expresión y de reunión y manifestación pacífica; el derecho a formar asociaciones y partidos políticos; el derecho a la libertad de circulación y la libertad de pensamiento, conciencia y creencia; el derecho a la libertad de culto; el compromiso del Estado de apoyar y reforzar el papel de las instituciones de la sociedad civil; y la disposición de que no se puedan imponer restricciones a estos derechos excepto en los casos que establezca la ley.

50. Se han adoptado medidas para establecer un clima de confianza, como un programa de amnistía general conforme a los principios de la justicia de transición, y se ha liberado a personas detenidas ilegalmente. El legado del anterior régimen dictatorial se ha rectificado en base al imperio de la ley y al respeto de los derechos humanos, como lo prueba claramente la Ley de amnistía general, N° 17, promulgada en febrero de 2008, y una serie de leyes promulgadas como la Ley de rendición de cuentas y justicia, N° 10 de 2008 y la Ley de protección de las fosas comunes, N° 5 de 2006.

51. La Fundación para los Mártires se creó en virtud de la Ley N° 3 de 2006 y la Fundación para los Presos Políticos en virtud de la Ley N° 4 de 2006. En la Ley N° 24 de 2005 se dispuso la reincorporación de personas destituidas de sus puestos por motivos políticos. La Comisión de Reclamación de Propiedades Iraquíes se estableció en virtud de la Ley N° 13 de 2010 y el Tribunal Supremo iraquí en aplicación de la Ley N° 10 de 2005, con el objetivo de investigar las violaciones de derechos humanos en el Iraq bajo el régimen dictatorial durante el período de 1968 a 2003. El Ministerio de Derechos Humanos fue creado en septiembre de 2003 como el principal órgano gubernamental encargado de la promoción y protección de los derechos humanos mediante sistemas de supervisión y control. Encarna las aspiraciones del pueblo iraquí de dar solución al legado de violaciones de los derechos humanos cometidas contra él durante un período de muchos decenios y para asegurar la continua promoción y protección de los derechos humanos y la difusión de una nueva cultura de respeto de estos derechos y de su enseñanza, mediante el control, la

supervisión y la evaluación de la actuación del gobierno. El objetivo estratégico de este Ministerio, como se define en su Estatuto, es crear un entorno favorable al ejercicio de los derechos humanos y, para este fin, se estructura en torno a una tríada básica de mecanismos de supervisión y control, mecanismos para resolver el lamentable legado de derechos humanos y mecanismos para difundir una cultura de respeto de los derechos humanos y de enseñanza de estos.

52. Los tribunales nacionales del Iraq aplican el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal de acuerdo con los principios constitucionales generales, que son coherentes con los medios de corrección establecidos en las leyes iraquíes y cuya aplicación supone una auténtica garantía de protección de los derechos humanos y el imperio de la ley. Los principios fundamentales pueden resumirse como sigue:

- No existe delito ni castigo que no esté previsto en la ley (art. 19, párr. 2, de la Constitución iraquí actualmente en vigor);
- Toda persona tiene garantizado el derecho de recurrir a los tribunales (art. 19, párr. 3 de la Constitución);
- El derecho de defensa es sacrosanto y está garantizado en todas las fases de la investigación y el juicio (art. 19, párr. 4, de la Constitución);
- La inocencia se presume (art. 19, párr. 5, de la Constitución);
- Toda persona tiene derecho a un trato justo en los procedimientos judiciales y administrativos (art. 19, párr. 6, de la Constitución);
- La pena debe ser personal (art. 19, párr. 8, de la Constitución);
- Las leyes penales no tienen carácter retroactivo a no ser que sean más favorables para el acusado (art. 19, párr. 10, de la Constitución);
- Los procedimientos judiciales son de carácter público (art. 19, párr. 7, de la Constitución);
- La detención administrativa está prohibida (art. 19, párr. 12 a), de la Constitución);
- Está prohibida la detención en instalaciones distintas de las destinadas expresamente a este fin (art. 19, párr. 12 b), de la Constitución);
- El poder judicial es independiente (art. 19, párr. 1, de la Constitución).

53. La categoría de menor tiene un régimen especial en las leyes nacionales iraquíes en la medida en que los menores delincuentes están sometidos a unos procedimientos legales especiales, desde el momento de la detención hasta el momento de su internamiento en una institución y del cumplimiento de la sentencia. La Dirección de Policía de Menores, los tribunales de menores y el Departamento de Reforma de Menores del Ministerio de Trabajo tienen la obligación de aplicar estos procedimientos. Cabe señalar que, de acuerdo con las leyes nacionales iraquíes, los menores no pueden ser sentenciados a pena de muerte y solo pueden ser internados en centros de observación de menores.

54. El Iraq no ha estado a salvo de la trata de personas, debido a las guerras, los conflictos internos y las condiciones de inestabilidad que afectaron al país y dieron origen a este problema. Las personas desplazadas, mujeres, viudas y otras personas vulnerables al embaucamiento, así como los niños separados de sus familiares y los huérfanos dependientes de la ayuda humanitaria para sobrevivir, a menudo son víctimas de la explotación sexual o económica cuando se producen conflictos armados. El papel del Estado para resolver este fenómeno se ilustra en el artículo 37, párrafo 3, de la Constitución iraquí, en el que se establece que: "Se prohíbe el trabajo forzoso, la esclavitud, el comercio de esclavos, la trata de mujeres y niños y el comercio sexual". En el artículo 29, párrafo 3,

se establece además que: "Está prohibida toda forma de explotación económica de niños y se adoptarán las medidas necesarias para protegerlos de ella". El principio legislativo original para combatir delitos de este tipo consistía en poner de manifiesto el hecho de que la prostitución y el alcahuteo constituían delitos penales y conllevaban la misma pena. En general, se hacía poca referencia al delito de trata de personas. A la Ley N° 8 de 1988 de represión de la prostitución siguió la Reforma N° 4 de 1991 del estatuto de reclusa en la que, de acuerdo con la ley, se definían los derechos de las reclusas condenadas por prostitución. En el Estatuto se regulaba la gestión de los centros de corrección de dichas mujeres, se permitía que trabajasen a cambio de los salarios especificados en sus artículos y se establecía que disfrutasen de servicios de salud y otros servicios básicos mientras permaneciesen detenidas y que dispusiesen de servicios de reinserción cuando hubiesen cumplido sus condenas.

55. El 28 de mayo de 1955, el Iraq ratificó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y su decisión de ratificar dicho Convenio significó la aceptación de todos los instrumentos internacionales relacionados con la represión de la trata de mujeres y niños. El Estado ha promulgado también la Ley N° 28 de 2012, en la que se define la trata de personas como un delito punible y abarca todos los aspectos del mismo, se enumeran las diversas formas de este delito, se define el concepto de autor de actos de este tipo, se fijan las penas y el trato que deben recibir las víctimas, etc. En el artículo 1 de la ley se define la trata de personas como la contratación, el transporte, el traslado, el cobijo o la recepción de personas con el fin de venderlas o utilizarlas en operaciones terroristas, conflictos armados, actos de prostitución o de explotación sexual, trabajos o servicios forzosos, esclavitud, mendicidad, tráfico de órganos humanos o para fines de experimentación médica.

Artículo 3

56. La Constitución iraquí de 2005 contiene disposiciones que confirman la adopción por el Estado de los principios de igualdad y participación. En el preámbulo de la Constitución se establece que: "Nosotros, el pueblo del Iraq, hombres y mujeres, hemos resuelto con determinación respetar el imperio de la ley y asegurar la justicia y la igualdad para todos los iraquíes". Diversos artículos de la Constitución de 2005 hacen referencia a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales (como el art. 14, el art. 22, párr. 1, los arts. 31, 32, 33 y 34 y el art. 49, párr. 4).

57. La legislación iraquí consagra el principio de la promoción de la igualdad de género. En la Ley electoral, N° 16 de 2005 se establecía que la proporción de mujeres candidatas en las listas electorales debía ser al menos del 25% y, el 5 de diciembre de 2009, el Consejo de Representantes aprobó una enmienda al artículo 3, párrafo 3, de esta ley para introducir un sistema de cuotas.

58. La Ley electoral, N° 36, relativa a los consejos provinciales, de distrito y de subdistrito, promulgada en septiembre de 2008, entró en vigor durante las elecciones celebradas el 31 de enero de 2009, en las que se respetaron los derechos electorales de las mujeres, como se establece en el artículo 13, párrafo 2, de dicha ley.

59. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se encuentra en el proceso de redacción de un proyecto de ley que sustituya la Ley de Seguridad Social, N° 126 de 1980, a fin de regular las actividades de la red de protección social creada en 2006 de acuerdo con una directiva publicada.

60. En la Ley del estatuto personal, N° 188 de 1959, enmendada por los decretos del (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución, se define el matrimonio como "un contrato entre un hombre y una mujer, en virtud del cual esta se convierte en su cónyuge legal a efectos de formar una familia y tener hijos". Esto significa que las dos partes del contrato

(hombre y mujer) disfrutan del mismo derecho a elegir libremente a su cónyuge y que el contrato no se puede cerrar sin su consentimiento pleno y libre. En el artículo 5 de la Ley del estatuto personal se establece que: "Los futuros esposos deben estar en plena posesión de sus facultades mentales y ambos deben haber alcanzado los 18 años de edad, aunque el juez puede permitir el matrimonio de una persona con menos años si se determina que dicha persona ha alcanzado los 15 años de edad y que el matrimonio responde a su interés, de acuerdo con las directivas publicadas para este fin por el Presidente del Tribunal Supremo". En virtud de esta ley, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo derecho de rechazar el matrimonio o de añadir condiciones al contrato antes de firmarlo. La mujer también tiene el derecho de incluir en el contrato de matrimonio una cláusula que obligue al marido a permitir el divorcio si la mujer así lo desea; si el marido no cumpliera esa cláusula, el contrato podría anularse a petición de la mujer y, en tal caso, ella estaría facultada para reclamarle cualquier saldo deudor del fondo fiduciario que el marido tuvo que constituir para ella al contraer matrimonio (art. 19 de la ley). Asimismo, la mujer también tiene derecho a solicitar la separación a causa de desacuerdo, disputa, ausencia prolongada o impago del mantenimiento, o si acepta pagar una compensación al marido a cambio de una separación voluntaria de mutuo acuerdo. La promulgación en la Región del Kurdistan de la Ley N° 15 de 13 de noviembre de 2008 puso las disposiciones de la Ley del estatuto personal, N° 188 de 1959 en más estrecha conformidad con las pautas internacionales en la esfera de los derechos humanos, al derogar o enmendar algunos de sus artículos. Sin embargo, esto dio origen a una disparidad judicial y una desigualdad entre la Región y el Gobierno central respecto a la aplicación de la ley, debido a la ambigüedad jurídica que se deriva de enmendar una ley nacional sin el consenso o el acuerdo del Gobierno Federal.

61. En la Ley de trabajo, N° 71 de 1987, modificada, se dedica un capítulo entero a la protección de los derechos de la mujer trabajadora y debe tenerse en cuenta que el Consejo de Representantes está considerando en la actualidad un proyecto de enmienda a esta ley. En la Ley de protección de menores, N° 78 de 1980, modificada, también se establece la promoción de la igualdad y la alianza entre hombres y mujeres.

62. Desgraciadamente, las garantías legales consagradas en la Constitución y las leyes en vigor han resultado insuficientes para que las mujeres disfruten efectivamente de igualdad, puesto que sus derechos están condicionados por numerosos factores que a menudo impiden que los mecanismos legales mejoren la situación de la mujer en la sociedad. Ello cabe atribuirlo a la deficiente aplicación de las leyes que se explica en gran parte por las características de la transición que experimenta el Iraq desde 2003. En consecuencia, el Gobierno iraquí ha adoptado estrategias ambiciosas para garantizar la aplicación de la ley, dando pasos positivos y efectivos para revocar las disposiciones vigentes que permiten la discriminación contra las mujeres, lo que se ha conseguido proporcionando a las autoridades competentes estudios jurídicos en los que se insta a derogar o enmendar las disposiciones de este tipo. Sin embargo, estos esfuerzos se han estrellado con unas prácticas tradicionales que no pueden simplemente ser abolidas por ley, puesto que los cambios que requieren exigen un espacio de tiempo, un esfuerzo, una planificación y unos recursos presupuestarios considerables. Es importante señalar que, si bien se han hecho propuestas para derogar o enmendar los artículos 41, 377, 380, 398, 409 y 427 del Código Penal promulgado en virtud de la Ley N° 111 de 1969, modificada, en 2008 no se había adoptado ninguna decisión o proyecto de ley que derogue o enmiende los artículos del Código Penal que permiten la discriminación contra las mujeres.

63. La reserva del Iraq con respecto al artículo 9 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue retirada en aplicación de la Ley N° 33 de 2011, aprobada por el Consejo de Representantes en la reunión que celebró el 8 de octubre de 2011, basándose en que el efecto legal de dicha reserva estaba anulado por el artículo 18, párrafo 2, de la Constitución actualmente en vigor y también por la Ley de

nacionalidad iraquí, N° 26 de 2006, en la que se establece que hombres y mujeres tendrán los mismos derechos en cuanto a la transmisión de la nacionalidad a los hijos, de acuerdo con el artículo 3, párrafo a), en el que se establece que: "Toda persona nacida de padre iraquí o de madre iraquí tendrá la nacionalidad iraquí". Por tanto, incluso los niños de una madre iraquí casada con un extranjero tienen derecho a la nacionalidad iraquí en base a la nacionalidad de su madre.

64. El 16 de junio de 2009, el Iraq se unió oficialmente a la Organización de Mujeres Árabes, que agrupa a 16 Estados árabes y que tiene encomendados tres objetivos principales, a saber, el empoderamiento de las mujeres árabes, la potenciación de sus posibilidades en todos los ámbitos para los que estén capacitadas como pieza clave del progreso social árabe y la sensibilización sobre la necesidad ineludible de que las mujeres árabes participen en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo. La Organización también pretende conseguir que estas actividades de sensibilización se extiendan a las propias mujeres y a las sociedades árabes en su conjunto, mediante la estrecha colaboración de los Estados árabes con el fin de lograr los objetivos de empoderamiento y sensibilización. El 25 de mayo de 2011, el Ministro Estatal para los Asuntos de la Mujer fue nombrado representante del Iraq en el Consejo Ejecutivo de la Organización.

65. Desde 2003, el Gobierno Federal ha adoptado una serie de medidas para mejorar la situación de la mujer en el Iraq, lo que incluye esfuerzos excepcionales para poner fin a actos de violencia como el terrorismo. De acuerdo con la Recomendación general N° 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que define la violencia de género como una forma de discriminación contra la mujer, y con el artículo 29, párrafo 4, de la Constitución iraquí, que prohíbe todas las formas de violencia y abuso en la familia, la escuela y la sociedad, el Gobierno iraquí ha adoptado numerosas medidas y políticas a distintas escalas para mitigar el impacto de la violencia contra la mujer y conseguir que los organismos policiales tengan un papel más activo a este respecto. Entre las medidas más importantes que el Gobierno ha adoptado para reducir el fenómeno de la violencia contra la mujer cabe mencionar:

a) El Comité de Protección de la Familia

66. Este Comité, creado en virtud de la Orden Presidencial N° 80 de 2008, promulgada por la secretaría del Consejo de Ministros, está presidido por el Ministro Estatal para los Asuntos de la Mujer y reúne a representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio Estatal para los Asuntos de la Sociedad Civil. El mandato del Comité es examinar el sistema legislativo para eliminar toda discriminación contra la mujer y velar por que las disposiciones de la Ley del estatuto personal garanticen el respeto de los derechos de la mujer. El Comité persigue la creación de oficinas de conciliación familiar y de secciones de mujeres en las comisarías, donde haya agentes de policía femeninos que se hayan formado para este cometido, y ha hecho recomendaciones para proteger a la mujer de la violencia doméstica y garantizarle el goce de sus derechos humanos. Una de las principales recomendaciones del Comité fue la creación de una Dirección para la protección de la familia, dependiente del Ministerio del Interior, para proteger a las familias de la violencia y ofrecer la máxima protección a las personas que hayan sido víctimas de ella. Esta Dirección empezó su labor en la provincia de Bagdad, donde abrió como proyecto experimental un centro en el distrito de Karkh el 28 de febrero de 2010 y otro en el distrito de Rusafa el 20 de julio de 2010 que, si funciona bien, se ampliará a las 14 provincias iraquíes restantes, salvo en las de la Región del Kurdistan, en la que se crearán centros similares que constituyan un lugar seguro de refugio para las mujeres víctimas de la violencia. En 2010 se creó un comité multisectorial presidido por el Ministro Estatal para los Asuntos de la Mujer y que incluía a expertos en asuntos jurídicos de diversos ministerios implicados en los derechos de la mujer, para redactar un proyecto de ley de

prevención de la violencia doméstica y, en la Región del Kurdistan, también se ha preparado un proyecto de ley sobre violencia doméstica, que se ha presentado al parlamento regional para su consideración y aprobación.

b) El Departamento de Bienestar de la Mujer, dependiente del Consejo de Ministros

67. Este Departamento, que fue creado el 22 de julio de 2008 y entró en funcionamiento el 10 de enero de 2009, es responsable del bienestar de las viudas, las divorciadas, las mujeres solteras y las que han perdido a sus maridos. Funciona como una red de protección social que paga prestaciones a las mujeres sin valedor, discapacitadas o desempleadas, y también atiende a sus necesidades de formación educativa y profesional, con el fin de potenciar sus capacidades y su empoderamiento. El Departamento también se esfuerza por encontrar oportunidades laborales adecuadas a las capacidades académicas y profesionales de las mujeres y por asegurar una cuota de puestos en los departamentos gubernamentales y de unidades de vivienda y de microcréditos.

c) La Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza

68. El Iraq lanzó la primera estrategia nacional de reducción de la pobreza en el período de 2010 a 2014 por medio de un acuerdo del Ministerio de Planificación y el Banco Central del Iraq. Los seis principales objetivos de esta estrategia eran: asegurar que los pobres tuviesen mayores ingresos; mejorar su nivel de salud; ampliar y mejorar la educación; ofrecer mejores condiciones de vivienda; reducir las diferencias entre hombres y mujeres; y asegurar una protección social efectiva para los pobres.

69. Cabe señalar los siguientes datos sobre la situación de la mujer en el Iraq en comparación con años anteriores:

- La proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres pasó del 7% en 1997 al 27% en 2006;
- En 2008, un total de 751 mujeres iraquíes estudiaban en el extranjero;
- Las siguientes estadísticas sirven de indicador de los avances logrados en la participación de las mujeres en la vida pública.

a) Miembros del Consejo de Representantes, por género, en el período 2004-2009;

<i>Año</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
2004	75	25	100
2005	187	88	275
2006	200	75	275
2007	242	83	325

b) Hay cinco mujeres que ocupan el cargo de ministro (Ministra de Derechos Humanos, Ministra Estatal para los Asuntos de la Mujer, Ministra de Vivienda, Ministra Estatal para los Asuntos Provinciales y Ministra de Medio Ambiente).

c) Número de mujeres en los puestos de dirección de instituciones gubernamentales en 2005;

<i>Directores Generales</i>	<i>Expertos y Directores Generales Adjuntos</i>	<i>Asesores</i>	<i>Subsecretarios</i>	<i>Total</i>
86	215	33	8	342

d) Número de mujeres en el poder judicial:

En el Iraq hay entre hombres y mujeres un total de 1.327 jueces y miembros de la Fiscalía del Estado; 76 mujeres ocupan el cargo de juez (12 de grado I, 1 de grado II, 32 de grado III y 31 de grado IV).

Artículo 4

70. Después de la liberación del Iraq en 2003, tras decenios de régimen autocrático y despótico en el país, el poder legislativo iraquí se apresuró a excluir toda posibilidad de que volviese un régimen dictatorial asignando la responsabilidad de la toma de decisiones sobre el futuro del país y de su población a un grupo de representantes, elegidos por el pueblo y facultados para adoptar legítimamente decisiones y políticas y ejercer un control sobre la legislación. En el artículo 61, párrafo 9, de la Constitución iraquí que entró en vigor en 2005 se establece lo siguiente:

a) La proclamación del estado de guerra o de excepción, que debe realizarse en base a una petición conjunta del Presidente de la República y el Primer Ministro, requerirá la aprobación por una mayoría de dos tercios del Consejo de Representantes.

b) La proclamación del estado de excepción podrá hacerse por un plazo máximo de 30 días, que podrá prorrogarse previa aprobación de cada nueva ampliación.

c) El Primer Ministro tendrá las facultades necesarias para dirigir los asuntos del país durante la proclamación del estado de guerra o de excepción. Dichas facultades estarán reguladas por ley de forma compatible con la Constitución.

d) El Primer Ministro informará al Consejo de Representantes sobre las medidas adoptadas durante el estado de guerra o de excepción proclamado, así como sobre los resultados de dichas medidas, en un plazo de 15 días contado a partir de la fecha de finalización del estado de guerra o de excepción.

71. Debido a los actos de violencia y terrorismo a los que se vio sometido el Iraq después de 2003, perpetrados por agentes externos patrocinados por algunos países vecinos, y habida cuenta de la necesidad urgente derivada de la inestabilidad de las condiciones de seguridad, la Autoridad Provisional de la Coalición promulgó en 2004 la Orden N° 1 sobre defensa de la seguridad nacional (conocida como la Ley del estado de excepción). En esta ley se incluían las siguientes disposiciones:

a) El Primer Ministro, actuando con la aprobación unánime del Consejo de la Presidencia, puede proclamar en cualquier parte del Iraq el estado de excepción si el pueblo iraquí está expuesto a un peligro grave e inminente que ponga en riesgo la vida de personas como consecuencia de una campaña de violencia perpetrada por quienes pretendan impedir la formación de un gobierno ampliamente representativo en el Iraq, obstaculizar la participación pacífica de todos los iraquíes, o lograr cualquier otro objetivo.

b) El estado de excepción se proclamará mediante una orden que explique la situación que exigió su proclamación, defina la zona en la que se impone el estado de excepción y especifique el momento de su entrada en vigor y su duración, que no excederá de 60 días o del momento en que cese el peligro o la situación que exigió la proclamación, si este período es más breve. El estado de excepción podrá prorrogarse, en caso de necesidad, por períodos consecutivos de 30 días en base a la justificación escrita del Primer Ministro y el Consejo de la Presidencia y finalizará automáticamente al cumplirse el período de prórroga, salvo que vuelva a prorrogarse por escrito.

c) De conformidad con la Observación general N° 29, el Primer Ministro tendrá, dentro de la zona en la que se proclamó el estado de excepción, unas facultades

extraordinarias temporales que le permitirán restringir cualquiera de los derechos reconocidos en el Pacto durante el período de tiempo especificado en el párrafo anterior. En operaciones en gran escala realizadas en zonas extensas para hacer frente a amenazas planteadas por grandes grupos armados, podrá solicitarse la ayuda de una fuerza multinacional, de conformidad con la resolución 1546 (2004) del Consejo de Seguridad, y se podrán asignar a las fuerzas armadas iraquíes tareas claramente definidas en función de su condición y capacidades, previa aprobación unánime del Consejo de la Presidencia. En la Región del Kurdistan, las medidas excepcionales de este tipo solo se podrán adoptar en coordinación con su Gobierno.

Artículo 5

72. La República del Iraq considera que en el Pacto se reconocen unos derechos que deben gozarse sin ninguna restricción o excepción por ningún motivo salvo que estas deriven de sus disposiciones y el interés público.

Artículo 6

73. La democracia, los derechos humanos y el principio del imperio de la ley se han convertido en una práctica sistemática en la República del Iraq, donde se está produciendo un constante desarrollo de las garantías legislativas y judiciales que regulan la imposición por los jueces de la pena de muerte. Todos los procedimientos judiciales se realizan de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución, en el que se establece que: "Toda persona tiene el derecho a la vida, la seguridad y la libertad, y estos derechos no serán eliminados o restringidos salvo que así lo establezca la ley y sobre la base de una sentencia dictada por un órgano judicial competente".

74. El poder judicial aplica el principio establecido en el artículo 19, párrafo 5, de la Constitución ("Se presumirá que el acusado es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad en un juicio justo. El acusado no será juzgado de nuevo por la misma acusación si ha sido absuelto de ella, al menos que se presenten nuevas pruebas"). Solo se impondrán sanciones en base a pruebas sólidas e irrefutables.

75. La legislación de menores (Ley Nº 76 de 1983 relativa a la protección del menor, con sus enmiendas) no permite la imposición de la pena de muerte a menores de edad, sin consideración del tipo de delito que haya cometido. En el artículo 77, párrafo 2, de dicha ley se establece que: "Si un adolescente comete un delito punible con la pena de muerte, el tribunal de menores lo condenará a ser internado en un reformatorio para adolescentes, en lugar de la sanción legalmente prevista, por un período no inferior a 5 años y no superior a 15 años".

76. En la legislación iraquí, la pena de muerte se limita solo a los más graves delitos, expresión bastante ambigua. El marco jurídico para imponer la pena de muerte se compone de:

- a) El Código Penal iraquí (Ley Nº 111 de 1969);
- b) La Ley antiterrorista, que tiene la misma fuerza legal que el Código Penal antes mencionado;
- c) El Código Mercantil (Ley Nº 30 de 1984) promulgado por el régimen dictatorial;
- d) Decretos del (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución promulgados por el régimen dictatorial.

77. Para examinar la cuestión de la pena de muerte desde el punto de vista de la legislación, las garantías judiciales (para impedir la imposición de esta pena por error o para reducir la posibilidad de error), las razones sociales y religiosas para la aplicación de esta pena y la situación actual de su aplicación en el Iraq, resulta necesario dividir su historia en tres fases.

Primera fase

78. Esta fase abarca el período de 1996 a 2003, año en que Paul Bremer, Director de la Autoridad Provisional de la Coalición, suspendió la aplicación de la pena capital. Este fue un período marcado por el gran número de delitos cometidos que comportaban la pena de muerte, como la elusión del servicio militar (Decreto N° 877 de 7 de julio de 1982 del Consejo de Mando de la Revolución), la posesión o transporte de estupefacientes, la falsificación de una hoja de servicios militares o de un pasaporte extranjero (Decreto N° 120 de 29 de enero de 1986), etc. El régimen dictatorial mantuvo una política de purga de los partidos políticos mediante la imposición de la pena de muerte con diversos pretextos, como la violación de la seguridad nacional o el espionaje, sin pruebas o procedimientos de investigación justos. Cabe hacer las siguientes observaciones sobre este período:

a) Es importante señalar que no existían garantías que impidiesen la imposición de la pena por error en la medida en que muchas sentencias de muerte, emitidas por tribunales especiales (sumarios), no admitían recurso o apelación y se prohibía por ley a los tribunales admitir objeciones contra la aplicación de estas sentencias.

b) Algunos decretos, como el Decreto N° 100 promulgado por el (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución, otorgaban a los ministros del gobierno, o a personas del mismo rango, la potestad de imponer penas de cárcel y fianzas bajo la acusación de supuesto "sabotaje de la economía del país", etc., sin que los tribunales tuvieran jurisdicción para admitir que se presentaran objeciones a la aplicación de estos decretos. Algunas sentencias se ejecutaron, sin el debido procedimiento judicial, por supuesta dedicación a la prostitución y muchas mujeres fueron decapitadas con este pretexto.

c) Antes de 2003, el régimen dictatorial utilizó las ejecuciones extrajudiciales masivas como un método extremadamente cruel de controlar los levantamientos populares, como los que se produjeron en el centro y el sur del Iraq en 1991, y métodos similares se utilizaron contra los kurdos feyli, algunos de los cuales fueron ejecutados y otros fueron desterrados y sometidos a la confiscación de sus propiedades. De acuerdo con las cifras certificadas por los comités especiales de la Fundación para los Mártires, el número de personas que recibieron la muerte a manos del régimen dictatorial ascendió a 40.000, de las que 432 fueron niños menores de 12 años de edad y 2.511 fueron enterradas en fosas comunes (el anexo de este informe contiene las estadísticas de las fosas comunes que han sido encontradas hasta la fecha y algunas de las cuales han sido abiertas, sin olvidar que todavía pueden ser descubiertas muchas otras).

Segunda fase

79. Esta fase abarca el período de 2003, cuando cambió el sistema político y Paul Bremer, Director de la Autoridad Provisional de la Coalición, promulgó la Orden N° 7 de 10 de junio de 2003 que suspendía la aplicación de la pena capital, a 2005, cuando se reinició su aplicación.

Tercera fase

80. Durante esta fase, que va de 2005 hasta hoy día, se reanudó la aplicación de la pena de muerte en virtud de la Orden N° 3 de 8 de agosto de 2004, promulgada por el Consejo de

Ministros. Sin embargo, esta pena solo se impone en relación con los más graves delitos como el homicidio con agravantes y algunos crímenes de grave carácter terrorista. Aunque severa, la pena de muerte es una sanción legal y constitucional que se impone en juicios celebrados por los tribunales competentes y es importante señalar que todas las sentencias de muerte emitidas se someten a una revisión obligatoria por el Tribunal Federal de Apelación y, en caso de ser refrendadas por este último, se remiten al Consejo de la Presidencia para que las ratifique antes de que el Departamento de Penas iraquí, que depende del Ministerio de Justicia, las ejecute. El sistema jurídico iraquí prevé numerosas garantías para asegurar el control efectivo de la aplicación de la pena de muerte y los organismos gubernamentales y las autoridades competentes tienen la obligación de asegurar que estas garantías se apliquen de forma adecuada para impedir la imposición arbitraria de sentencias de muerte que no son proporcionales a la gravedad del delito cometido. Algunas de estas garantías están consagradas en la actual Constitución iraquí (arts. 15 y 19) y otras en las disposiciones legales del Código Penal promulgado por la Ley N° 111 de 1969 y, en particular, los artículos 1, 2, 22, 25, 39, 41, 42, 128 y 132 del mismo.

Garantías procesales en relación con la pena de muerte

81. Estas garantías están recogidas en el Código de Procedimiento Penal y la Ley de la Fiscalía del Estado, N° 159 de 1979. Los procedimientos pueden resumirse del siguiente modo:

a) Un sospechoso solo puede ser detenido en base a una orden judicial y debe ser remitido a un juez de instrucción para, a continuación, ser conducido ante el tribunal competente, que estará compuesto por tres jueces de lo penal, un fiscal y un abogado defensor, y en el que el acusado tendrá el derecho de defenderse por sí mismo;

b) Toda sentencia de un tribunal que incluya la pena de muerte está sujeta a una revisión obligatoria por el Tribunal de Apelación reunido en sesión plenaria, compuesto por hasta 27 jueces competentes de grado I, que recibe el recurso, examina las pruebas y las normas pertinentes y, a continuación, confirma o anula la sentencia y la remite a los departamentos encargados de la ejecución, la conmutación, la absolución o la ratificación;

c) Las sentencias entonces se remiten a la Oficina del Primer Ministro para que emita la orden de ejecución, que precisa la ratificación del Presidente de la República.

82. Con respecto a las garantías relacionadas con la ejecución, las penas de muerte se realizan dentro de un centro penal y en presencia de un juez de lo penal, un representante del Ministerio del Interior, el director del Departamento de Penas, un médico del Ministerio de Salud, el abogado defensor, si desease asistir y, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía del Estado, N° 159 de 1979, el fiscal adjunto. Los familiares del condenado tienen el derecho de visitarlo antes del día de la ejecución y su cuerpo les es entregado o, de no ser así, el Estado se hace cargo de su entierro. También debe mencionarse el hecho de que está prohibido aplicar la pena de muerte a mujeres embarazadas hasta cuatro meses después de haber dado a luz.

83. Es importante señalar que la Ley N° 19 de 2005 anula las disposiciones legales que prohibían a los tribunales recibir ciertos casos. También anula los tribunales especiales y deroga los decretos promulgados por el (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución que impedían a los tribunales recibir las objeciones contra la aplicación de estos decretos.

84. La mayoría de las penas de muerte fueron dictadas, en virtud del artículo 4 de la Ley antiterrorista, N° 13 de 2005, contra personas vinculadas a la organización terrorista Al-Qaida y grupos armados al margen de la ley asociados al defenestrado régimen político.

Número de reclusos sometidos a la pena de muerte hasta el 27 de diciembre de 2011

<i>Año</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>	<i>Total</i>
2005	11	-	11
2006	52	2	54
2007	44	-	44
2008	-	-	-
2009	120	4	124
2010	18	-	18
2011	64	3	67
Total	309	9	318

Fuente: Informe anual sobre la situación de las cárceles, Ministerio de Derechos Humanos, 2011.

85. Para poner fin a la aplicación de la pena de muerte se han tomado una serie de medidas en cumplimiento de la Orden N° 7 de 2003 de la Autoridad Provisional de la Coalición. Esta pena solo se restableció para delitos contra la seguridad interna del Estado, delitos que constituyen un peligro público o que implican el uso de armas biológicas, delitos perjudiciales para la seguridad del transporte y las comunicaciones, delitos de asesinato con circunstancias agravantes y delitos de tráfico de drogas, con el fin de reducir al mínimo la imposición de penas de muerte en las sentencias penales dictadas por los tribunales iraquíes.

86. En las circunstancias actuales, la abolición de la pena de muerte en nuestro país constituiría un error desde el punto de vista de nuestra política penal puesto que no solo nos enfrentamos a los actos más crueles y odiosos de terrorismo, organizado o no, y de delincuencia organizada para socavar las instituciones democráticas, sino también a actos de violencia motivados por la afiliación racial, étnica o religiosa, en un contexto de inestabilidad de las condiciones de seguridad. En consecuencia, por el momento, resulta necesario mantener esta pena, que se aplica solamente a los delitos antes mencionados. Sin embargo, el poder judicial realiza todos los esfuerzos por evitar la imposición de la pena de muerte por la comisión de delitos que la conlleven, salvo si está convencido de que el condenado plantea un grave peligro público y que no es posible reformarlo o integrarlo de nuevo en la sociedad. Además, en el artículo 73, párrafo 1, de la Constitución Permanente de 2005 se otorga al Presidente de la República la potestad de conmutar la pena concediendo un indulto, excepto en los casos que serían contrarios al interés público.

87. En la República del Iraq, los únicos casos conocidos de ejecuciones extrajudiciales son actos de homicidio indiscriminado cometidos por grupos delictivos y terroristas contra todos los estratos de la sociedad iraquí.

Artículo 7

88. La tortura y el trato cruel e inhumano están prohibidos por el artículo 37, párrafo 1 c), de la parte segunda (Libertades) del capítulo segundo de la Constitución de la República del Iraq, en el que se establece que: "Está prohibida toda forma de tortura psicológica y física y de trato inhumano. No se tendrán en cuenta las confesiones obtenidas mediante coacción, amenaza o tortura, y la víctima tendrá derecho a reclamar una indemnización, de acuerdo con lo establecido en la ley, por los daños físicos y mentales sufridos". El Iraq es parte en la Convención contra la Tortura y, en cumplimiento de la carta N° Q/2/4/10/3679, de fecha 30 de enero de 2012, del departamento jurídico de la secretaría

del Consejo de Ministros, se creó un comité ministerial presidido por el Ministro de Derechos Humanos y que incluye a representantes de diversos ministerios interesados, en virtud de la Orden Ministerial N° 256 de 1 de octubre de 2012, para redactar el primer informe del país sobre dicha Convención.

89. Conforme a las disposiciones del Código Penal iraquí (Ley N° 111 de 1969, con sus enmiendas) y de la Ley N° 3 de 2003 relativa a la gestión de los centros de detención y penitenciarios (memorando de la Autoridad Provisional de la Coalición que ha sido disuelta posteriormente), está prohibida la práctica de cualquier forma de tortura por parte de los agentes policiales y funcionarios instructores.

90. Las reclamaciones relacionadas con actos de tortura se pueden canalizar a través de los siguientes órganos de supervisión:

- Ministerio de Derechos Humanos (equipos de inspectores/Oficina de reclamaciones de los ciudadanos);
- Ministerio de Justicia (Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Departamento del Inspector General);
- Ministerio de Defensa (Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Departamento del Inspector General);
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Departamento del Inspector General);
- Comisión sobre la Integridad Pública;
- Fiscalía del Estado, a través de las oficinas permanentes que ha establecido en los centros de detención;
- Organizaciones de la sociedad civil.

91. La comunidad internacional es plenamente consciente de las políticas represivas adoptadas por el régimen dictatorial en su trato a reclusos y detenidos, que estaban sujetos a la práctica generalizada de diversas formas de tortura en todos los centros de detención. Aunque no existan estadísticas precisas, debido a que muchos centros del Estado ardieron durante la caída del régimen en 2003, las pocas cintas de vídeo y documentos que se han rescatado muestran claramente las técnicas de investigación que utilizaban los agentes policiales.

92. Después del derrocamiento del régimen dictatorial y la promulgación de la Orden N° 60, por la que se creó el Ministerio de Derechos Humanos, y las Leyes N° 55 y N° 57, por las que se crearon la Comisión sobre la Integridad Pública y las oficinas de los inspectores generales, estos órganos asumieron sus funciones de supervisión como parte del mecanismo nacional para combatir el delito de tortura y empezaron a aplicar un plan para poner fin a la comisión de este delito. Los equipos de investigación que trabajaban para el Ministerio de Derechos Humanos visitaron centros de detención administrados por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en los que examinaron y registraron supuestos actos de tortura contra los reclusos, además de las reclamaciones que recibían de las familias de los detenidos. El Ministerio de Derechos Humanos pudo así recopilar una base de datos general para documentar estos casos y realizar un seguimiento de las conclusiones de las investigaciones judiciales a fin de asegurar que quienes cometiesen delitos de tortura fuesen debidamente condenados.

93. Se trata de casos de tortura individuales y no sistemáticos, y algunos de ellos se produjeron inmediatamente después del derrocamiento del régimen en 2003, cuando los agentes policiales no eran plenamente conscientes de la prohibición de la tortura y todavía

estaban muy influidos por los métodos predominantes en el anterior régimen, en particular en los centros de detención dependientes de los Ministerios de Defensa y del Interior. La mayoría de los casos se produjeron a nivel de brigada o de batallón, es decir, durante operaciones de detención, y el único caso registrado de tortura de detenidos implicó a algunos funcionarios instructores o responsables de la administración del centro de detención C4, contra los que se adoptaron medidas firmes. El Ministerio del Interior ha remitido a los tribunales 57 funcionarios acusados de la comisión de delitos relacionados con la tortura y el maltrato, como se muestra en el siguiente cuadro.

Denuncias de supuesta tortura y de supuestos malos tratos documentadas y remitidas a las autoridades judiciales

<i>Año</i>	<i>Número de denuncias</i>
2006	109
2007	122
2008	307
2009	574
2010	297

94. En virtud de la Ley N° 30 de 2008, la República del Iraq anunció su adhesión a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sin hacer ninguna reserva a las competencias del Comité contra la Tortura establecidas en el artículo 20 de la Convención, con el fin de asegurar la participación del Iraq en los esfuerzos de la comunidad internacional para prevenir la tortura y prácticas similares.

95. Se invitó al Relator Especial sobre la tortura a visitar el Iraq y, conforme a la Orden Presidencial N° 32 de 2007, se creó un comité de alto nivel para realizar los arreglos y preparativos exigidos para recibir al Relator Especial durante su visita, de modo que pudiese comprobar por sí mismo las condiciones de las cárceles y centros de detención del país. El Relator Especial se puso en contacto con la Misión del Iraq en Ginebra y agradeció la invitación del Gobierno iraquí.

96. En la sección I de la Ley relativa a la gestión de los centros de detención y penitenciarios se establece que estos centros deben ser administrados exclusivamente por el Ministerio de Justicia y el Gobierno iraquí ha realizado por tanto todos los esfuerzos por cumplir esta disposición, a pesar de la capacidad de admisión limitada de los centros de este Ministerio. No obstante, el plan general que el Ministerio está aplicando para ampliar las infraestructuras existentes y construir nuevos centros de detención a lo largo del país han tenido un efecto evidente y tangible en términos de mejoría de la situación de los reclusos.

97. En el siguiente cuadro se muestra el número de actividades (visitas sobre el terreno y cursos de formación) que ha realizado el Ministerio de Derechos Humanos durante el período 2006-2010.

<i>Tipo de actividad</i>	<i>Años</i>				
	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
1. Visitas a los centros de detención gestionados por el Ministerio del Interior	83	74	53	34	
2. Visitas a los centros penitenciarios gestionados por el Ministerio de Justicia	41	74	82	61	
3. Visitas a los centros de detención gestionados por el Ministerio de Defensa	23	25	12	21	

4. Visitas a los centros de observación de menores	15	9	22	17	
5. Visitas a los comités de investigación de hechos	5	6	26	82	
6. Visitas a las cárceles provinciales	118	211	392	335	222
7. Visitas a las cárceles de la Región del Kurdistan					18
Total	285	398	587	550	240

98. Durante el período 2006-2010, hubo 83 casos documentados de desaparición, forzada o involuntaria, clasificados de la siguiente manera:

1. Un caso clasificado oficialmente como secuestro.
2. Un caso clasificado oficialmente como asesinato.
3. Un caso cerrado por falta de pruebas.
4. Nueve casos clasificados como fugas de la cárcel.
5. Los casos restantes están siendo investigados conjuntamente por los ministerios competentes, el Consejo Judicial, la Comisión sobre la Integridad Pública y el Ministerio de Derechos Humanos. Es importante señalar que el 98% de los casos se comunicaron durante el período 2004-2008, y solo un caso fue registrado en 2009. El Iraq es parte en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y, conforme a la carta N° Sh. L/S/4/2/20200, de fecha 13 de junio de 2012, del departamento de asuntos del comité de la secretaría del Consejo de Ministros, se creó un comité ministerial, presidido por el Ministro de Derechos Humanos y que incluye a representantes de diversos ministerios interesados, en virtud de la Orden Ministerial N° 305 de 4 de noviembre de 2012, para redactar el primer informe del país sobre dicha Convención.

99. En relación con las actividades de formación y de reinserción, el Ministerio de Derechos Humanos, con la ayuda directa y la coordinación del Gobierno de Alemania, está aplicando un programa para formar a especialistas en las esferas de los derechos humanos y la aplicación de la ley. Durante los últimos cuatro años, los formadores del Departamento de Asuntos Humanitarios han ofrecido los siguientes cursos:

- 4 cursos de formación para funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos encargados de actividades de control y supervisión (funcionarios de Bagdad y de las provincias);
- 2 cursos de formación para oficinas de derechos humanos dependientes del Departamento del Inspector General del Ministerio del Interior;
- 3 cursos de formación para miembros de la Red de Justicia para Reclusos, que es una alianza de organizaciones de la sociedad civil (ONG) interesadas en las cárceles y los centros de detención;
- 7 cursos de formación, organizados en colaboración con las Naciones Unidas y una serie de organizaciones de la sociedad civil, dentro del marco del proyecto para proteger los derechos de los detenidos y las víctimas de tortura;
- 3 cursos de formación, organizados en colaboración con el Ministerio de Justicia, para el personal de nivel medio de las secciones de las provincias meridionales del

Departamento de Penas iraquí, dentro del marco de actividades de formación estratégica para la reinserción que todavía se están realizando;

- 23 talleres de formación, organizados en colaboración con los ministerios encargados de la gestión de los centros de detención y penitenciarios, para informar a su personal de las funciones del Relator Especial sobre la tortura.

Procedimientos de evaluación general y de transparencia

100. A continuación se muestran algunas de las actividades realizadas en relación con los procedimientos de evaluación general y de transparencia:

- Desde su creación, el sistema de control ha recopilado cinco informes anuales, tres de los cuales (de los años 2007, 2008 y 2009) se han publicado;
- El sistema ha contribuido a la preparación de la sección sobre la situación de los centros de detención y penitenciarios del informe nacional del Examen Periódico Universal de la República del Iraq en 2010;
- El sistema proporciona a los organismos de las autoridades judiciales y ejecutivas, así como a la Misión de Asistencia para el Iraq de las Naciones Unidas, datos estadísticos periódicos y mensuales sobre el número y la localización de internos en los centros de detención y penitenciarios;
- Su personal administrativo ha participado en reuniones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en Ginebra, con el que intercambia información periódicamente;
- El sistema ha realizado una serie de estudios especializados sobre diversos aspectos del contexto de la justicia penal en los que ha recogido sus observaciones generales sobre el terreno, formulado recomendaciones y propuesto soluciones a los problemas. Entre estos estudios cabe mencionar en particular:
 1. El papel de la judicatura en la promoción y protección de los derechos humanos, 2006;
 2. La tortura en el Iraq, 2006;
 3. Las desapariciones forzadas o involuntarias, 2007;
 4. Un estudio jurídico y de campo sobre la pena de muerte, 2008;
 5. El carácter problemático del registro penal en el Iraq, 2009.

101. En base a los estudios antes mencionados, se han corregido muchas anomalías y se ha ratificado la adhesión del Iraq a la Convención sobre la Tortura y a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Actividades de los Comités

102. Personal de la Administración participa en las actividades de comités bilaterales y multilaterales, como los que se enumeran a continuación:

- El Comité Conjunto, creado por la Orden Presidencial N° 83 de 2006;
- El Comité relativo al imperio de la ley, creado por la Orden Presidencial N° 165/S de 2007;
- El Comité relativo a los asuntos de los detenidos, creado por la Orden Presidencial N° 3/S de 2008;

- El Comité relativo a la evaluación de la situación legal, creado por la Orden Presidencial N° 93/S de 2008;
- El Comité relativo al establecimiento y la desafectación de centros de detención, creado por la Orden Presidencial N° 62 de 2009;
- El Comité relativo a la recepción del Relator Especial sobre la tortura, creado por la Orden Presidencial N° 32 de 2009;
- El Comité relativo a la revisión y normalización de las normas penitenciarias, creado por la Orden Presidencial N° 51 de 2009;
- El Comité relativo a la normalización de las bases de datos (proyecto de base de datos de la justicia penal), creado en 2009;
- Otros numerosos comités *ad hoc* sobre temas relacionados con la justicia penal.

103. Entre los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen dictatorial se incluyó la importación y utilización de medicamentos que contenían el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA), que se utilizaron con fines médicos experimentales sobre un número de pacientes en Diwaniya a los que se inyectó sangre contaminada importada del Institut Mérieux francés antes de 2003, lo que tuvo como consecuencia que 258 iraquíes contrajeran el sida y la mayoría de ellos murieran. El actual Gobierno iraquí está indemnizando a las víctimas que sufrieron algún perjuicio a consecuencia de las malas prácticas del instituto antes mencionado. El Legislativo promulgó la Ley N° 36 de 2011, en cuyo artículo 4 se establece que la indemnización mensual de 200 dólares de los Estados Unidos, o su equivalente en dinares iraquíes si antes no se había pagado, prevista en la Orden N° 33 de 2005, seguiría pagándose a cada víctima o a los herederos de cada víctima en el porcentaje legal que les corresponda en virtud de las leyes de herencia.

Artículo 8

104. El trabajo forzoso está prohibido en virtud del artículo 37, párrafo 3, del de la Constitución Permanente iraquí, en el que se establece que: "El trabajo forzoso, la esclavitud, el comercio de esclavos, la trata de mujeres o niños, y el comercio sexual están prohibidos".

105. El (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución promulgó el Decreto N° 234 de 20 de octubre de 2001 en el que se establecía que: "Toda persona que cometa el delito de sodomía contra un hombre o una mujer, esté implicada en un acto incestuoso con una persona con la que mantenga lazos de consanguinidad en alguno de los grados prohibidos, o que sea descubierta practicando la prostitución, ofreciendo sus favores o gestionando un local donde se ejerza la prostitución será castigada con la pena de muerte". En 2001, docenas de mujeres fueron decapitadas por las espadas de los *fedayines* de Saddam (milicias paramilitares dependientes de la autoridad vigente en ese momento) bajo la acusación de estar implicadas en el ejercicio de la prostitución, ofrecer servicios sexuales o participar en la trata de blancas. No fueron llevadas ante un tribunal porque el régimen que detentaba el poder en aquel entonces consideraba esas ejecuciones como un medio extrajudicial para combatir la prostitución.

106. El Iraq confirma su compromiso con los pactos, tratados e instrumentos internacionales relevantes. En virtud de la Ley N° 23 de 2007, que se publicó en el Boletín Oficial de 19 de enero de 2009, el Iraq anunció su ratificación, sin reservas, del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

107. El 8 de octubre de 2007, el Iraq se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos Protocolos (uno de los cuales era el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de 2000, cuyas disposiciones ha cumplido el Iraq). Con respecto a la legislación y las normas nacionales que prohíben la trata de personas, el Iraq ha incorporado el contenido de los instrumentos internacionales pertinentes en su legislación nacional, que establece penas severas a quienes cometan delitos que impliquen el transporte, el secuestro o la venta o trata de mujeres y niños. Las medidas adoptadas por las instituciones públicas iraquíes para prevenir y castigar estos delitos se basan en las siguientes leyes:

a) El Código Penal (promulgado por la Ley N° 111 de 1969, modificada). La sección 3 del capítulo IX de la parte dos del Código contiene los artículos 400 a 404 (relativos a actos indecentes y degradantes) en los que se establecen las penas para quienes cometan actos indecentes con otra persona con su consentimiento o sin él. El secuestro de niños se contempla en la sección 1 del capítulo II de la parte tres del Código, en cuyo artículo 422 se establecen penas de hasta 15 años de cárcel a toda persona que secuestre a un niño.

b) En el artículo 3 de la Ley N° 8 de 1988 relativa a la represión de la prostitución se establecen penas de hasta siete años de cárcel por:

- i) Ofrecimiento de favores sexuales o complicidad e incitación a la prostitución;
- ii) Explotación o gestión de un lugar público o cualquier otro local abierto al público en el que se empleen a personas para el ejercicio de la prostitución con el fin de atraer clientes;
- iii) Tener en propiedad o en alquiler una casa, habitaciones o un hotel en los que se permite que terceros ejerzan la prostitución, o sean cómplices e inciten a ella.

c) La Ley N° 28 de 2012 relativa a la trata de personas.

108. La Dirección General de Nacionalidad del Ministerio del Interior, en su circular N° 3299, de fecha 10 de junio de 2009, subrayó la necesidad de examinar con detenimiento los pasaportes de los viajeros y, en particular, los de quienes estén acompañados por niños, con el fin de cerciorarse de la auténtica situación legal de estos últimos y los vínculos de parentesco con el viajero, verificando todos los detalles relativos al niño y los de quienes lo tengan a su cargo, para evitar la explotación de niños por personas malintencionadas. El Ministerio del Interior creó también una fuerza policial comunitaria para facilitar que los ciudadanos gocen de todo tipo de servicios, ayudar en las actividades de la comunidad y resolver conflictos familiares. En 2009 se abrieron en Bagdad unidades de protección familiar y en 2010 se abrieron otras 14 unidades en las provincias, menos en la Región del Kurdistán. La función de estas unidades, cuyo personal está integrado por agentes policiales y funcionarios instructores femeninos, es resolver los conflictos en las familias de forma amistosa, sin la necesidad de iniciar procedimientos judiciales, y ofrecer asistencia jurídica y asesoramiento a las víctimas de violencia doméstica. También se establecieron dos líneas de atención directa para ayudar a los niños.

Medidas legales para proteger a los trabajadores extranjeros en el país

109. El Iraq no cuenta con ningún centro de acogida para los trabajadores extranjeros en el país que denuncien haber sufrido algún acto de violencia. Únicamente se adoptan las medidas necesarias para repatriar a las personas que hayan entrado ilegalmente en el país. No obstante, algunas organizaciones de la sociedad civil trabajan en coordinación con las

instituciones del Estado para ayudar a estas víctimas de la violencia que les solicitan refugio.

110. El Ministerio de Trabajo actúa con diligencia para atender a las denuncias recibidas de trabajadores extranjeros contra empresas que los reclutaron y emplearon. El Ministerio de Derechos Humanos también supervisa las denuncias de trabajadores de diversas nacionalidades y ha documentado los siguientes cinco casos.

<i>Nacionalidad</i>	<i>Número</i>	<i>Provincia</i>	<i>Empleador</i>	<i>Descripción del problema</i>
1. Tailandia	52 trabajadores	Bagdad	Middle East Canning Company	La empresa no cumplía las normas del Ministerio de Trabajo sobre las vacaciones.
2. Bangladesh	Sin especificar	Maysan	Proyectos del Ministerio para la recuperación de las Marismas	El director de la empresa libanesa contratada huyó sin pagar las nóminas de los trabajadores.
3. Sri Lanka	Sin especificar	Maysan	Talaat Hussam Company	Retraso en el pago de las nóminas de los vigilantes, por lo que la empresa fue demandada.
4. Ucrania	Sin especificar	Bagdad	Turkish Salar Company	Violaciones de los derechos humanos de los trabajadores empleados en el proyecto de renovación del edificio que se prepara para la Conferencia de la Cumbre Árabe.
5. Uganda	1	Diwaniyah	Trabajadores del hogar	Acoso sexual

111. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha creado un sistema nuevo para la emisión de permisos de trabajo a las mujeres extranjeras trabajadoras del hogar. En la actualidad, ningún cabeza de familia puede contratar a una mujer extranjera trabajadora del hogar sin haber obtenido antes un permiso de trabajo para ella en la Sección de Contratación de Árabes y Extranjeros del Departamento de Trabajo y Formación Profesional, de conformidad con las condiciones y procedimientos fijados en la Directiva N° 18 de 1987 relativa a la contratación de extranjeros en el Iraq que publicó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en cumplimiento del artículo 23 de la Ley de trabajo (Ley N° 71 de 1987). En el artículo 3 de la Directiva se establece lo siguiente:

A. En el caso de contratación de una trabajadora extranjera que ya se encuentre en el Iraq

1. Lo primero que debe hacer es presentar una prueba de la legalidad de la entrada y de la residencia en el Iraq.

2. Debe presentar por escrito una solicitud en la Sección de Contratación de Árabes y Extranjeros del Departamento de Trabajo y Formación Profesional de Bagdad, o en cualquiera de sus oficinas de las provincias, ya sea directamente o por medio del cabeza de familia que desee contratarla. En la solicitud que debe rellenarse a estos efectos debe introducirse toda la información del trabajador (nombres y apellidos, número de pasaporte y fecha de emisión, y dirección en el extranjero) junto con la del cabeza de familia (nombre, profesión, dirección, número de teléfono y explicación de los motivos por los que necesita contratar a una trabajadora).

3. La Sección de Contratación de Árabes y Extranjeros del Departamento de Trabajo y Formación Profesional debe ponerse en contacto con la Dirección de Residencia y proporcionarle dos copias del formulario de solicitud cumplimentado con los datos antes mencionados a fin de obtener su aprobación, conforme a la Ley de residencia de extranjeros, N° 118 de 1978.

4. Una vez obtenido el permiso de residencia, el cabeza de familia ha de presentarse en persona, acompañado de la trabajadora extranjera, en el Departamento de Trabajo y Formación Profesional para completar los procedimientos de emisión de un permiso de trabajo, válido por un período de un año renovable (art. 5 de la Directiva). Si el cabeza de familia deseara renovar el permiso un año más, habría de presentar una solicitud al Departamento de Trabajo y Formación Profesional al menos un mes antes de la fecha de expiración del permiso (art. 5 de la Directiva) y, en tal caso, cumplimentar de nuevo los procedimientos antes mencionados para la emisión del permiso original.

5. El cabeza de familia debe notificar al Departamento de Trabajo y Formación Profesional o a una de sus oficinas de las provincias si el trabajador deja el empleo por algún motivo y, en la fecha de expiración del permiso, este debe devolverse al Departamento o a una de sus oficinas (art. 8 de la Directiva).

B. En el caso de contratación de una trabajadora extranjera que no se encuentre en el Iraq

1. La trabajadora extranjera debe presentar por escrito una solicitud a la Sección de Contratación de Árabes y Extranjeros del Departamento de Trabajo y Formación Profesional o a cualquiera de sus oficinas de las provincias, ya sea por medio de una misión diplomática iraquí en el extranjero o por medio de su representante oficial en el Iraq o del cabeza de familia que desee emplearla y que actúe en su nombre.

2. La solicitud debe contener toda la información relativa a la trabajadora extranjera y al cabeza de familia que se detalla en la anterior sección A.

3. Los procedimientos para la concesión de un permiso de trabajo a una trabajadora extranjera son los mismos que los que se especifican en la anterior sección A; la única diferencia es que, después de recibir la notificación de aprobación, el cabeza de familia debe coordinar los procedimientos para su viaje al Iraq con la Dirección de Residencia y, en un plazo de una semana contada desde la fecha de su entrada en el Iraq, debe ponerse en contacto con el Departamento de Trabajo y Formación Profesional o con una de sus oficinas de las provincias para inscribirla y completar los procedimientos de emisión de un permiso de trabajo (art. 6, párr. c), de la Directiva).

Artículo 9

112. Los artículos 15, 17 y 39 de la Constitución iraquí actualmente en vigor hacen referencia a la necesidad de respetar el derecho humano a la vida, la seguridad y la libertad, que solo podrán restringirse conforme a las disposiciones de la ley o las decisiones de una autoridad judicial competente; las personas deben ser tratadas de forma justa en todos los procedimientos administrativos y judiciales; una persona acusada se presume que es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad; los juicios deben ser justos y el acusado debe ser conducido ante un juez con prontitud; y se debe salvaguardar la dignidad humana. Los mismos principios se recogen en numerosas disposiciones del actual Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, en el que se establece también que nadie puede ser detenido si no es en cumplimiento de una orden dictada por un juez competente en la forma correcta y debida. Estas disposiciones legales son conformes con las normas y principios internacionales establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos.

113. Debe señalarse que numerosas órdenes presidenciales se promulgaron conforme a los principios antes mencionados. A modo de ejemplo, en el párrafo 3 de la Orden Presidencial N° 207/S se establece que: "El Ministerio del Interior establecerá una fuerza especial dirigida por un funcionario competente para aplicar las órdenes y decisiones judiciales". En el párrafo 4 se establece que: "El Ministerio del Interior designará un número de funcionarios instructores proporcional al número de personas detenidas, que se encargarán de los procedimientos de investigación bajo la supervisión de un juez y de conformidad con la ley, y de presentar los sumarios completados de la investigación a los tribunales competentes de modo que las personas contra las que, en opinión del juez encargado de la causa, se hayan encontrado suficientes pruebas sean conducidas ante los tribunales penales competentes y aquellas contra las que no se hayan encontrado tales pruebas sean liberadas inmediatamente por orden del tribunal. Este proceso debe ser supervisado por la Fiscalía del Estado, inspectores administrativos y funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos". Conforme a lo establecido en el párrafo 7: "Los órganos responsables de la administración de los centros de detención cumplirán las órdenes judiciales de liberación de personas arrestadas o de detenidos, con o sin fianza, inmediatamente después de haber recibido esas órdenes, al menos que las personas en cuestión estén buscadas en relación con otros casos, lo que debe verificarse en un plazo de 24 horas por medio de la Oficina del Registro Penal del Ministerio del Interior y otras fuentes. Estas personas no deben ser retenidas por más tiempo que dicho período si no existe una nueva orden de detención dictada por un juez". En el párrafo 10 de la Orden Presidencial se establece además que: "Nadie será detenido sin una orden judicial previa, excepto en los casos de flagrante delito o de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, y bajo la condición de que la persona detenida sea conducida ante un juez competente en un plazo de 24 horas". En virtud del párrafo 12: "Toda persona que infrinja los principios de los derechos humanos será responsable de ello. El Ministerio de Derechos Humanos supervisará la situación de las personas arrestadas y los detenidos, y presentará los informes correspondientes a las autoridades competentes".

114. En relación con esta cuestión también se dictaron, entre otras, las órdenes presidenciales N° 35/S, N° 173, N° 92/S y N° 105.

115. Todas estas órdenes presidenciales son conformes con las normas internacionales de protección de los derechos humanos, según las cuales constituye una garantía básica de un juicio justo que los detenidos sean conducidos ante las autoridades competentes con prontitud, de acuerdo con los siguientes tres principios:

a) Toda persona acusada de haber cometido un delito tiene derecho a ser conducida con prontitud ante una autoridad judicial competente para decidir sobre la legalidad de su detención y determinar si es necesario mantenerla bajo custodia a la espera del juicio;

b) Toda persona acusada tiene derecho a reunirse con su abogado defensor con el fin de conseguir su libertad, con o sin fianza, a la espera del juicio;

c) Ha de asegurarse un efectivo control y supervisión judicial para evitar la detención de personas en instalaciones no previstas a estos efectos.

116. La base legislativa de los principios antes mencionados se encuentra en el artículo 19 de la actual Constitución de la República del Iraq ("Se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo"). Es importante señalar que el Ministerio de Derechos Humanos mantiene una base de datos general, que se actualiza cada 24 horas y que se basa en las listas elaboradas por los equipos de inspección durante sus visitas periódicas a los centros de detención. Esta base de datos es fácilmente accesible a los familiares de los detenidos y reclusos, que pueden obtener información completa de ellos, incluso detalles de sus traslados. Las disposiciones de la

actual Constitución iraquí permiten también que todas las personas puedan recurrir a los tribunales.

117. En el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal (promulgado por la Ley N° 23 de 1971) se establece lo siguiente:

A. Si la persona detenida está acusada de un delito punible con una pena de arresto no superior a tres años o con una pena de cárcel más larga o con cadena perpetua, el juez podrá ordenar que se mantenga bajo custodia por períodos renovables de no más de 15 días u ordenar su libertad provisional, con o sin fianza, con el compromiso de un garante de que el acusado se presentará en persona ante el juez cuando este lo requiera, siempre que el juez tenga motivo para creer que la puesta en libertad del acusado no dará lugar a su huída ni perjudicará el curso de la investigación.

B. Si la persona detenida está acusada de un delito punible con la pena de muerte, los períodos de custodia especificados en el anterior párrafo A pueden ampliarse todo el tiempo que se precise para que la investigación avance hasta que el juez instructor o el tribunal penal dicte una decisión sobre el caso, al terminar la investigación preliminar o la investigación judicial, o al finalizar el juicio.

C. El período total bajo custodia no debe exceder de un cuarto del tiempo máximo de la pena imponible al delito por el que está acusada la persona detenida y bajo ningún pretexto debe ser superior a seis meses. Si resulta necesario ampliar el período de detención más allá del límite de seis meses, el juez someterá la cuestión a un tribunal penal para pedir permiso para la debida ampliación que no debe ser superior a un cuarto del tiempo máximo de la pena imponible, o si no debe ordenar su puesta en libertad, con o sin fianza, conforme a los términos del anterior párrafo B.

Esto significa que los períodos de tiempo especificados, que se supone que son los necesarios para dictar sentencia sobre los casos, respetan el principio de pronta comparecencia ante un juez, y que el principio de que "no existe ningún delito ni castigo salvo los establecidos en la ley" constituye una clara hoja de ruta para los agentes policiales y funcionarios instructores.

118. Cabe señalar que la Ley de amnistía general, N° 19 de 2008 constituyó un paso positivo hacia la consolidación de la unidad nacional y supuso una oportunidad para muchos iraquíes que habían cometido delitos contra otras personas o que estaban bajo sospecha o imputados para declarar sin haber sido todavía acusados. A pesar de las grandes consecuencias que tenía, dadas las circunstancias por las que estaba pasando el país, la ley se aplicó. De acuerdo con las estadísticas recogidas por el Ministerio de Derechos Humanos en colaboración con las direcciones de derechos humanos de los Ministerios de Defensa y del Interior y los departamentos correccionales de los Ministerios de Justicia y de Trabajo, el número de personas acusadas puestas en libertad en virtud de la ley totalizó 153.291 en el período que va del 27 de febrero de 2008 al 14 de febrero de 2009 y no se incluyeron otras 38.269 personas acusadas. Las observaciones jurídicas y de procedimiento que la Administración presentó sobre el texto del proyecto de ley motivaron la rectificación de numerosas lagunas procesales que contenía. La aplicación de la ley fue supervisada por los ministerios y se presentaron informes periódicos y observaciones a la Oficina del Primer Ministro y al poder judicial. Se presentaron estadísticas sobre el número de personas incluidas o no en la ley y se publicaron en el informe anual de 2009.

119. Muchos de los decretos, órdenes y directivas bajo los cuáles algunos responsables del poder ejecutivo, como el alcalde de Bagdad, ministros, el Primer Ministro, gobernadores provinciales y directores de unidades administrativas, estaban facultados para ordenar detenciones de personas sin recurrir a las autoridades judiciales fueron revocados

en cumplimiento del artículo 19, párrafo 12 a), de la Constitución ("Las detenciones administrativas estarán prohibidas").

120. Aunque los mecanismos de control del Ministerio de Derechos Humanos y otras instituciones han registrado algunas infracciones, se trata de casos aislados atribuibles a la mala conducta del personal o a la ignorancia de las leyes, reglamentos y directivas. Se están adoptando las medidas legales debidas contra toda persona que haya cometido una falta de este tipo y se aplica una política de sensibilización en virtud de la cual se exponen en todos los centros de detención normas relativas a la conducta y los derechos de los detenidos, que también se leen a los detenidos.

Artículo 10

121. La Constitución Permanente de 2005 consagra una serie de derechos y garantías, en particular para las personas acusadas o condenadas, lo que es una muestra de las normas generales que rigen la justicia penal en el Iraq. Los principios constitucionales básicos de justicia, igualdad y respeto a la dignidad humana y los derechos humanos pueden resumirse del siguiente modo:

- El principio de que no existe delito ni castigo salvo los establecidos en la ley; solo puede imponerse una pena por un acto que, en el momento de su comisión, estaba legalmente definido como delito; y la pena impuesta no debe ser mayor que la aplicable en el momento de la comisión del delito;
- El principio del carácter personal de las penas;
- El principio del carácter independiente y soberano del poder judicial, que no está sometido a otra autoridad que la ley; toda persona tendrá protegido y garantizado el derecho de recurrir a los tribunales; las audiencias de los tribunales serán públicas a no ser que el tribunal decida celebrarlas a puerta cerrada; nadie será arrestado o interrogado salvo de conformidad con una orden judicial; el sumario de la investigación será puesto en manos del juez competente en un plazo de 24 horas contadas a partir del momento en que se produjo la detención del sospechoso; y todas las personas tienen derecho a ser tratadas de forma justa en los procedimientos judiciales y administrativos;
- El principio de que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo y legal (art. 19, párr. 5, de la Constitución);
- El principio de que el derecho a la defensa es sacrosanto (art. 19, párr. 4, de la Constitución);
- El principio de la irretroactividad de las leyes penales, a no ser que sean más favorables para el acusado (art. 19, párr. 10, de la Constitución);
- El principio de que nadie podrá ser objeto de detención administrativa o mantenido bajo custodia en cárceles no oficiales;
- El principio de respeto de la dignidad humana y la prohibición de la tortura;
- El principio de que nadie podrá ser mantenido en custodia salvo en virtud de una orden de detención dictada por un juez debidamente autorizado.

122. En la Ley N° 2 de 2003 relativa a la gestión de los centros de detención y penitenciarios, que se publicó en el Boletín Oficial iraquí N° 3978, vol. 44, de 8 de junio de 2003, se establecían las normas que regulaban las condiciones de los centros de detención y penitenciarios en el Iraq y se hacía referencia, entre ellas, a las disposiciones de la Ley N° 151 de 1969 relativa a la administración de las cárceles. Las disposiciones de la

Ley de 2003 son acordes y están en sintonía con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y también con los demás principios pertinentes que constituyen garantías jurídicas de los derechos humanos básicos y del respeto a la dignidad humana. Estos principios pueden resumirse de la siguiente manera:

Todos los centros penitenciarios deben mantener un registro obligatorio, con páginas numeradas, en el que las personas encargadas anotarán los siguientes datos de cada recluso admitido en el centro:

- a) Información detallada sobre la identidad del recluso;
- b) Los motivos de su detención en el centro y cuál es la autoridad que la ha ordenado;
- c) La fecha y hora de admisión en el centro y las de salida;
- d) Ningún funcionario a cargo de un centro penitenciario puede admitir en él a una persona sin una orden de detención en propia y debida forma, cuyos detalles deben anotarse en el registro.

123. En la Ley relativa a la administración de las cárceles se reconocen a los reclusos numerosos derechos, entre otros:

- a) El derecho a la salud, la seguridad y el internamiento en un centro de detención debidamente estructurado y atendido (art. 5 de la ley);
- b) El derecho a que se apliquen las normas de higiene personal (art. 6);
- c) El derecho a la alimentación y al ejercicio físico (art. 8);
- d) El derecho a la práctica religiosa (art. 2);
- e) El derecho a la atención médica (art. 10);
- f) El derecho a visitas familiares y a tener contacto con el mundo exterior (art. 14);
- g) El derecho a presentar reclamaciones y quejas a las autoridades administrativas, supervisoras y judiciales (art. 13);
- h) El principio de la clasificación de los reclusos por género, edad y categoría penal (art. 4);
- i) El principio del respeto a la dignidad humana en el tratamiento de los reclusos (art. 23);
- j) El derecho de los reclusos a beneficiarse de programas educativos y laborales (art. 26);
- k) El principio de que deben adoptarse todas las medidas necesarias para que todos los reclusos que estén en condiciones de beneficiarse de la educación, incluida la instrucción religiosa, puedan hacerlo (art. 27);
- l) El principio de que los centros penitenciarios deben ser objeto de control e inspección (art. 21).

124. En la Ley N° 76 de 1983 relativa a la protección del menor se definen las normas nacionales de protección de los delincuentes juveniles, lo que incluye un conjunto de normas y mecanismos jurídicos y procesales para la protección de menores en riesgo de ser detenidos. En el artículo 1 de la ley se indica que su objetivo básico es asegurar la protección de los menores y poner fin a la delincuencia. En los artículos 6, 7 y 8 se establece una Junta de Protección de Menores, presidida por el Ministro de Trabajo y

compuesta por representantes del Departamento de Penas, la judicatura, el Ministerio del Interior y el Departamento de Menores, con la misión principal de debatir y adoptar una política anual para combatir la delincuencia juvenil. En los artículos 12 a 15 se establece la creación en todos los tribunales de menores de una oficina de estudios de la personalidad de los menores, que incluya a psicólogos sociales y médicos especializados en desequilibrios psiconeurológicos, para realizar exámenes médicos y psicosociales, y redactar informes detallados al respecto. En el artículo 48 de la ley se establece que todo joven detenido debe ser entregado inmediatamente a la policía de menores, que lo conducirá ante un juez instructor o un tribunal de menores.

125. En la ley se establece también que los jóvenes no deben ser detenidos por delitos menores; deben ser llevados a los centros que se determinan en el artículo 10 de la ley (centros de observación de menores/escuelas de reinserción para adolescentes/escuelas de reinserción para jóvenes/escuelas para jóvenes adultos/centros de reinserción juvenil). En el artículo 99 de la ley se establece la creación de una Sección de Seguimiento, que velará por el bienestar de los menores después de su salida de un centro tras haber completado el período de internamiento, ofreciéndoles apoyo material y moral para facilitar su integración sociolaboral y evitar que recaigan en la delincuencia en un futuro.

126. El Ministerio de Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones de la Orden N° 60 promulgada por la (disuelta) Autoridad Provisional de la Coalición bajo la que fue creado, controla la aplicación de los principios y preceptos antes mencionados por medio de equipos de especialistas formados en el Iraq y en el extranjero, que utilizan métodos y técnicas científicos actuales para supervisar y documentar cualquier deficiencia, de modo que puedan comunicarla a los órganos interesados y las autoridades superiores para que la corrijan. Es importante señalar que las violaciones de los principios y preceptos antes mencionados detectadas y documentadas en informes son de carácter aislado y no sistemático y muchas de ellas han sido rectificadas mediante la aplicación de las recomendaciones de los equipos de supervisión.

Artículo 11

127. En virtud de lo establecido en los artículos 40, 41 y 42 de la Ley N° 45 de 1980 relativa a la reclamación de deudas, las personas que no son capaces de cumplir una obligación contractual pueden enfrentarse a una pena de cárcel. Sin embargo, un deudor solo puede ser encarcelado en base a una reclamación presentada por el acreedor y una decisión dictada por el funcionario encargado de exigir el cumplimiento de las obligaciones (cobrador oficial), siempre que este último sea un juez. Además, un deudor solo puede ser encarcelado una vez por la misma deuda. En la ley se permite el encarcelamiento, por cuatro meses como máximo, de un deudor que, aunque pueda cumplir su obligación, rechace el acuerdo que le proponga el funcionario encargado de exigir el cumplimiento de las obligaciones. Debido a la política de agrupación aplicada por muchas administraciones de las cárceles y los centros de detención preventiva, los deudores encarcelados por incapacidad de cumplir una obligación económica son enviados todavía a cárceles en las que están recluidas personas condenadas por la comisión de delitos. Este hecho sigue siendo una fuente de preocupación para el Ministerio de Derechos Humanos, que ha solicitado al Consejo de Representantes que aprueben un proyecto de ley que corrija esta situación de manera acorde con el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país, conforme al artículo 8 de la actual Constitución iraquí, en el que se establece, entre otras cosas, que "el Iraq respetará sus obligaciones internacionales".

128. Legalmente no hay obstáculo al encarcelamiento de un deudor cuando se imponga o se ejecute la sentencia. Las siguientes circunstancias deben considerarse impedimentos al encarcelamiento o a las condiciones o la manera de ejecución:

- a) Que el deudor sea insolvente o incapaz de pagar o hacer honor a su deuda;
- b) Que el deudor tenga menos de 18 o más de 60 años de edad;
- c) Que el deudor reciba un salario o sueldo del Estado;
- e) Que las deudas se hayan extinguido en aplicación de la legislación sobre limitaciones o de cualquier otro modo.

129. En el artículo 13 de la Ley N° 56 de 1977 relativa a la recuperación de deudas por el Gobierno se faculta al Jefe de los funcionarios encargados de exigir el cumplimiento de las obligaciones para que encarcele a los deudores que incumplen sus obligaciones. Sin embargo, a la vista del considerable impacto psicosocial que supone el encarcelamiento para la reputación del deudor, el poder legislativo iraquí estableció normas y condiciones para regular la ejecución de penas de cárcel por deudas: el acreedor debe haber cumplimentado una reclamación explícita, sin la que el Departamento de Ejecución de Deudas no puede condenar a un deudor a la cárcel, incluso si cumple las otras condiciones para ello; y la orden de encarcelamiento debe ser dictada por un funcionario encargado de exigir el cumplimiento de las obligaciones que sea juez, pues de lo contrario el caso se remite a un juez de primera instancia que decidirá si impone una pena de cárcel.

Artículo 12

130. Bajo el anterior régimen dictatorial, antes de 2003, el Gobierno iraquí impuso numerosas restricciones, sin justificación jurídica, a la libertad de viajar de los iraquíes. Quienes querían salir del país tenían que pagar un impuesto de viaje de 400.000 dinares iraquíes, lo que suponía una pesada carga para los iraquíes que deseaban viajar al extranjero en busca de trabajo, dada la pobreza y el desempleo que sufría la sociedad iraquí. También se impusieron otras medidas arbitrarias, incluida la prohibición de viajar a ciertos funcionarios públicos que trabajaban en determinados sectores, como la industria militar y los organismos de seguridad, con el pretexto de evitar las filtraciones de información en el extranjero. Bajo las estrictas medidas de seguridad en vigor, los ciudadanos que deseaban viajar al extranjero necesitaban obtener un salvoconducto y, para este fin, debían someterse a un interrogatorio por el funcionario encargado de sellar el pasaporte, dependiente de la sección de seguridad del Departamento de Pasaportes.

131. Después de 2003, la Autoridad Provisional de la Coalición derogo una serie de decretos promulgados por el (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución, incluido el decreto que imponía un impuesto para viajar fuera del Iraq. El poder legislativo iraquí corrigió otras medidas y restricciones arbitrarias que habían sido impuestas anteriormente a través del artículo 44, párrafo 1, del de la Constitución de 2005, actualmente vigente en el país, en el que se establece que: "Los iraquíes gozarán de la libertad de circular, viajar y residir dentro o fuera del Iraq".

132. No obstante, la libertad de circulación no es absoluta en la medida en que está sujeta a una serie de restricciones impuestas para preservar un equilibrio entre los intereses públicos y privados, dándole preferencia a los primeros en caso de conflicto entre ambos, de acuerdo con las costumbres prevalecientes en la sociedad iraquí. Además, debido a que los pasos de frontera están abiertos y poco controlados, se ha producido un aumento de la actividad delictiva, como el contrabando o la trata de mujeres jóvenes que fueron engañadas por propaganda de trabajo en los Estados vecinos. Este hecho llevó al Ministerio del Interior a dictar unas directivas en las que se restringía el derecho de viajar de las mujeres en el grupo de edad de 18 a 42 años salvo en compañía de un varón con estrechos lazos de parentesco, lo que provocó situaciones delicadas y complejas. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado interpusieron numerosos recursos para

modificar estas directivas, puesto que eran incompatibles con el principio de la igualdad de género. Una vez que los pasos de frontera estuvieron sometidos a control y que se restableció la seguridad gracias al aumento de la capacidad de las fuerzas de seguridad de garantizar el orden público y la aplicación de la ley, el Consejo de Ministros promulgó la Decisión N° 88 de 2011, que establecía el Estatuto del Pasaporte N° 2 de 2011, en cuyo artículo 8 se establecía que solo las iraquíes por debajo de la mayoría de edad legal (18 años) debían obtener la aprobación de su tutor natural o legal para solicitar un pasaporte. Esta medida respondía al ámbito de la necesidad y del interés público, por los motivos antes mencionados. Sin embargo, las menores de 18 años casadas con el permiso de un tribunal tienen derecho a obtener un pasaporte, al considerarse esto implícito en el permiso otorgado por el tribunal en el momento de casarse. El decreto del (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución en que se prohibía la adquisición de propiedad o la residencia en Bagdad o en las zonas que se indicaban, salvo si la persona que desease residir allí estuviese registrada en las listas del censo de la población de 1957 de esa zona, fue derogado.

Artículo 13

133. Aunque la presencia de mano de obra extranjera en el Iraq fuese un fenómeno generalizado a finales del decenio de 1970 y principios del de 1980, fue reduciéndose gradualmente tras el estallido de la guerra entre el Iraq y el Irán de 1980 a 1988, y desapareció totalmente tras la imposición del embargo económico sobre el Iraq a consecuencia de su invasión del Estado de Kuwait en 1990. La residencia de extranjeros en el Iraq estaba regulada por la Ley de residencia de extranjeros de 1961, en la que se establecía la prohibición a los extranjeros de residir, viajar o transitar por determinadas zonas. Por ejemplo, no tenían permiso para residir en las provincias de Mosul, Arbil, Sulaymaniya y Kirkuk fuera de los límites municipales de los centros administrativos de las provincias, y los extranjeros que quisiesen viajar desde la capital a las zonas prohibidas antes mencionadas tenían que obtener la aprobación del Ministerio del Interior y la Dirección de Seguridad Pública. Con estas salvedades, los extranjeros podían residir o circular libremente en el Iraq, siempre que hubiesen obtenido debidamente un permiso de residencia.

134. La Ley administrativa de transición del Iraq derogó en 2004 la Ley de residencia de extranjeros, sobre la base de que desde 2003 había aumentado la fuerza de trabajo extranjera en el Iraq debido a la contratación de muchos extranjeros para trabajar en la zona internacional para las fuerzas multilaterales que habían entrado en el Iraq. Cuando estas fuerzas dejaron el Iraq por haber completado sus misiones de combate, muchos de estos trabajadores extranjeros, que se habían quedado en el país de forma encubierta, se incorporaron a diversos sectores laborales y muchos negocios y empresas nacionales fueron descubiertos empleando ilegalmente a trabajadores extranjeros para los que no habían obtenido los permisos oficiales. Este hecho supuso una circunstancia deplorable puesto que la mayoría de estos trabajadores extranjeros eran procedentes de países asiáticos y se concentraban en trabajos sin calificación del sector de los servicios, lo que es contrario a las disposiciones del artículo 23 de la Ley de trabajo promulgada por la Ley N° 71 de 1987. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no había autorizado la importación de trabajadores extranjeros en el Iraq, a excepción de un número muy reducido de permisos de trabajo otorgados a niñeras, y claramente había establecido en sus directivas que debían cumplirse determinadas condiciones, como la obligación de que el ama de casa necesitase urgentemente a la trabajadora debido a una enfermedad u otras razones.

135. No existen estadísticas del número de trabajadores extranjeros en el Iraq por el hecho de que muchos de ellos entraron en el país de forma clandestina y algunos grupos que entran por motivos de turismo se quedan a trabajar en el sector informal. El Gobierno

iraquí todavía no ha regulado la contratación de trabajadores extranjeros mediante la promulgación de leyes puesto que esta cuestión se rige todavía por la antigua Ley de trabajo iraquí, en virtud de la cual está prohibida la importación de mano de obra extranjera al menos que las competencias que se busquen no se encuentren en el Iraq. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha redactado una nueva ley de trabajo, que ha sido aprobada por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, y que actualmente está pendiente de la aprobación del Consejo de Representantes.

136. El campamento de Ashraf, donde viven desde el decenio de 1980 aproximadamente 3.000 personas pertenecientes a la organización iraní Muyahidin Jalq, que se opone al régimen político de la República Islámica del Irán, con la aprobación del régimen dictatorial del Iraq, es un ejemplo de la situación de los extranjeros que residen ilegalmente en el territorio iraquí. El Gobierno iraquí fijó el plazo límite para la evacuación del campamento a finales de diciembre de 2011 y la Misión de Asistencia para el Iraq de las Naciones Unidas (UNAMI) ha trabajado en estrecha colaboración con el Gobierno, el cuerpo diplomático, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y representantes de la población del campamento para encontrar una solución permanente para sus residentes. En 2011, debido a la presión interna motivada por el comportamiento delictivo y los actos provocativos de los residentes del campamento, decenas de los cuales estaban en orden de busca y captura por las autoridades judiciales iraquíes a la luz de los numerosos indicios de que la organización interfería en los asuntos internos del Iraq y de un Estado vecino, lo que está prohibido constitucionalmente, el Gobierno iraquí tomó la decisión soberana de acabar con su presencia en este campamento a finales de 2011.

137. El Gobierno iraquí, interesado en garantizar que sus acciones fuesen acordes con las normas internacionales, aprobó la mediación de la UNAMI en un esfuerzo por resolver este problema y, en consecuencia, firmó un memorando de entendimiento para la reubicación de algunos residentes del campamento en el Camp Liberty, sometido a control e inspección de la UNAMI, antes de la evacuación final, que estimaba que era conforme con las normas internacionales. El memorando de entendimiento fue firmado el 25 de diciembre de 2011 y entró en vigor en 2012, cuando los residentes del campamento empezaron a ser reubicados en barracones de unas 400 personas. Hasta la fecha, cinco barracones han sido habilitados bajo la supervisión de la UNAMI y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que controla todos los aspectos del proceso de traslado. El proceso todavía se está desarrollando y el Iraq está dando un trato diligente a los residentes del campamento, en conformidad con los principios de los derechos humanos y de la legislación iraquí. A pesar de la persistente dilación de los residentes y de sus intentos de obstruir el proceso de reubicación, creando problemas a los funcionarios gubernamentales iraquíes, nuestros funcionarios y las fuerzas de seguridad están ejerciendo el mayor grado de autocontrol para que el proceso termine de forma pacífica, bajo la supervisión de nuestro equipo ministerial que está controlando todos sus aspectos, desde el punto de partida hasta el de destino, conforme a las disposiciones del memorando de entendimiento.

Artículo 14

138. En el artículo 19 de la Constitución Permanente iraquí de 2005 se consagra una serie de garantías jurídicas en relación con la justicia penal, que las autoridades competentes tienen la obligación de respetar y aplicar cuando tienen que abordar cualquier caso que se les presente. Estas garantías pueden resumirse del siguiente modo:

1. El poder judicial es independiente y no está sujeto a otra autoridad que la ley.

2. No existe delito ni castigo salvo los establecidos en la ley y las penas solo pueden imponerse por actos que, en el momento de su comisión, fuesen considerados legalmente delito.
 3. La pena impuesta no puede ser mayor que la pena prevista en el momento de la comisión del delito.
 4. Toda persona tiene garantizado el derecho de recurrir a los tribunales.
 5. El derecho de defensa es sacrosanto y está garantizado en todas las fases de la investigación y el juicio.
 6. Se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestra se culpabilidad en un juicio legal y justo y, si es absuelto, no puede ser juzgado de nuevo por los mismos cargos a menos que se hayan presentado nuevas pruebas.
 7. Todas las personas tienen derecho a ser tratadas de forma justa en los procedimientos administrativos y judiciales.
 8. Las audiencias de los tribunales deben ser públicas a menos que el tribunal decida celebrarlas a puerta cerrada.
 9. Las penas son personales.
 10. Las leyes no tienen carácter retroactivo a menos que se disponga de otro modo, y esta excepción no es aplicable a las leyes que regulan impuestos y tasas.
 11. Las leyes penales no tienen carácter retroactivo a no ser que sean más favorables para el acusado.
 12. El tribunal asigna un abogado de oficio, a cargo del Estado, a las personas acusadas de delitos graves o de faltas menos graves, que no tengan un abogado para defenderlas.
 13. Está prohibida la detención administrativa.
 14. El encarcelamiento y la detención solo se permitirán en instalaciones previstas para ello en la legislación penitenciaria, en las que se deberá prestar atención médica y social, y que estarán bajo control de las autoridades del Estado.
 15. El sumario preliminar debe entregarse al juez competente en un plazo de 24 horas desde el momento de la detención del sospechoso y este plazo solo se podrá ampliar una vez y por el mismo período de tiempo.
139. En el artículo 35 de la Constitución se completan los principios antes mencionados con otros que suponen garantías adicionales de que la justicia penal será administrada de forma justa mediante el logro de un equilibrio entre, por un lado, los derechos de los órganos encargados de realizar la investigación y de reunir información y pruebas para demostrar la comisión del acto delictivo por la persona sospechosa de haberlo cometido y, por el otro, el derecho del sospechoso de defenderse y presentar argumentos jurídicos para refutar los cargos de que se le acuse. Entre estos principios cabe mencionar:
- La libertad y la dignidad humana deben protegerse;
 - Nadie puede ser detenido o investigado salvo si existe una orden judicial;
 - Está prohibida toda forma de tortura psicológica o física y de trato inhumano; no se tendrán en cuenta las confesiones obtenidas mediante coacción, amenaza o tortura; y la víctima tiene derecho a reclamar una indemnización, de acuerdo con lo establecido en la ley, por los daños físicos y mentales sufridos.

140. En el Código Penal iraquí, promulgado por la Ley N° 111 de 1969, se incluyen los siguientes principios, que son acordes y están en sintonía con las previsiones del artículo 14 del Pacto:

- No existe delito ni pena salvo los establecidos en la ley (art. 1);
- Debe aplicarse la ley más favorable al acusado (art. 2);
- La garantía de que nadie puede ser detenido por una persona que no está legalmente habilitada para ello (art. 421);
- La garantía de que ningún funcionario público puede exceder los límites de sus funciones (arts. 322 y 324);
- La garantía de que nadie puede ser sometido a tortura, que se define como un delito penal en el artículo 333.

141. En el Código de Procedimiento Penal, promulgado por la Ley N° 23 de 1971, se incluyen garantías jurídicas similares, como las que siguen:

- a) La garantía de la libertad (art. 92);
- b) La garantía de que no serán sometidas a registro ni personas ni instalaciones salvo si lo dicta la ley (art. 72);
- c) La garantía de que el acusado será juzgado en el plazo más breve posible (art. 109, párrs. a), b) y c));
- d) La garantía de que las personas acusadas de haber cometido delitos menores no pueden ser detenidas (art. 110, párr. b));
- e) La garantía de un interrogatorio legal (art. 123);
- f) El derecho a guardar silencio (art. 126, párr. b));
- g) La prohibición de utilizar medios ilegales para obtener una confesión (art. 127);
- h) Las confesiones no se pueden obtener mediante coacciones, promesas o amenazas físicas o psicológicas (art. 218).

142. El valor del testimonio de un hombre, frente al de una mujer, difiere en función del tipo de tribunal. En los tribunales que definen la situación jurídica de una persona y en los tribunales civiles, el propósito de un testimonio es corroborar un hecho en base a la intuición y la memoria, y para ello se da credibilidad al testimonio de dos hombres o, si ello no es posible, al testimonio de un hombre y dos mujeres, de acuerdo con los principios de la ley islámica (*sharia*) según los cuales este procedimiento se justifica porque las mujeres son más proclives a olvidar o carecer de intuición. Por otro lado, en los tribunales penales los testimonios de hombres y mujeres tienen igual valor puesto que se trata de testimonios presenciales basados en el sentido de la visión y la observación del delito en el momento de su comisión y, en consecuencia, la sentencia que se dicte contra el autor del delito, con penas que pueden ir desde la privación o restricción de la libertad hasta la pena de muerte, dependerá de las declaraciones de los testigos, independientemente de su género.

143. En el caso de los menores, en la Ley iraquí N° 76 de 1983 relativa a la protección de los menores, se establecen numerosas garantías para la categoría de menores, entre las que cabe mencionar las siguientes:

- a) No se pueden incoar procedimientos penales contra personas menores de 9 años de edad en el momento de la comisión del delito (art. 47).

b) Las investigaciones de casos en los que estén implicados menores deben ser asignadas a un juez de instrucción de menores (art. 49).

c) Los menores deben ser entregados a la oficina de estudios de la personalidad, integrada por un médico, titulado o no, o, de ser necesario, un pediatra especializado en desórdenes psiconeurológicos y un especialista en psicoanálisis o psicología, junto con sociólogos y, si se precisasen, especialistas en criminología y otras disciplinas relacionadas con cuestiones de menores. La tarea de la oficina es realizar exámenes físicos, mentales y psiquiátricos para diagnosticar desórdenes que los menores pudiesen estar padeciendo, determinar su nivel de madurez intelectual y emocional, y el nivel de conciencia del carácter ilegal del delito cometido, prescribir un tratamiento adecuado, estudiar su entorno social y el contexto en el que viven, y establecer el grado de implicación en el delito cometido.

d) Dicha oficina redacta un informe pormenorizado del estado físico, intelectual y psicosocial del menor, de las motivaciones que le llevaron a cometer el delito y de las medidas propuestas para su tratamiento.

e) Los menores seguirán teniendo que someterse a exámenes periódicos cada tres meses, o cuando sea necesario, hasta la fecha establecida para el final de las medidas adoptadas, momento en que se debe informar al tribunal de cualquier cambio en su situación.

f) El Ministerio de Salud se encuentra en el proceso de establecer una oficina de servicios psicosociales escolares en el centro administrativo de cada provincia, como parte de la infraestructura de salud escolar, a fin de estudiar y saber tratar a los menores con mal comportamiento y tendencia a delinquir que son remitidos a la oficina por las administraciones escolares u otros órganos.

g) Los menores acusados de cometer delitos o faltas son internados en centros de observación, a falta de los cuales se tomarán las medidas necesarias para que estén separados de los detenidos adultos.

h) Si un menor y un adulto están incluidos en la misma acusación, se instruirán procedimientos separados contra ellos y sus casos respectivos se remitirán a los tribunales competentes.

i) Los menores serán juzgados en audiencias cerradas a las que solo asistirán su tutor o uno de sus familiares y personas relacionadas con asuntos de menores cuya presencia en el tribunal se considere apropiada.

j) No se permite publicar el nombre, la dirección o fotografías de los menores, el nombre de su escuela o cualquier otro dato que pudiese desvelar su identidad.

144. En el siguiente cuadro se indica la capacidad de acogida de los reformatorios y escuelas para menores.

<i>Centro</i>	<i>Capacidad de acogida</i>
1. Centro de observación masculino/Bagdad	204
2. Centro de observación masculino/Nínive	120
3. Escuela de reinserción de adolescentes	200
4. Escuela de reinserción de jóvenes	200
5. Centro de reinserción de mujeres menores sin hogar	50
6. Centro de reinserción de hombres menores sin hogar	50

<i>Centro</i>	<i>Capacidad de acogida</i>
7. Escuela de reinserción de mujeres menores detenidas y reclusas	30
8. Escuela de reinserción de jóvenes condenados	50

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos, informe sobre la situación de las cárceles, 2011.

145. En el siguiente cuadro se recogen las estadísticas sobre el número de menores reclusos y detenidos, por género y categoría de delito.

<i>Tipificación del delito</i>	<i>2010</i>				<i>2011</i>				<i>Hasta finales de febrero de 2012</i>			
	<i>Reclusos</i>		<i>Detenidos</i>		<i>Reclusos</i>		<i>Detenidos</i>		<i>Reclusos</i>		<i>Detenidos</i>	
	<i>H</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	<i>M</i>
	14				18							
Art. 4, Ley antiterrorista		5	223	5		11	78	3	17	11	105	2
	8				5							
Art. 393, Código Penal	65	-	6	-	71	-	4	-	75	-	2	-
Art. 394, Código Penal	6	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-
Art. 396, Código Penal	16	-	-	-	13	-	1	-	11	-	1	-
Prostitución	-	2	-	14	-	19	-	8	-	20	-	2

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos, informe sobre la situación de las cárceles, 2011.

Artículo 15

146. En el artículo 19, párrafo 2, de la vigente Constitución iraquí de 2005 se establece que: "No existe delito ni castigo salvo los establecidos en la ley. Las penas solo pueden imponerse por actos que, en el momento de su comisión, eran considerados legalmente delito. La pena impuesta no puede ser mayor que la pena prevista en el momento de la comisión del delito". Este artículo está en conformidad con las disposiciones del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

147. En el artículo 19, párrafo 10, de la Constitución se establece además que: "Las leyes penales no tienen carácter retroactivo a menos que sean más favorables para el acusado".

148. En el Código Penal promulgado por la Ley N° 111 de 1969 se establece que no existe delito ni castigo salvo los establecidos en la ley y que cualquier disposición que imponga penas mayores no se aplicará a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor. Sin embargo, si en una nueva norma se despenaliza un delito o se impone una pena menor por la comisión del mismo, la nueva norma más favorable al acusado deberá aplicarse a los delitos cometidos antes de su entrada en vigor (art. 3). Cualquier norma que enmiende las disposiciones de la legislación penal en beneficio del acusado se aplicará a los actos cometidos antes de su entrada en vigor, a menos que se haya producido ya una sentencia firme en relación con esos actos (art. 4).

Artículo 16

149. Toda persona física tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, que empieza con el hecho jurídicamente probado de haber nacido con vida, pues no se reconoce la personalidad jurídica a los nacidos muertos. El bebé recién nacido debe haber salido completamente del útero de la madre y estar separado de él, y el juez puede verificar esta circunstancia por cualquier medio de prueba. La cuestión de la personalidad jurídica se aborda en el artículo 34, párrafo 1, del Código Civil iraquí (Ley N° 40 de 1951), en el que se establece que la personalidad jurídica empieza con el nacimiento con vida de una persona y termina con su muerte.

150. La capacidad contractual se aborda en los siguientes artículos del Código Civil (Ley N° 40 de 1951):

Artículo 93: "Toda persona tiene capacidad contractual a menos que dicha capacidad sea rescindida o restringida por ley". Artículo 98, párrafo 1: "El tutor podrá, si así lo autoriza un tribunal, ceder a un menor con capacidad racional, cuando este haya alcanzado los 15 años de edad, parte de la propiedad del menor y permitirle comerciar con ella como prueba de su competencia. Este permiso puede ser absoluto o limitado".

151. Una de las prioridades del régimen democrático iraquí es el respeto de la personalidad jurídica de todos los ciudadanos nacionales y residentes extranjeros. En virtud del artículo 18, párrafos 1, 2 y 3 a), y de otros artículos de la Constitución, todos los iraquíes tienen derecho a la nacionalidad iraquí, en la que se basa la ciudadanía, y se considerará iraquí a toda persona nacida de padre o de madre iraquí. Esta garantía básica de la personalidad jurídica individual se establece también en la Ley del estado civil, N° 65 de 1971. Este compromiso constitucional es una muestra de la determinación del Gobierno iraquí de impedir la repetición de situaciones trágicas que han sufrido los iraquíes a consecuencia de las políticas y prácticas del antiguo régimen baazista, que se negaba a reconocer la personalidad jurídica de ciertas personas e incluso de grupos amplios de la población, como fue el caso lamentable de los kurdos feyli, a quienes se les retiró nacionalidad iraquí y cuyos derechos humanos básicos como ciudadanos iraquíes, e incluso como seres humanos que residen en el territorio del Estado iraquí, fueron despreciados a pesar del hecho de que formaban parte de la población indígena del país.

152. En el Iraq se aplica el principio de reciprocidad en el reconocimiento de la personalidad jurídica. Sin embargo, los palestinos han sido eximidos en virtud del Decreto N° 220 de 2002, promulgado por el (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución, que les autoriza a adquirir la propiedad de bienes inmuebles en el Iraq.

Artículo 17

153. Esta cuestión se aborda en el artículo 17 de la Constitución iraquí, en el que se establece que: "Toda persona tiene derecho a disfrutar de la privacidad personal de manera compatible con los derechos de otros y la moral pública. Estará protegida la inviolabilidad del domicilio, en el que no se entrará ni se realizarán inspecciones o registros salvo por orden judicial y de conformidad con la ley". Este principio se ha puesto en práctica a través de los contratos que el Gobierno iraquí ha firmado con las empresas de telefonía y comunicaciones que actualmente operan en el país y que tienen la obligación de respetar la privacidad de las personas y la confidencialidad de sus comunicaciones. El código ético profesional al que se comprometen los periodistas y representantes de los medios de comunicación iraquíes contiene una serie de artículos que prohíben la intromisión en la privacidad personal o el lanzamiento de campañas que puedan perjudicar la reputación de

una persona. Está también prohibida la interceptación de las comunicaciones por telefonía móvil o fija, o por Internet, sin la obtención de una orden judicial para ello.

Artículo 18

154. Como otros Estados árabes orientales, el Iraq se caracteriza por su diversidad étnica y religiosa. Aunque los árabes conforman la gran mayoría de la población, esta también incluye a kurdos, seguidos de turcomanos y de grupos etnorreligiosos más pequeños como los caldeos, los hablantes de siríaco y los asirios.

155. La Constitución iraquí garantiza a todas las personas el ejercicio de las libertades, sin discriminación alguna. Proporciona amplias garantías para la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia mediante, entre otras cosas, la garantía de recursos efectivos para corregir cualquier violación de estas libertades o del derecho a participar en prácticas religiosas sin ser molestado, incluido el derecho a cambiar de religión, pero solo para convertirse al Islam. En virtud del artículo 10 de la Constitución, las figuras sagradas y los lugares de culto en el Iraq se consideran entidades religiosas y culturales cuya inviolabilidad el Estado tiene la obligación de salvaguardar y en los que debe garantizarse la libertad de práctica religiosa.

156. Las leyes de la República del Iraq prohíben la defensa del odio religioso puesto que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Se han realizado todos los esfuerzos posibles por asegurar el pleno respeto y la protección de los lugares de culto, edificios, figuras y símbolos, y se están adoptando medidas adicionales allí donde los lugares sagrados corren el riesgo de ser profanados o dañados. Las leyes iraquíes garantizan también el derecho de todas las personas a la libertad de culto o de congregación de acuerdo con alguna religión o creencia, a establecer y gestionar los espacios necesarios para este fin y a escribir, publicar y distribuir publicaciones relevantes a este respecto. De conformidad con la legislación internacional de derechos humanos, debe garantizarse el pleno respeto y la protección de la libertad de todas las personas y miembros de comunidades a establecer y dirigir instituciones religiosas, caritativas o humanitarias. Se han creado Consejos de Fundaciones Pías para la religión cristiana y otras religiones, como instituciones que atienden al bienestar de los miembros de credos no islámicos.

157. La legislación iraquí garantiza que ninguna persona que se encuentre bajo la jurisdicción del Gobierno iraquí pueda ser privada de su derecho a la vida, la libertad y la seguridad, ni ser sometida a tortura o ser arrestada o detenida de forma arbitraria, ser privada de su derecho al trabajo, la educación o la vivienda digna por tener o haber manifestado abiertamente una determinada religión o creencia. Cualquier violación de estos derechos puede ser perseguida en virtud del artículo 372 del Código Penal iraquí (Ley N° 111 de 1969), en el que se establece que: "Se impondrá una pena no superior a tres años de cárcel, o una multa no superior a tres cientos dinares, a quien:

- a) Abiertamente ataque o denigre las prácticas de una comunidad religiosa;
- b) Voluntariamente interrumpa, impida o coaccione una práctica, una celebración o una reunión de una comunidad religiosa;
- c) Produzca daños, destruya, desfigure o profane un edificio destinado a las prácticas religiosas de una comunidad religiosa o cualquier símbolo u objeto sagrado;
- d) Imprima o publique un libro, considerado sagrado por una comunidad religiosa, en el que deliberadamente distorsione el texto de tal forma que altere su significado o ridiculice sus postulados o enseñanzas;

- e) Insulte públicamente a un símbolo o a una persona venerada, reverenciada o respetada por una comunidad religiosa;
- f) Públicamente remede una ceremonia o celebración religiosa con el fin de ridiculizarla".

158. El Gobierno iraquí es muy consciente de la necesidad de evitar la estigmatización de cualquier religión asociándola con el terrorismo, puesto que ello podría tener consecuencias negativas. Todos los miembros de las comunidades religiosas tienen el derecho a la libertad de culto y de creencia, y su libertad de expresar su religión o sus creencias están sujetas solo a las limitaciones que establezca la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades fundamentales de otras personas sin anular el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. Estos principios se reflejan en las leyes y reglamentos nacionales, y en la política del gobierno, y están garantizados por el artículo 43 de la Constitución iraquí, en el que se establece que: "1. Los seguidores de todas las religiones y credos tendrán libertad para practicar sus ritos religiosos y gestionar sus bienes, asuntos e instituciones de carácter religioso. 2. El Estado garantiza la libertad de culto y la protección de los lugares de culto". También se pueden encontrar garantías similares en el artículo 1 del Estatuto N° 32 de 1981 relativo a la protección de las comunidades religiosas y en el artículo 2, párrafo 1, de la Ley N° 44 de 2008, que enmienda la Ley N° 36 de 2008 relativa a los consejos electorales provinciales, de distrito y de subdistrito.

159. El actual clima político se caracteriza por la apertura mental y la creencia en el pluralismo, la igualdad, la aceptación de los otros y el derecho de todos a estudiar las enseñanzas de sus religiones en las escuelas que tengan planes de estudio especiales. La Dirección General de Planes de Estudio incluye una dependencia especializada que publica libros de texto cristianos para los niveles educativos de primaria, secundaria y preuniversitaria. Los planes de estudio cristianos se imparten en 75 escuelas de primaria y en 48 escuelas de secundaria en las provincias de Bagdad (dos escuelas en Rusafa y dos en Karkh), Mosul, Kirkuk y Basora. Las escuelas en las que se imparte la fe yazidí fuera de la Región del Kurdistán siguen los planes de estudio de la religión yazidí que se enseñan dentro de esta Región. No existen planes de estudio especiales para la fe sabeo-mandea puesto que no hay escuelas donde se imparta debido a la falta de voluntad de las autoridades religiosas de conseguir el número necesario de alumnos debido a la inestabilidad de las condiciones de seguridad de la provincia de Kirkuk, donde vive la mayoría de los sabeo-mandeos. Con respecto a otros grupos étnicos, la Dirección General de Estudios Kurdos del Ministerio de Educación se ha ampliado considerablemente desde el derrocamiento del régimen dictatorial en 2003 y se ha ampliado el ámbito de sus competencias para que supervise también la enseñanza de otras lenguas étnicas iraquíes. Actualmente se conoce como la Dirección General de Estudios Kurdos y de Otras Etnias, que abarca tres departamentos académicos (kurdo, siríaco y armenio) y tiene la responsabilidad de supervisar la enseñanza de otras religiones iraquíes. Controla la enseñanza sistemática de la lengua kurda en la enseñanza preuniversitaria, así como la inclusión en los planes de estudio de los conceptos de hermandad nacional y los principios de los derechos humanos y la igualdad social en el Iraq. Se ha establecido una dependencia para supervisar los estudios en las lenguas de las distintas etnias y la Dirección General de Estudios Kurdos y de Otras Etnias ha seleccionado, examinado, entrevistado y contratado a 20 supervisores de dichos estudios y de la educación religiosa cristiana. Se ha abierto en Bagdad una escuela kurda feyli (chií), dentro del territorio de la jurisdicción de la Dirección General de Educación de Rusafa (2° distrito). Con respecto a la educación de las minorías en la Región del Kurdistán, existen direcciones generales de educación para las minorías turcomanas, siríacas y otras, que disfrutaban así de su derecho legítimo a la educación. Estas minorías tienen sus propias escuelas que ofrecen enseñanza en las lenguas maternas pero siguiendo los planes de estudio normalizados de la Región.

Artículo 19

160. La libertad de manifestar una opinión por cualquier medio está garantizada en el artículo 38, párrafos 1 y 2, de la Constitución iraquí de 2005, en los que se establece que el Estado garantizará la libertad de expresión de la opinión por cualquier, así como la libertad de prensa, impresión, publicidad, información y publicación, de un modo que no suponga una violación del orden o la moral pública. El Estado ha aplicado fielmente las disposiciones de este artículo de la Constitución de manera coherente con las obligaciones del Iraq en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puesto que el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión es un condición previa para la democratización del Iraq, que empezó en 2003. Todos los decretos del (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución que prohibían o criminalizaban el ejercicio de la libertad de expresión de la opinión, incluido el Decreto N° 840 promulgado el 4 de noviembre de 1986, fueron derogados. Actualmente no existen restricciones a la utilización de receptores de satélite y teléfonos móviles, las comunicaciones por Internet, la creación de emisoras de radio, la publicación de periódicos y revistas locales o la importación de periódicos y revistas del extranjero. La libertad de expresión se ha convertido en un elemento fundamental de la cultura política dominante en el país después de un largo período de aislamiento del mundo exterior y esta gran ampliación del ámbito de la información y de la libertad de opinión y de expresión refleja la situación saludable de la estructura democrática del país y el goce de los derechos humanos por su pueblo, como reflejan las siguientes estadísticas:

- a) El número de personas que tienen contratado el acceso a Internet pasó de 4.500 en 2003 a más de 261.000 en abril de 2007;
- b) En pocos meses después de abril de 2003, aparecieron más de 180 periódicos diarios y semanales, así como más de 40 revistas y boletines publicados con periodicidad por las instituciones gubernamentales;
- c) El 31 de octubre de 2010 estaban en funcionamiento 58 emisoras de televisión terrestre y por satélite;
- d) Hay en el país un total de 111 emisoras de radio en funcionamiento;
- e) Hay activas en el país 16 agencias de noticias independientes;
- f) Hay en Internet más de 1.100 sitios web iraquíes.

161. El sector de los medios de comunicación y publicación se ha visto gravemente afectado por la situación general del país en la que las personas que trabajan en los ámbitos del periodismo, la literatura y las artes han sido secuestradas, asesinadas, convertidas en el objetivo de asesinatos programados, amenazadas, detenidas y a veces perseguidas a consecuencia de su labor profesional, además de los peligros bien conocidos a los que se exponen los representantes y corresponsales de los medios de comunicación cuando cubren conflictos armados o actos de violencia que pueden lugar a la imposición de restricciones a sus actividades periodísticas y mediáticas, incluso el cierre de oficinas de algunos canales por satélite. Por todo ello, el Consejo de Representantes promulgó la Ley N° 21 de 2011 relativa a la protección de los periodistas, y actualmente está considerando la promulgación de otra disposición sobre la libertad de circulación de la información.

Artículo 20

162. Las leyes de la República del Iraq prohíben la defensa del odio religioso puesto que constituye una incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia. Se han realizado todos los esfuerzos posibles por asegurar el pleno respeto y la protección de los lugares de

culto, edificios, figuras y símbolos religiosos y, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, están garantizados el pleno respeto y la protección de la libertad de todas las personas y miembros de comunidades a establecer y dirigir instituciones religiosas, caritativas y humanitarias. También se han creado Consejos de Fundaciones Pías para la religión cristiana y otras religiones, como instituciones que atienden al bienestar de los miembros de credos no islámicos, conforme al artículo 40 de la Constitución en el que se establece que todas las personas tienen derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión.

163. Se están adoptando medidas adicionales allí donde los lugares sagrados corren el riesgo de ser profanados o dañados. Las leyes iraquíes garantizan el derecho de todas las personas a la libertad de culto o de congregación de acuerdo con alguna religión o creencia, a establecer y gestionar los espacios necesarios para este fin y a escribir, publicar y distribuir publicaciones relevantes a este respecto.

164. Cabe también mencionar los artículos 200, 201, 202, 203, y 204 del Código Penal en los que se considera delito punible estar asociado a una organización que promueva el racismo, incite al derrocamiento, el odio o el desprecio del sistema de gobierno establecido en el Iraq, o aclame o defienda cualquier cosa que pueda provocar el fanatismo confesional o sectario, provoque el conflicto entre comunidades o etnias, o despierte sentimientos de antipatía y odio entre la población iraquí.

165. El Consejo de Representantes iraquí, uniéndose a la campaña en todo el mundo para preservar la paz y la seguridad internacionales combatiendo la violencia, el terrorismo y la delincuencia organizada, promulgó la Ley antiterrorista, N° 13 de 2005 en la que se considera delito los actos de terrorismo que provoquen miedo, alarma y pánico entre la población, y que tengan como consecuencia la migración y los desplazamientos forzosos por motivos religiosos, sectarios o étnicos.

Artículo 21

166. El Gobierno del Iraq cree en la necesidad de que se respete el derecho de reunión pacífica como parte integrante y corolario natural del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y como medio legítimo de expresión de la opinión pública. El Gobierno tiene la obligación de comunicarse honestamente con el pueblo y de informarle de la auténtica naturaleza de los problemas a que se enfrenta, de modo que pueda entablar con él un diálogo positivo y asegurar a ambas partes una adecuada información. De acuerdo con esto, todas las instituciones gubernamentales están obligadas a respetar el ejercicio de este derecho y a regular y proteger las reuniones pacíficas de forma que se mantenga el orden público del país, especialmente dadas las circunstancias por las que atraviesa el país a consecuencia de los ataques armados lanzados por grupos terroristas al margen de la ley que con frecuencia eligen como objetivo reuniones públicas pacíficas.

167. El derecho de manifestación pacífica está protegido mediante las siguientes medidas y procedimientos legislativos y administrativos:

A. Medidas legislativas

Constitución iraquí de 2005

168. El derecho de manifestación pacífica y de expresión de la opinión está garantizado en el artículo 38 de la Constitución, en el que se establece lo siguiente:

"El Estado garantizará, de una forma que no viole el orden y la moral públicas:

- a) La libertad de expresión de la opinión por cualquier medio;

- b) La libertad de prensa, impresión, publicidad, información y publicación;
- c) La libertad de reunión y de manifestación pacíficas, que se regularán por ley".

169. En el Código Penal iraquí (Ley N° 111 de 1969) se regula el ejercicio de este derecho a través de las siguientes disposiciones:

- Artículo 220: Si cinco personas o más reunidas en un lugar público alteran la seguridad pública y las autoridades les ordenan dispersarse, cualquier persona a la que se dé esa orden y no la cumpla será castigada con una pena de cárcel no superior a un año y/o una multa de hasta cien dinares.
- Artículo 221: Quien convoque, organice o participe en una reunión en un lugar público a sabiendas de que existía una prohibición de las autoridades de este tipo de reunión será castigado con una pena de cárcel no superior a un año y/o una multa de hasta cien dinares. La misma sanción será aplicable a quien incite públicamente a esa reunión, aunque su llamamiento no haya tenido efecto.
- Artículo 222: a) Si la finalidad de una reunión es cometer un delito o falta, impedir la aplicación de leyes, reglamentos o decisiones, influir en las actuaciones de las autoridades públicas o privar a una persona de su libertad de acción mediante el uso de la fuerza o amenaza, quien convoque, organice o participe en reuniones de este tipo siendo consciente de su finalidad, o no la abandona después de conocer dicha finalidad, será castigado con una pena de cárcel no superior a dos años y/o una multa de hasta doscientos dinares; b) Si cualquiera de los participantes en una reunión utiliza la fuerza o la amenaza, o abiertamente lleva un arma que podría utilizar para causar muertes, la persona que convocó u organizó esa reunión y quien participe en ella a sabiendas de la finalidad para la que fue convocada será castigada con una pena de cárcel y/o una multa de hasta trescientos dinares; c) Si cualquiera de los participantes en una reunión comete un delito en cumplimiento de la finalidad para la que esta fue convocada, todas las personas que participen en la reunión en el momento de la comisión del delito serán castigadas con las sanciones que establece la ley si eran conocedores de la finalidad de la reunión. La persona que convocó u organizó la reunión será castigada con la sanción que establezca la ley por ese delito incluso si no estaba presente en la reunión en el momento de la comisión; d) Nada de lo establecido en este artículo podrá interpretarse como un argumento en contra de la imposición de las sanciones mayores que establezca la ley.

170. La Orden N° 19 de 2003 de la Autoridad Provisional de la Coalición regulaba el derecho de reunión y manifestación pacíficas de manera acorde con la etapa durante la que fue promulgada. Las disposiciones de los artículos 220, 221 y 222 del Código Penal se suspendieron sobre la base de que imponían unas restricciones injustificadas al derecho de las personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

B. Medidas administrativas

171. El Ministerio del Interior publicó una declaración en la que reconocía que la libertad de expresión de la opinión y el derecho de reclamación por cualquier medio pacífico legítimo que no implique el uso de la violencia eran derechos constitucionales garantizados a todos los iraquíes. En la declaración se establecían las siguientes reglas y condiciones para celebrar manifestaciones pacíficas: sus organizadores deben presentar una solicitud al Ministerio del Interior, acompañada de una aprobación del Excmo. Sr. Ministro del Interior y de la opinión del gobernador provincial, con al menos 72 horas de antelación sobre el comienzo de la manifestación; esta ha de ser pacífica y rechazar los actos de violencia, y sus eslóganes no deben incitar a la violencia entre comunidades; los organizadores deben

identificarse y especificar el número aproximado de manifestantes, así como la duración y el recorrido de la manifestación; está prohibido llevar cualquier tipo de arma, incluso armas con licencia, en las manifestaciones, que habrán de ser escoltadas mientras duren únicamente por fuerzas dependientes del Ministerio del Interior; si una manifestación se vuelve violenta, se emplearán los medios previstos para dispersar a los manifestantes.

172. De acuerdo con las disposiciones del artículo 122, párrafo 3, de la Constitución y el artículo 24 de la Ley N° 21 de 2008 relativa a los poderes provinciales (de las provincias que no están integradas en una región), los gobernadores provinciales son los funcionarios de más alto rango con capacidad ejecutiva dentro de sus provincias y, como tales, tienen poderes para autorizar asambleas y manifestaciones pacíficas ya que esta decisión recae en el ámbito de su jurisdicción y competencias, a tenor de la nueva estructura federal y descentralizada del Estado. Sin embargo, las fuerzas militares de seguridad dentro de la provincia deben ser avisadas con suficiente antelación para poder adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los participantes en la reunión o manifestación y evitar que estos actos sean utilizados para propósitos contrarios al proceso político y el interés público.

C. Medidas adoptadas para controlar las restricciones impuestas al derecho de manifestación

173. El Ministerio de Derechos Humanos, por ser una de las instituciones interesadas en el derecho de manifestación pacífica, ha enviado comités encargados de evaluar los hechos sobre el terreno para observar el proceso democrático y también para controlar los métodos que utilizan las autoridades policiales, a fin de garantizar el cumplimiento de las siguientes prácticas:

- Protección de la seguridad;
- Permiso a los medios de comunicación para cubrir las manifestaciones;
- Asistencia de funcionarios gubernamentales para tomar nota de las reclamaciones de los manifestantes;
- Inmunidad para los manifestantes si las reclamaciones que hacen no son acordes con las normas y reglamentos en vigor, puesto que ello forma parte de la libertad de expresión de la opinión.

174. Por medio de sus mecanismos reglamentarios internos, el Consejo de Representantes puede ayudar a promover los derechos humanos en el Iraq ya que, de acuerdo con sus normas de funcionamiento, tiene comités parlamentarios y, en particular, un comité de derechos humanos dedicado a esta cuestión.

175. Un ejemplo de las medidas adoptadas para promover y difundir la cultura de los derechos humanos entre los funcionarios de policía son los numerosos cursos que el Ministerio de Derechos Humanos ha organizado para instruir a los miembros de cualquier rango de las fuerzas armadas y de la policía sobre el significado de la protección de los derechos humanos de acuerdo con los instrumentos internacionales pertinentes. También existe una Academia de Policía con un personal altamente calificado para enseñar a los cadetes los principios de los derechos humanos y la aplicación de normas nacionales e internacionales.

176. El Gobierno actúa con diligencia en la promoción y protección de los derechos humanos en el Iraq cumpliendo los siguientes compromisos que considera esenciales para asegurar la materialización de los derechos y obligaciones garantizados en la Constitución:

- a) Formulación de un plan quinquenal para la promoción y protección de los derechos humanos;

b) Finalización del proceso de establecimiento de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, cuyo Estatuto ya ha sido aprobado;

c) Finalización del marco legislativo mediante la promulgación de las leyes que están previstas en la Constitución de una forma acorde con los tratados internacionales, incluidas leyes para regular las actividades de los partidos políticos, el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, la celebración de elecciones y medidas para combatir la trata de personas y garantizar el goce del derecho a la libertad de opinión y de expresión a través de, entre otras cosas, la protección de los periodistas y del derecho a recibir información;

d) Las autoridades administrativas han presentado un proyecto de ley que dará fuerza de ley al derecho de expresar opiniones libremente y al derecho de reunión y manifestación pacíficas, puesto que la falta de un reconocimiento legal de este tipo puede eliminar cualquier sentimiento de responsabilidad relacionado con el respeto por el imperio de la ley y puede favorecer que se abuse de estas libertades y se cometan graves violaciones de los derechos humanos.

177. Dada la escasa conciencia cultural de la manera en que se debe ejercer este derecho, existe la posibilidad de que organizaciones con objetivos contrarios al interés general abusen del mismo y que las manifestaciones sean utilizadas por grupos que pretenden arreglar cuentas con otros grupos. Los manifestantes han cometido de esta forma muchas infracciones de la ley. Aunque el Ministerio del Interior ha adoptado medidas para preservar la seguridad durante las manifestaciones, estas medidas son directivas internas que no tienen fuerza de ley para imponer obligaciones y sanciones a los ciudadanos, funcionarios y órganos ejecutivos en caso de violación de sus disposiciones. Las reglas y condiciones antes mencionadas son meros reglamentos procesales para la celebración de manifestaciones pacíficas y pueden dar licencia a las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior para adoptar medidas represivas contra los manifestantes sin el debido procedimiento legal y para controlar las manifestaciones de forma arbitraria, restringiendo así la libertad de las personas de manifestarse a favor de mejores servicios de infraestructura, mejores condiciones de vida o de la liberación de detenidos. Diversos grupos, como las mujeres, las familias de detenidos y las minorías religiosas, celebraron manifestaciones pacíficas en 2011, pero se prohibió a los homosexuales que desarrollaran actividades de este tipo puesto que sus prácticas sexuales, que son contrarias a los preceptos de la ley islámica (*sharia*), constituyen un delito penado por la ley iraquí.

Artículo 22

178. En el artículo 39 de la Constitución Permanente de 2005 se garantiza la libertad sin restricciones e incondicional de formar partidos políticos y unirse a ellos. A pesar de la falta de legislación que regule sus actividades en el país, desde abril de 2003 se han creado 160 partidos políticos, después de muchos decenios durante los que el pueblo iraquí careció de las libertades políticas a consecuencia de la prohibición de los partidos políticos, cuya creación se tipificó como delito a finales del decenio de 1970. En la Orden N° 97 de 7 de junio de 2004 de la Autoridad Provisional de la Coalición se definía las entidades políticas como aquellas cuyo objetivo era participar en las elecciones y que hubiesen presentado sus estatutos.

179. La libertad de crear partidos políticos constituye una garantía básica del pluralismo político. De acuerdo con las exigencias de la vida política y la transición democrática, y a fin de regular el marco jurídico para la creación de partidos políticos sobre una base nacional y democrática que asegure el pluralismo político y la más amplia participación en la dirección de los asuntos del país, se ha redactado un proyecto de ley sobre partidos

políticos que ha sido presentado al poder legislativo (el Consejo de Representantes) con el fin de derogar la Ley de partidos políticos, N° 30 de 1991.

180. Con respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, antes del derrocamiento del régimen dictatorial las actividades de estas organizaciones estaban reguladas por la Ley de asociaciones, N° 13 de 2000. Sin embargo, la nueva libertad de acción de la sociedad civil y el número creciente de organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras después del cambio de régimen llevaron al Director de la Autoridad Provisional de la Coalición a dictar la Orden N° 45 de noviembre de 2003 relativa a la inscripción de organizaciones no gubernamentales, a fin de regular sus actividades y evitar su utilización para fines ilegales o fraudulentos. En el artículo 45 de la Constitución iraquí se establece que: "El Estado procurará apoyar, desarrollar y reforzar el papel de las instituciones de la sociedad civil y preservar su independencia".

181. En el Iraq existe un departamento, dependiente de la secretaría del Consejo de Ministros, que se encarga de la inscripción de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. Este departamento, que fue creado en 2003 en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Cooperación como Centro de Inscripción de ONG, posteriormente fue segregado como Oficina de Asistencia a las ONG, en virtud de la Orden N° 16 de 2005, y finalmente fue renombrado Departamento de ONG, en virtud de la Orden N° 122 de 2008. El Consejo de Representantes promulgó la Ley N° 12 de 2010 relativa a las organizaciones no gubernamentales con el fin de regular la creación y las condiciones para ser miembro de ONG y la inscripción de ONG iraquíes y de filiales de ONG extranjeras. La ley ha sido diseñada para:

- a) Apoyar, desarrollar y reforzar el papel de las organizaciones de la sociedad civil y preservar su independencia conforme a la ley;
- b) Promover la libertad de los ciudadanos para formar organizaciones no gubernamentales y unirse a ellas;
- c) Establecer un mecanismo central para regular la inscripción de organizaciones no gubernamentales iraquíes y extranjeras.

182. En el artículo 4, párrafo 1, de la ley se establece que: "Toda persona física o jurídica iraquí tiene derecho a formar una organización no gubernamental, unirse a ella o dejarla". En su artículo 34 se establece además que: "Por la presente se derogan las siguientes disposiciones: a) Ley N° 34 de 1962 relativa a las asociaciones con relaciones con el extranjero; b) Ley N° 13 de 2000 relativa a las asociaciones; c) Orden N° 45 de 2003 de la Autoridad Provisional de la Coalición; d) Orden N° 16 de 2005, por la que se segrega la Oficina de Asistencia a las ONG".

183. El departamento de ONG de la secretaría del Consejo de Ministros ha emitido más de 400 certificados de inscripción de organizaciones de la sociedad civil que cumplían las condiciones fijadas en la Ley N° 12 de 2010 relativa a las organizaciones no gubernamentales, actualmente en vigor, y en las directivas promulgadas en aplicación de la misma. El departamento también ha anulado la inscripción de 1.681 organizaciones que no tenían la personalidad jurídica o no eran entidades legales inscritas antes del 9 de marzo de 2010.

Artículo 23

184. La obligación del Estado de asegurar la protección y el bienestar de las familias iraquíes, que forman el núcleo de la sociedad, se establece en las siguientes disposiciones del artículo 29 de la Constitución:

1. a) La familia es la unidad fundamental de la sociedad; el Estado protegerá su integridad y sus valores religiosos, morales y nacionales;
- b) El Estado garantiza la protección de madres, niños y personas mayores; atenderá a las necesidades de la infancia y de los jóvenes y les ofrecerá las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus aptitudes y capacidades;
2. Los niños tienen derecho a que sus padres los críen, cuiden y eduquen, y los padres tienen derecho a que sus hijos los respeten y cuiden, en particular en caso de necesidad, discapacidad o envejecimiento;
3. Estará prohibida toda forma de explotación económica de niños y el Estado adoptará las medidas necesarias para protegerlos;
4. Estará prohibida toda forma de violencia y de abuso en la familia, la escuela y la sociedad.

185. La Ley N° 188 de 1959 relativa al estatuto personal, con sus enmiendas, regula todos los aspectos del matrimonio, incluido el registro, la custodia legal, la constitución por el marido del fondo fiduciario matrimonial para la mujer, el mantenimiento, el divorcio y la separación. En el artículo 3, párrafo 1, de la ley se define el matrimonio como "un contrato entre un hombre y una mujer, en virtud del cual esta se convierte en su cónyuge legal a efectos de formar una familia y tener hijos". Las disposiciones de dicha ley son acordes con todas las escuelas de derecho islámico.

186. El poder legislativo iraquí ha establecido una serie de condiciones que deben observarse en el caso de un matrimonio con una menor de edad, que se puede definir como "un contrato entre un hombre y una mujer menor de edad, en virtud del cual esta se convierte en su cónyuge legal a efectos de formar una familia y tener hijos". Implica por tanto el casamiento de una chica menor de 18 años de edad. Las condiciones del matrimonio en general son: una oferta de matrimonio por el posible novio, la aprobación del tutor legal de la novia, el cumplimiento de las condiciones legales para poder casarse (el hombre y la mujer deben tener más de 18 años de edad) y un certificado, después de un examen por la autoridad médica competente, de que ambas partes en el contrato han alcanzado la pubertad.

187. En el artículo 7, párrafo 1, de la Ley relativa al estatuto personal se define la edad en que puede contraerse matrimonio de la siguiente manera: "Para que el matrimonio sea válido, las dos partes en el contrato deben estar en plena posesión de sus facultades mentales y deben haber alcanzado la edad de 18 años". Aunque esta sea una norma general, en el artículo 8, párrafo 1, se establece la siguiente excepción: "Si una persona mayor de 15 años desea casarse, el juez podrá autorizar el matrimonio dependiendo de la aprobación de su tutor legal y una vez que se establezca que dicha persona tiene la capacidad legal y física. Si el tutor no diera una respuesta, el juez establecerá un plazo máximo para que decida si da su aprobación. A falta de objeciones por parte del tutor, o si sus objeciones no son dignas de consideración, el juez autorizará el matrimonio".

188. En el caso de una menor cuyo matrimonio con 15 años de edad haya sido autorizado por un juez del estatuto personal, su capacidad legal para disponer de una herencia u obtener la custodia de sus hijos al fallecer su marido, o divorciarse de él, deben ser la misma que la de una mujer que goza de plena capacidad legal para disponer de su propiedad. Esta era la práctica habitual hasta que el Consejo de Estado promulgó la Decisión N° 24/2005/646 de 8 de junio de 2005, en la que se establece que: "Toda persona que, con más de 15 años de edad, se haya casado con la autorización de un tribunal se considerará que posee plena capacidad legal en relación con los asuntos del estatuto personal. Sin embargo, dicha capacidad no implicará el pleno derecho a disponer de la propiedad y participar en transacciones comerciales". Aunque esta disposición es acorde

con las disposiciones del derecho civil que regulan esta cuestión, implica dar la tutela de las mujeres viudas y divorciadas, y sus niños, a otra persona, como un tío o un abuelo, que podrá por tanto gastar su fortuna y determinar su futuro. Esto podría suponer un impedimento a que las mujeres y niños disfruten de sus derechos si esa persona decidiese aprovecharse de ellos.

189. La cuestión de los matrimonios forzados puede plantearse en caso de un matrimonio con una menor en el que esta careciera de la fuerza de voluntad y la conciencia necesarias para decidir su futuro por lo que, incluso si quisiera no dar su consentimiento, su rechazo podría ser ignorado y podría ser sometida a muchas formas de persuasión, instigación o amenaza por parte de su familia. En consecuencia, el poder legislativo ha abordado la cuestión de los matrimonios forzados en el artículo 9 de la Ley relativa al estatuto personal, en el que se establece lo siguiente:

1. Ningún familiar o tercero tendrá derecho a forzar el matrimonio de otra persona, sea hombre o mujer, sin contar con el consentimiento de dicha persona y todo contrato de matrimonio concluido mediante coacción será considerado nulo y sin efecto, si el matrimonio no se ha consumado. Asimismo, ningún familiar o tercero tendrá derecho a impedir el matrimonio de una persona en condiciones de casarse conforme a las disposiciones de esta ley.

2. Cualquier familiar en primer grado que infrinja las disposiciones del párrafo 1 de este artículo será castigado con una pena de cárcel no superior a tres años y/o una multa. Si la persona que infringe estas disposiciones no es un familiar en primer grado, será castigada con una pena de cárcel de un mínimo de 3 y un máximo de 10 años.

190. A pesar de la laguna jurídica que existe en relación con los matrimonios con una menor de edad, consideramos que el fenómeno de los matrimonios extrajudiciales, en particular entre personas jóvenes, ha adquirido proporciones alarmantes en el país por no haber sabido aplicarse la ley a este respecto desde los acontecimientos de 2003. Estos matrimonios pueden ser motivo de imputación en virtud del artículo 10, párrafo 5, de la Ley relativa al estatuto personal, en el que se establece que: "Cualquier hombre que concluya un contrato de matrimonio extrajudicial será castigado con una pena de cárcel no inferior a seis meses y no superior a un año o una multa de no menos de trescientos y no más de mil dinares. La conclusión de un contrato de matrimonio extrajudicial por un hombre que ya esté casado implicará que se enfrente a una pena de cárcel no inferior a 3 años y no superior a 5". Quienes cometan estos delitos serán remitidos por el juez del estatuto personal a los instructores penales. Las siguientes estadísticas recopiladas por el Consejo Judicial Superior muestran el número de contratos matrimoniales y peticiones de divorcio durante el período de 1996 a 2011.

<i>Año</i>	<i>Contratos de matrimonio</i>	<i>Peticiones de divorcio</i>
1996	32 192	127 302
1997	28 800	127 901
1998	25 652	126 149
1999	26 457	148 963
2000	26 110	171 134
2001	29 093	155 391
2001	27 601	161 095
2003	20 649	175 579
2004	262 554	28 690

<i>Año</i>	<i>Contratos de matrimonio</i>	<i>Peticiones de divorcio</i>
2005	258 259	33 348
2006	234 852	35 627
2007	217 221	41 536
2008	243 056	44 116
2009	267 289	61 466
2010	56	-
2011	85 627	59 515

191. La cuestión de la poligamia se aborda en el artículo 3, párrafos 4 y 6, de la Ley relativa al estatuto personal, en los que se establece que:

4. No estará permitido el matrimonio con más de una mujer sin la autorización de un juez y esta autorización dependerá del cumplimiento de las siguientes condiciones: a) El marido debe tener suficiente capacidad económica para mantener a más de una mujer; b) Debe existir un beneficio legítimo.

6. Todo hombre que acuerde un contrato de matrimonio con más de una mujer, infringiendo las disposiciones de los anteriores párrafos 4 y 5 podrá enfrentarse a una pena de cárcel no superior a un año o a una multa no superior a cien dinares.

Artículo 24

192. Debido a la necesidad de asegurar la protección debida a los niños del Iraq y de garantizar sus derechos, el Gobierno de la República del Iraq, representado por la Comisión para la Protección de la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha emprendido la tarea de formular una política integral a escala nacional para proteger a los niños y, para este fin, ha identificado los siguientes fenómenos como principales retos a los que se enfrentan los niños del país: trabajo infantil, matrimonio de niños, trata de niños, niños con problemas con la ley, niños desatendidos por sus padres, mutilación genital femenina, explotación sexual de niños, niños víctimas de conflictos armados, abuso de niños, niños con necesidades especiales y el peligro que suponen para los niños las minas terrestres.

193. El Gobierno del Iraq ha adoptado todas las medidas posibles a nivel legislativo, ejecutivo y judicial para asegurar la protección de la infancia, reforzar la cohesión y la estabilidad de la familia, ayudar a resolver los problemas y los conflictos familiares que puedan impedir a los niños gozar de los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, y asegurar una vida estable, un entorno familiar seguro y una adecuada educación bajo el cuidado de sus padres, de acuerdo con el elevado nivel de atención que deben recibir madres y niños.

194. La legislación nacional define las obligaciones que tienen los padres y los tutores legales hacia los niños. En disposiciones tales como la Ley relativa a la protección del menor y la Ley relativa a la protección del niño se subraya la necesidad de proteger el mejor interés del niño y en los artículos 55 y 57 de la Ley N° 188 de 1959 relativa al estatuto personal también se establecen disposiciones sobre la lactancia materna y la custodia.

195. Toda persona física tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, que empieza con el hecho jurídicamente establecido de haber nacido con vida, ya que no se

reconoce la personalidad jurídica a los nacidos muertos. La cuestión de la personalidad jurídica se aborda en los artículos 34, 35 y 40 del Código Civil iraquí (Ley N° 40 de 1951).

196. El derecho a adquirir una nacionalidad es la base para el goce de todos los derechos ciudadanos dentro del Estado, como el derecho de residencia, el derecho de acceso a la función pública y el derecho de participar en la vida política optando como candidato a ser miembro de los diversos consejos de representación, ejerciendo el voto en las elecciones generales y contribuyendo de este modo a la autoridad legítima del Estado, que deriva del pueblo, compuesto por un grupo de ciudadanos. De acuerdo con el principio de que "el pueblo es la fuente de la autoridad", todo ciudadano debe desempeñar un papel activo y fundamental para establecer esta autoridad. Una persona que puede dar prueba de su nacionalidad tiene también el derecho de gozar de todos los demás derechos (no políticos), como el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, incluida la cobertura médica, y el derecho al trabajo. En el artículo 18, párrafo 1, de la Constitución Permanente iraquí de 2005 se establece que: "Todo iraquí tiene derecho a la nacionalidad iraquí, que es el fundamento de su condición de ciudadano". Fuera de las fronteras de un Estado, estar en posesión de la nacionalidad de este garantiza la protección frente a otros Estados. A este respecto, cabe señalar que el régimen dictatorial cometió el delito de genocidio contra los kurdos feyli en el Iraq durante el decenio de 1980.

Artículo 25

197. En virtud del artículo 20 de la Constitución Permanente de 2005, todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y a ejercer sus derechos políticos, incluidos el derecho de voto y de ser elegido. La democracia es la garantía última de la protección de los derechos humanos, y las elecciones democráticas y libres constituyen el proceso fundamental por el que los ciudadanos pueden desempeñar efectivamente un papel para determinar la forma y la composición de sus instituciones políticas.

198. En 2005, el pueblo iraquí pudo participar en tres convocatorias de elecciones nacionales, lo que supuso el mayor ejercicio de democracia vivido en el país. En enero de 2005 se celebraron elecciones a la Asamblea Nacional, seguidas en octubre de un referendo sobre la Constitución redactada por la Asamblea Nacional y a continuación, en diciembre de ese mismo año, unas elecciones legislativas. En estas últimas elecciones, 12.191.133 votantes registrados del total de 15.568.702, es decir, el 78% del electorado, fueron a las urnas a depositar sus votos en las 31.348 mesas electorales atendidas por 200.000 funcionarios en todas las provincias del país. Este proceso, que fue supervisado por 126.125 observadores iraquíes y 949 observadores internacionales, además de 272.295 representantes de entidades políticas, implicó la elección de 275 parlamentarios entre un total de 7.655 candidatos encuadrados en 307 listas de entidades políticas registradas, incluidas 19 coaliciones. Cerca de 300.000 iraquíes residentes en el extranjero votaron en 95 centros electorales de 15 países. Las elecciones permitieron establecer un Consejo de Representantes permanente, compuesto por 275 miembros, de los que 75 (27,3%) eran mujeres. Este fue el porcentaje más alto de escaños ocupados por mujeres en parlamentos nacionales en 2006.

199. El gobierno descentralizado es un método por el que el Estado iraquí se gestiona mediante un sistema de consejos provinciales elegidos de forma proporcional al tamaño de la población de cada provincia. Las elecciones a consejos provinciales se han celebrado en dos ocasiones, la primera en diciembre de 2005 y la segunda en enero de 2009.

200. Durante las últimas elecciones a consejos provinciales celebradas el 31 de enero de 2009, un total de 14.431 candidatos compitieron por 440 escaños en los consejos que

designan a los gobernadores provinciales que supervisan la gestión administrativa local de sus provincias, incluida la financiación y ejecución de proyectos de reconstrucción. El número de personas que depositaron sus votos sumó 7,5 millones, lo que representa una participación del 51% del número total de 14,9 millones de posibles votantes en las 14 provincias iraquíes donde se celebraron las elecciones, quedando excluidas las tres provincias de la Región del Kurdistán (Arbil, Dahuk y Sulaymaniya) y Kirkuk, donde se decidió posponerlas hasta nueva orden. Estas elecciones fueron supervisadas por la Alta Comisión Electoral Independiente, con el apoyo de la Oficina de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI), y asistieron a ellas unos 800 observadores internacionales y miles de observadores locales. El resultado fue la elección de 440 miembros de consejos provinciales y cabe señalar que el 25% de estos fueron mujeres.

201. La segunda convocatoria de elecciones generales al Consejo de Representantes se celebró el 7 de marzo de 2010, a pesar de la ola de violencia que se había desatado en la mayoría de las partes del Iraq durante el período previo e incluso durante el día de las elecciones. Esto no impidió que los iraquíes participasen en las elecciones y ejercieran su derecho a elegir libremente sus representantes. La participación ascendió al 62,4% del electorado que en total sumaba 18,9 millones de votantes, siendo la participación más alta en la ciudad de Dahuk (80%) y la más baja en la ciudad de Amarah (50%). Durante anteriores elecciones especiales la participación más alta había sido del 55%. Un total de 167 entidades políticas y 12 grandes coaliciones presentaron a 6.281 candidatos (4.468 hombres y 1.813 mujeres) para los 310 escaños repartidos entre las 18 provincias, incluidos ocho escaños reservados a las minorías (cinco para cristianos y respectivamente uno para sabeo-mandeos, yazidíes y shabak) y siete escaños compensatorios para las listas que habían obtenido el mayor número de votos.

202. En las 18 provincias del Iraq se dispusieron un total de 8.312 colegios electorales y 49.088 mesas electorales, y en la zona internacional se abrieron 37 colegios electorales. Cabe mencionar que también se abrieron 109 colegios electorales para iraquíes residentes en el extranjero, de los que 272.016 depositaron su voto.

203. La Comisión Electoral iraquí designó 16 países en todo el mundo donde habría más de un colegio, a veces en más de una ciudad dentro de cada país, para que los iraquíes que viviesen en el extranjero pudiesen votar. Estos países se seleccionaron en base al número de iraquíes que vivían en esos países o en países vecinos.

204. Ninguna de las 183 reclamaciones oficiales registradas ni de las 381 reclamaciones privadas comunicadas por los observadores independientes que supervisaban el proceso electoral implicaba fraude electoral.

205. Las elecciones iraquíes fueron supervisadas por 1.447 observadores internacionales, dirigidos por Ad Melkert, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, que estuvo presente durante las elecciones en la ciudad de Kirkuk y que supervisó el recuento final. Una misión francesa en la que estaban integrados el vicepresidente de la Asamblea Nacional y un antiguo Ministro de Justicia visitó varias ciudades iraquíes y en seis ciudades del país estuvo presente una misión de la Liga Árabe. Las elecciones también fueron supervisadas por miembros del Parlamento Europeo y observadores independientes de Alemania y el Japón.

206. Desde el punto de vista de la seguridad, el día de las elecciones estuvo marcado por varios incidentes en la capital, Bagdad, donde las cifras de víctimas ascendieron a 38 personas muertas y más de 100 heridas, y más de 20 personas fueron arrestadas por planificar y llevar a cabo ataques terroristas contra los votantes.

Artículo 26

207. La República del Iraq subraya su compromiso con la aplicación de los pactos y tratados internacionales de derechos humanos, así como su creencia en la importancia de hacer efectivos los derechos allí reconocidos y, en particular, los enunciados en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. De acuerdo con el artículo 9 de dicha Convención, examinaremos los esfuerzos y logros en este ámbito, incluidos los pasos que se han dado para promover una cultura de rechazo de todas las formas de discriminación racial. La República del Iraq desea expresar su honda convicción en los valores humanos y su compromiso de colaborar con los organismos de las Naciones Unidas que defienden los derechos humanos.

208. En el artículo 2, párrafo 2, del capítulo dedicado a los principios fundamentales de la Constitución Permanente iraquí de 2005 se establece la siguiente disposición: "La presente Constitución protegerá la identidad islámica de la mayoría del pueblo iraquí y garantizará el pleno derecho a la libertad de creencia y de práctica religiosa de todas las personas, sean cristianas, yazidíes o sabeo-mandeas". En el artículo 3 se establece que: "El Iraq es un país multiétnico, multirreligioso y multiconfesional...". En el artículo 4, párrafo 1, se establece además que: "La lengua árabe y la lengua kurda serán las dos lenguas oficiales del Iraq. Estará garantizado el derecho de los iraquíes a educar a sus hijos en su lengua materna, como el turcomano, el siríaco o el armenio, en las instituciones educativas públicas, conforme a las normas educativas, o en cualquier otra lengua en instituciones educativas privadas". En los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 se reconocen los derechos culturales, educativos y políticos de las minorías, así como su derecho al acceso a la función pública. En las secciones de este informe en que se hace referencia a la aplicación de los artículos pertinentes de la Convención se mencionan otras disposiciones constitucionales que garantizan los derechos de las minorías.

209. Se han promulgado nuevas leyes y se han enmendado las ya existentes para garantizar los derechos de las minorías de conformidad con la Constitución en vigor. También debe mencionarse que los sucesivos Gobiernos iraquíes desde 2003 han adoptado una serie de medidas para eliminar la discriminación racial y proteger los derechos de las minorías de manera acorde con las obligaciones de la Convención.

210. La República del Iraq cree en los principios universalmente reconocidos de los derechos humanos, con los que está comprometida constitucionalmente, y se ha esforzado con diligencia por adoptar todas las medidas legales e institucionales necesarias para promover una cultura de respeto de los derechos humanos y el rechazo de todas las formas de discriminación racial. Uno de los logros más sobresalientes de la etapa posterior a 2003 ha sido el establecimiento de un Ministerio de Derechos Humanos para examinar y analizar la situación en relación con el ejercicio de dichos derechos, identificar las deficiencias y determinar las políticas que deben seguirse para corregirlas.

211. En este marco, la República del Iraq ha iniciado un examen de su historia reciente de violaciones masivas de derechos humanos y, para este fin, estableció la Fundación para los Mártires, la Fundación para los Presos Políticos, la Comisión de Reclamación de Propiedades Iraquíes, la Comisión Central, creada en virtud de la Ley N° 5 de 2009 (indemnización de las víctimas que han sufrido amputación o desfiguración a consecuencia de las prácticas del régimen dictatorial), y la Comisión de Indemnizaciones, creada en virtud de la Ley N° 20 de 2009 (indemnización de las víctimas de operaciones militares, errores militares y actos de terrorismo). Estas instituciones, tras haber recibido e investigado las reclamaciones de víctimas y haber organizado audiencias públicas en que las víctimas tuvieron la oportunidad de denunciar las violaciones a que fueron sometidas en el pasado como ejemplos de errores que no se deben repetir en el futuro, pudieron poner de

manifiesto la historia de violaciones masivas de derechos humanos, identificar a las víctimas y valorar las indemnizaciones que se les deben.

212. La República del Iraq reafirma su creencia en los principios de dignidad e igualdad de todos los seres humanos, su compromiso con los principios universalmente reconocidos de los derechos humanos, su firme condena de todas las formas de discriminación y su prohibición de cualquier tipo de desigualdad en su territorio.

213. En consonancia con las disposiciones de la Constitución, en particular, el artículo 14 del capítulo segundo (derechos y libertades), en el que se establece que los iraquíes son iguales ante la ley sin discriminación basada en el género, la raza, la etnia, el origen, el color, la religión, la confesión, la creencia o la opinión, los diferentes orígenes de la población iraquí, que incluye árabes, kurdos, turcomanos, asirios, musulmanes, cristianos, sabeo-mandeos, yazidíes y otros, han constituido y siguen constituyendo una rica fuente de diversidad que propicia la unidad en la medida en que una de las características distintivas del pueblo iraquí reside en el hecho de haber convivido unos con otros durante siglos.

214. El Gobierno iraquí se esfuerza por ofrecer un entorno político, social y económico propicio, caracterizado por la paz y la estabilidad, que es una condición básica para atribuir la suficiente prioridad a los derechos humanos en general y también al desarrollo humano, lo que incluye cuestiones como la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. La iniciativa "Pacto Internacional con el Iraq", que fue diseñada para establecer una nueva alianza con la comunidad internacional y lograr una visión nacional del Iraq que promueva la causa de la paz y el desarrollo socioeconómico y político en un período de cinco años, constituye un compromiso para cuyo cumplimiento se precisa una política gubernamental claramente definida.

215. Las políticas gubernamentales del país se basan en el principio del concepto soberano de la justicia social y su aplicación en las relaciones económicas y de producción, con el fin de lograr la complementariedad social y la integración. Las medidas que el Gobierno ha adoptado tienen por finalidad eliminar las prácticas que conducen a la segregación racial, asegurándose de que las normas y reglamentos administrativos y judiciales que aplican todas las instituciones gubernamentales prohíben la participación en actividades que pudiesen promover la división entre confesiones, tribus o facciones.

216. El Gobierno ha afirmado su compromiso de practicar una política de eliminación de todas las formas de discriminación racial en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, así como de apoyar a las instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos y de ofrecer un marco legislativo adecuado para eliminar todas las formas de discriminación dentro del horizonte del concepto general del desarrollo de la cohesión social.

217. El compromiso del Iraq de eliminar la discriminación dentro de su territorio y de promover el principio de igualdad de todas las personas ante la ley se pone de relieve con la promulgación por el Legislativo de disposiciones que garantizan que las condiciones en que se encuentran los reclusos y detenidos en los centros correccionales cumplen las normas internacionales sobre trato humano y no discriminatorio de los reclusos. En la sección II de la Ley de administración de cárceles se estipula que las normas establecidas por ley deben aplicarse de forma imparcial y sin discriminación, lo que es conforme con las disposiciones del artículo 14 del capítulo segundo de la actual Constitución iraquí ("Los iraquíes son iguales ante la ley, sin discriminación...").

218. Con respecto a la situación de la mujer en general se han realizado considerables esfuerzos para combatir la discriminación mediante la promulgación de una serie de medidas legislativas y enmiendas que ponen el acento en el principio de la igualdad de todos y prohíben cualquier forma de discriminación basada en el género. Como ejemplo de las disposiciones de este tipo cabe citar la Ley de nacionalidad, N° 26 de 2006, en la que se

sitúa al hombre y la mujer en pie de igualdad en lo que se refiere a la transmisión de la nacionalidad iraquí a los hijos nacidos de padre o madre iraquí.

219. La integración del Iraq en el sistema internacional de derechos humanos se ilustra por: su firma y ratificación de varios instrumentos sobre derechos humanos; su retirada de varias reservas con respecto a estos; su presentación de informes periódicos a los organismos pertinentes de los tratados de las Naciones Unidas, cuyas observaciones toma en consideración; su respuesta a los informes recibidos de Estados y organizaciones internacionales interesados en los derechos humanos; y su presentación del Examen Periódico Universal nacional, que supone un paso importante hacia el cumplimiento por el Iraq de sus obligaciones internacionales, puesto que este informe ha dado la oportunidad al Iraq de ofrecer una visión de su política general sobre derechos humanos, los compromisos que ha adquirido y las medidas que ha adoptado para reforzar el marco jurídico e institucional en esta esfera.

220. El Iraq participa activamente en los esfuerzos internacionales por promover los principios de los derechos humanos mediante la creación de mecanismos nacionales que protejan y preserven estos derechos. Entre las instituciones gubernamentales encargadas de promover y proteger los derechos humanos cabe destacar, en particular, el Ministerio de Derechos Humanos, al que se le encomendó la tarea de salvaguardar, defender y promover los principios de los derechos humanos y asegurar que todas las personas, sin discriminación, gocen de los derechos y libertades fundamentales. De conformidad con los Principios de París, en la Ley N° 53 de 2008 se dispuso el establecimiento de una Comisión de Derechos Humanos que está en la fase final de su formación, como institución nacional independiente con un amplio mandato.

221. El Parlamento ejerce su poder legislativo y sus facultades constitucionales, que le habilitan para desempeñar un papel fundamental en la protección de los derechos humanos mediante diversos mecanismos y medios de intervención. El Parlamento está dotado de las capacidades para contribuir a la promoción de los derechos humanos en el Iraq por medio de sus mecanismos internos y reglamentarios puesto que, de acuerdo con sus normas de funcionamiento, cuenta con comités parlamentarios, como el comité de derechos humanos o el comité de la mujer y la infancia, que están estrechamente relacionados con la protección de los derechos humanos.

222. Desde el punto de vista de la no discriminación, los derechos humanos de mujeres y niños están garantizados por la Constitución y los compromisos del Iraq en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que constituyen el marco normativo para la promoción y protección de los derechos humanos de mujeres y niños, que representan una parte importante (más del 50%) de la población total. Estos dos grupos de personas fueron de los más afectados por la volátil situación de los derechos humanos, incluidas las repercusiones de las operaciones de desplazamiento forzoso, los cambios demográficos, las guerras sucesivas y los consiguientes actos de violencia y terrorismo después del cambio de régimen en 2003. También influyó negativamente en su goce de los derechos humanos en general factores relacionados con la falta de servicios y mecanismos de protección, y la cultura y las prácticas sociales dominantes. Los actos de terrorismo a los que se vio expuesto el país dejaron decenas de miles de viudas y huérfanos, añadiendo así más carga sobre las mujeres, entre las que se afianzó el fenómeno social de ser ellas las proveedoras básicas de la familia. Sin embargo, a pesar de esta situación, existen aspectos positivos en relación con el goce por las mujeres de sus derechos, como los ejemplos que se mencionan a continuación:

a) El establecimiento de una estructura institucional para los asuntos de la mujer y la familia, que está compuesta por el Ministerio Estatal para los Asuntos de la Mujer, el Comité sobre la Mujer, la Familia y la Infancia en el Consejo de Representantes, el

Departamento de Protección Social de la Mujer, dependiente de la Oficina del Primer Ministro, la Dirección de Protección Familiar encargada de la prevención de la violencia doméstica contra las mujeres, el Cuerpo de Policía Comunitaria y la Comisión de Protección de la Infancia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

b) El desarrollo de un marco jurídico que hace hincapié en los principios constitucionales de la igualdad, como se pone de manifiesto en disposiciones tales como la Ley de nacionalidad promulgada en 2006, en la que se elimina la discriminación entre hombres y mujeres en relación con la adquisición de la nacionalidad por sus hijos, y el interés especial mostrado por asegurar la participación de las mujeres en las decisiones nacionales por medio de la asignación a estas de una cuota del 25% de los escaños en el Parlamento y en los consejos provinciales.

c) La adopción de una política gubernamental de promoción del avance de la mujer en todas las esferas de la vida mediante el establecimiento de un Departamento de Policía Comunitaria para protegerlas contra la violencia y asegurar la atención y rehabilitación de las víctimas de este tipo de violencia. En virtud de la Orden Presidencial N° 80 se estableció un comité ministerial para la prevención de la violencia contra la mujer y se aplicó una política de ampliación de la cobertura de la red de protección social para incluir otras categorías de mujeres (solamente en la red de protección social de Bagdad a finales de 2008 se habían incluido 86.095 viudas, 2.939 divorciadas y 1.114 mujeres abandonadas). También se ha presentado un proyecto de ley para que el Departamento de la Red de Protección Social extienda su cobertura social a familias pobres.

d) Los reglamentos del Ministerio de Educación no permiten la discriminación de género en ninguna etapa de la enseñanza, desde el jardín de infancia hasta la universidad, puesto que se garantiza el principio de la igualdad de género para la matriculación en la educación general, técnica y profesional, y en todos los tipos de formación profesional. Esta garantía incluye la igualdad en relación con los planes de estudio, los exámenes, el nivel de calificación de los docentes y las normas sobre las instalaciones y equipos académicos; el fomento de la coeducación como forma distintiva de educación que propicia el logro de este objetivo, en particular mediante la revisión de los libros de texto y los programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; la igualdad de oportunidades en relación con la obtención de becas escolares u otras prestaciones; la igualdad de oportunidades para beneficiarse de otros programas educativos, como la educación de adultos y los programas de alfabetización funcional y, en particular, los diseñados para reducir cualquier diferencia de género en la enseñanza de la forma más rápida posible; y la igualdad de oportunidades para participar en actividades (deportes y educación física).

223. Las mujeres iraquíes tienen un papel activo en todas las esferas de la vida y, desde 2003, han ocupado numerosos puestos que antes se reservaban a los hombres. De acuerdo con el principio de la igualdad de acceso a la función pública, las mujeres ocupan el 25% de los escaños en el actual Parlamento iraquí y también detentan carteras ministeriales y ocupan altos puestos, como los de directora general, experta, directora general adjunta, consejera y subsecretaria.

224. El Iraq ha mostrado una preocupación especial por la situación de los niños y ha adoptado numerosas medidas para proteger esta categoría social, en particular, dando efecto a los instrumentos internacionales sobre los derechos del niño y adhiriéndose a los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se ha establecido una Comisión de Protección de la Infancia, presidida por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y que incluye a representantes de varios ministerios interesados, entre ellos, el Ministerio de Derechos Humanos, para mejorar la situación de los niños iraquíes y asegurar la protección y la dignidad humana de los más vulnerables (niños de la calle). Entre los esfuerzos importantes que el Iraq realiza en esta esfera cabe mencionar el establecimiento

de una dirección en el Ministerio del Interior para solucionar el problema del vagabundo, además de los albergues que el Ministerio de Trabajo ha abierto para los niños vagabundos con problemas con la ley. También se ha promulgado una disposición que prohíbe la importación de juegos o juguetes que fomenten la violencia entre los niños, pongan en peligro su salud o tengan efectos adversos sobre su comportamiento.

Artículo 27

225. La República del Iraq desea subrayar que su población es un solo pueblo con una sola identidad enriquecida por sus numerosas fuentes y componentes culturales. Es un país que experimenta la unidad en la diversidad.

226. La identidad sociocultural de las minorías étnicas y religiosas del Iraq está protegida por los instrumentos legislativos que muestran la consideración debida a sus particularidades, y en primer lugar por la Constitución iraquí, que garantiza los plenos derechos de todas las personas a la libertad de creencia y de práctica religiosa. Sus derechos políticos, culturales y educativos están garantizados por los numerosos artículos de la Constitución en que se exponen los fundamentos firmes de la gobernabilidad democrática y los derechos humanos, incluyendo los derechos de todas las minorías que, por primera vez, han sido reconocidas en pie de igualdad como elementos constituyentes integrales del pueblo iraquí. En este sentido, la Constitución actual se distingue claramente de las precedentes, en la medida en que reconoce que todos los iraquíes tienen los mismos derechos y obligaciones. En el artículo 2, párrafo 2, del capítulo primero (principios fundamentales) se establece que: "La presente Constitución protegerá la identidad islámica de la mayoría del pueblo iraquí y garantizará el pleno derecho a la libertad de creencia y de práctica religiosa de todas las personas, sean cristianas, yazidíes o sabeo-mandeas". En el artículo 14 del capítulo segundo (derechos y libertades), se estipula que: "Los iraquíes son iguales ante la ley, sin discriminación por razones de género, raza, etnia, origen, color, religión, confesión, creencia, opinión o condición económico o social". Según los términos del artículo 41 del mismo capítulo: "Los iraquíes serán libres de regular asuntos relativos a su estatuto personal de acuerdo con su religión, confesión, creencia o elección". Además, en el artículo 43 se establece que: "1. Los seguidores de cualquier religión o credo serán libres de practicar sus ritos religiosos y gestionar sus fundaciones pías, actividades e instituciones religiosas. 2. El Estado garantiza la libertad de culto y la protección de los lugares de culto". En otros artículos también se pueden encontrar disposiciones similares.

227. Las minorías del Iraq son las siguientes:

a) Cristianos

228. Hay 14 denominaciones cristianas en el Iraq: caldea; asiria (Iglesia Oriental); asiria católica (Antigua Iglesia Oriental); siríaca ortodoxa; siríaca católica; armenia ortodoxa; armenia católica; griega ortodoxa; griega católica; latina; protestante evangélica nacional; presbiteriana evangélica asiria; adventista del Séptimo Día; y ortodoxa copta. La población cristiana que vive en el Iraq se ha reducido, pasando de 1.200.000 a 500.000 personas aproximadamente. Según las estadísticas recopiladas por dependencias del Ministerio de Desplazamientos y Migraciones y el Consejo de las Fundaciones Pías de la Iglesia Cristiana, unas 8.000 familias fueron desplazadas, especialmente en la Región del Kurdistán, durante el período de 2003 a finales de 2011, y 454 personas perdieron la vida. Hay 276 iglesias cristianas, de las cuales 113 están en Bagdad, y 42 han sido objeto de ataques terroristas.

b) Sabeo-mandeos

229. Los sabeos son habitantes autóctonos del Iraq y viven en las orillas de los ríos Tigris y Éufrates, ya que el agua y la purificación juegan un papel muy importante en su vida religiosa y espiritual. Tienen siete lugares de culto (*mandis*) en el Iraq, uno de ellos situado en Bagdad (donde se estableció la sede de la comunidad en 1985) y los otros en las provincias de Basora, Maysan, Dhi Qar, Arbil, Kirkuk y Diwaniya. Aunque no existan estadísticas precisas de la población sabeo-mandea, su número probablemente ronda las 10.000 a 12.000 personas en el Iraq y algunas viven en otros países. Los sabeo-mandeos no están autorizados a contraer matrimonio fuera de su comunidad y el matrimonio solo es válido legalmente y aceptable si se ha cumplido una determinada serie de ritos religiosos. Desde 2003, ha perdido la vida un total de 156 personas pertenecientes a esta minoría y 353 familias han sido desplazadas.

c) Yazidíes

230. Los yazidíes siguen una religión muy antigua cuyos orígenes se remontan a más de 3.000 años. Su comunidad se concentra en el norte del Iraq, especialmente en el área de Shaykhan (la sede del Emirato yazidí), en los subdistritos de Bashiqa y Bahazán, el distrito de Sinjar y algunos pueblos y distritos como Semel y Zakho en las provincias de Dahuk y Arbil. Los yazidíes se dividen en cuatro castas religiosas endogámicas y tienen prohibido casarse fuera de su religión. Los yazidíes consienten la poligamia según su religión, pero solo pueden contraer matrimonio con mujeres de su mismo clan.

d) Turcomanos

231. Los turcomanos son un componente autóctono de la sociedad iraquí, y conforman el tercer grupo étnico más numeroso, después de árabes y kurdos. Aunque se concentran en Kirkuk, se encuentran también entre el noroeste y el sudeste del Iraq y en todas las grandes ciudades. Han participado activamente en campañas políticas y han formado partidos políticos y más de 15 asociaciones socioculturales. En poco tiempo, han elegido líderes del movimiento político turcomano, que se caracteriza por sus exigencias culturales y lingüísticas para la preservación de la identidad turcomana y de su singularidad, y por su rechazo de las campañas gubernamentales de arabización en sus áreas. El Frente Turcomano se formó en abril de 1997 con la confluencia de cuatro partidos y organizaciones de carácter étnico (el Partido Nacional Turcomano, el Partido Turkemeneli, el Club de la Hermandad Turcomana y el Movimiento Independiente Turcomano). En las elecciones del 30 de enero de 2005, obtuvieron 13 escaños en la Asamblea Nacional.

e) Shabak

232. Las opiniones difieren entre los investigadores y los escritores sobre los orígenes de los shabak. Según la opinión más extendida, se entiende que los shabak tienen orígenes heterogéneos, puesto que en árabe su nombre quiere decir "enredo", aludiendo así a que descienden de uno o más de los numerosos grupos étnicos de la región, o se han mezclado con ellos. Sus creencias religiosas son islámicas y veneran un libro conocido como el Buyuruq (Suma de las virtudes), escrito en su antigua lengua turcomana autóctona, que se entregan de mano en mano durante sus ceremonias rituales. Su lengua o dialecto puede remontarse al protoindoiranio (ario) con influencias foráneas atribuibles a los movimientos geográficos de grupos etnoculturales (persas, turcos, árabes y kurdos). La mayoría de los shabak viven en las llanuras de Nínive.

f) Kurdos feyli

233. Los kurdos feyli sufrieron de forma exacerbada desplazamientos forzosos y deportaciones por el hecho de que se alegaba que eran ciudadanos iraníes. No obstante,

después de 2003, se les dio esperanzas de que, en el nuevo entorno político, recuperarían sus derechos usurpados, especialmente cuando el Director Civil Paul Bremer dio la orden de revocar el Decreto Nacional N° 666 de 1980 y de establecer la Comisión de Reclamación de Propiedades Iraquíes. Ahora participan en la vida política, tienen escaños en el Consejo de Representantes y ocupan puestos en el gobierno iraquí. Cabe mencionar que el régimen dictatorial despojó de la nacionalidad iraquí a cientos de miles de kurdos feyli en aplicación del Decreto N° 666 de 7 de mayo de 1980 del (disuelto) Consejo de Mando de la Revolución, los expulsó por la fuerza del Iraq y abandonó a miles de familias en la frontera entre el Iraq y el Irán. Tras el derrocamiento del régimen en 2003 y el establecimiento del Tribunal Supremo Penal iraquí, la cuestión de la retirada de la nacionalidad iraquí a los kurdos feyli, su expulsión forzosa y la confiscación de sus bienes muebles e inmuebles se incluyeron entre aquellas que el Tribunal admitió. Finalmente, el 29 de noviembre de 2010, dicho Tribunal sentenció que esos actos constituían crímenes de genocidio. La sentencia fue asumida por el Consejo de Ministros que, en su Decisión N° 426 aprobada en su 48ª sesión, de 8 de diciembre, aprobó la propuesta de establecer una comisión nacional independiente para dar solución al trato injusto que sufrieron los kurdos feyli. La comisión se formaría después de una serie de reuniones y la constituirían jueces y políticos a los que se les encargaría la responsabilidad de afrontar cuestiones relacionadas con los mártires, el cuidado de sus familias, la recuperación por las víctimas de la nacionalidad y de los bienes robados o incautados, el retorno de los migrantes y desplazados, el resarcimiento de los daños de carácter físico y moral sufridos, y la promulgación de las leyes necesarias para que se materialicen sus derechos legales, económicos y de otro tipo.

234. La representación de las minorías en los consejos provinciales, mediante la asignación de una cuota de escaños, estuvo garantizada después de la ratificación parlamentaria de la Ley N° 44 de 2008, que enmienda el artículo 2, párrafo 1, y el artículo 50 de la Ley N° 36 de 2008 relativa a los consejos electorales provinciales, de distrito y de subdistrito. Su representación en el nuevo Consejo de Representantes también quedó garantizada por la asignación de ocho escaños (cinco para los cristianos y uno respectivamente para las comunidades sabea, yazidí y shabak), basada en la presencia proporcional de esas minorías en las provincias. Varios de sus miembros han ocupado puestos de alto nivel en el Gobierno, tales como ministros, subsecretarios, embajadores y directores generales, etc. Se ha creado un Consejo de Fundaciones Pías, que incluye direcciones para los cristianos, los yazidíes y los sabeos, con el fin de gestionar las actividades de estas minorías religiosas iraquíes, como sucede con los Consejos de Fundaciones Pías Sunní y Chií, y también se ha establecido en el Iraq un Consejo de Jefes de Comunidades Cristianas.

235. Las principales violaciones cometidas contra miembros de minorías desde el derrocamiento del régimen dictatorial son:

a) Actos de homicidio

236. Muchos miembros de minorías, incluidos responsables religiosos, recibieron la muerte o fueron secuestrados debido a su afiliación religiosa o a la práctica de un oficio específico (como el caso de los orfebres sabeo-mandeos) o a consecuencia del terrorismo y de otros actos de violencia. En el siguiente cuadro se muestran las cifras de personas que perdieron la vida durante el período de 2003 a 2010, de acuerdo con las estadísticas recogidas por el Consejo de Fundaciones Pías de la religión cristiana y de otras religiones y el Ministerio del Interior, y los jefes de las comunidades religiosas.

<i>Minoría</i>	<i>Número total</i>	<i>Número de víctimas</i>
Cristianos	1 200 000	439
Sabeos	12 000	156
Yazidíes	500 000	490
Shabak	200 000	529

b) Desplazamientos y migraciones forzosas

237. Numerosas familias pertenecientes a minorías fueron sometidas a desplazamientos y migraciones forzosas a consecuencia de la inestabilidad de la situación de seguridad en zonas calientes como las provincias de Bagdad y Mosul. Algunas de ellas encontraron refugio temporal fuera del Iraq en países vecinos como Siria y Jordania, y otras se dirigieron a la Región del Kurdistan y otras zonas seguras del Iraq. En el siguiente cuadro se indican las cifras de familias que se vieron forzadas a desplazarse o migrar, de acuerdo con las estadísticas recopiladas por el Ministerio de Desplazamientos y Migraciones y el Consejo de Fundaciones Pías de la religión cristiana y de otras religiones.

	<i>Cristianos</i>	<i>Sabeo-mandeos</i>	<i>Yazidíes</i>	<i>Shabak</i>	<i>Turcomanos</i>	<i>Kurdos feyli</i>
Número de familias desplazadas	6 231	353	289	378	2 349	14

Esfuerzos gubernamentales por proteger los derechos de los miembros de minorías en el Iraq

238. En el artículo 117, párrafo 1, de la actual Constitución iraquí se establece que: "Cuando entre en vigor esta Constitución, la Región del Kurdistan será reconocida como región federal y mantendrá sus actuales autoridades". En el artículo 4 de la Constitución iraquí se establece además que:

1. La lengua árabe y la lengua kurda serán las dos lenguas oficiales del Iraq. Estará garantizado el derecho de los iraquíes a educar a sus hijos en su lengua materna, como el turcomano, el siríaco o el armenio, en las instituciones educativas públicas, conforme a las normas educativas, o en cualquier otra lengua en instituciones educativas privadas.
2. El alcance de la expresión "lengua oficial" y la forma de aplicación de las disposiciones de este artículo estarán definidas por ley, lo que incluirá:
 - a) La publicación del Boletín Oficial en las dos lenguas;
 - b) La posibilidad de hablar, dialogar y expresarse en entornos oficiales, como en el Consejo de Representantes, el Consejo de Ministros, los tribunales y las conferencias oficiales, en cualquiera de las dos lenguas;
 - c) La admisión y la publicación de documentos oficiales y de la correspondencia oficial en las dos lenguas;
 - d) La apertura de escuelas en las que se enseñe en las dos lenguas de acuerdo con las normas educativas;
 - e) La utilización de ambas lenguas en cualquier otro contexto, como en los billetes de banco, los pasaportes y los sellos, conforme al principio de igualdad.
3. Las instituciones federales y los organismos oficiales de la Región del Kurdistan utilizarán ambas lenguas.

239. El 21 de abril de 2008, el Gobierno Federal promulgó la Decisión N° 15/Federal/2008 por la que se autorizaba la redacción en árabe, kurdo, turcomano y siríaco de los rótulos en los departamentos pertenecientes a la provincia de Kirkuk, de conformidad con las disposiciones del artículo 4, párrafo 4, de la Constitución. Con respecto a los derechos culturales, los miembros de minorías étnicas y religiosas disponen en la actualidad de órganos judiciales que hablan kurdo, turcomano, asirio y siríaco, además de revistas y libros publicados en estas lenguas.

240. En el artículo 4, párrafo 4, de la Constitución iraquí se establece que: "Las lenguas turcomana y siríaca serán otras dos lenguas oficiales en las unidades administrativas que tengan una población numerosa de hablantes de las mismas". Además, de acuerdo con las disposiciones del párrafo 1 y de los apartados a), b) y c) del párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, se han aprobado enmiendas legislativas al Código Penal (Ley N° 111 de 1969) para asegurar que todos los ciudadanos sean tratados en igualdad de condiciones.

241. Las minorías gozan de protección de la seguridad de sus lugares de culto y algunos de sus miembros han entrado en la policía y las fuerzas armadas. Los incidentes en que sus miembros han perdido la vida, han sido secuestrados o desplazados a la fuerza se investigan a fin de determinar las medidas de seguridad que es necesario aplicar para garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas a todas las provincias. Se han adoptado medidas excepcionales para garantizar la protección necesaria de los estudiantes cristianos de la Universidad de Mosul, que suman unos 1.300 y que son escoltados desde sus casas y hasta ellas en las llanuras de Nínive después de los repetidos actos terroristas de los que fueron objeto. Se han enviado vehículos de patrulla y agentes de tráfico de la policía para facilitar los desplazamientos de los responsables religiosos que, a este respecto, reciben el mismo trato especial que otros funcionarios superiores.

242. El Ministerio de Municipios y Obras Públicas está realizando esfuerzos concertados para proteger las propiedades de inmuebles de minorías, y ha dado instrucciones a sus departamentos en las provincias de Mosul, Kirkuk, Basora, Maysan, Diwaniya y Diyala para corregir las ocupaciones anteriores de propiedades de minorías en esas provincias, como lugares de culto y cementerios, ofreciéndoles nuevos lotes de terreno en los que puedan establecer nuevos lugares de culto y cementerios.

243. El Ministerio de Derechos Humanos está ejecutando un proyecto en el que el personal docente recibe formación sobre los principios de tolerancia social y convivencia para que puedan infundirlos en los alumnos de determinadas zonas de los distritos de Karkh y Rusafa, en Bagdad, donde las escuelas reciben niños procedentes de minorías, y este proyecto se va a ampliar a escuelas de otras provincias.